



REPÚBLICA ARGENTINA
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
(PROVISIONAL)

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

8º Reunión - 7º Sesión ordinaria - 20 y 21 de agosto de 2009

Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, Don **Julio César Cleto Cobos**,
del señor presidente provisional del H. Senado, senador **José Juan Bautista Pampuro**,
del señor vicepresidente del H. Senado, senador **Rubén Hugo Marín**
y del señor vicepresidente 1º del H. Senado, senador **Juan Carlos Marino**
Secretarios: señor D. **Juan Héctor Estrada** y señor D. **Jorge Luis Alberto Tieppo**
Prosecretarios: señor D. **Juan J. Canals**, señor D. **Mario Daniele** y
señor D. **Gustavo Carlos Vélez**

PRESENTES

BANICEVICH, Jorge Esteban
BASUALDO, Roberto Gustavo
BIANCALANI, Fabio Darío
BONGIORNO, María José
BORTOLOZZI de BOGADO, Adriana Raquel
CABANCHIK, Samuel Manuel
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric
CASTILLO, Oscar Aníbal
COLAZO, Mario Jorge
COLOMBO DE ACEVEDO, María Teresita Del Valle
CORRADI DE BELTRÁN, Ana María
CORREGIDO, Elena Mercedes
DÍAZ, María Rosa
ESCUDERO, Sonia Margarita
ESTENSSORO, María Eugenia
FELLNER, Liliana Beatriz
FERNÁNDEZ, Nicolás Alejandro
FILMUS, Daniel Fernando
FUENTES, Marcelo Jorge
GALLEGO, Silvia Ester
GIOJA, César Ambrosio
GIUSTI, Silvia Ester
GIUSTINIANI, Rubén Héctor
GONZÁLEZ DE DUHALDE, Hilda Beatriz
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Ángel
GUINLE, Marcelo Alejandro Horacio
ITURREZ DE CAPELLINI, Ada del Valle
JENEFES, Guillermo Raúl
LATORRE, Roxana Itatí
LORES, Horacio
MARÍN, Rubén Hugo
MARINO, Juan Carlos
MARTÍNEZ, Alfredo Anselmo
MARTÍNEZ, José Carlos
MAYANS, José Miguel Ángel
MAZA, Ada Mercedes
MENEM, Carlos Saúl
MIRANDA, Julio Antonio
MORALES, Gerardo Rubén
NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita
NIKISCH, Roy Abelardo
OSUNA, Blanca Inés
PAMPURO, José Juan Bautista
PARRILLI, Nanci María Agustina
PERCEVAL, María Cristina
PÉREZ ALSINA, Juan Agustín
PÉRSICO, Daniel Raúl
PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos
PICHETTO, Miguel Ángel
PINCHETTI de SIERRA MORALES, Delia Norma
QUINTELA, Teresita Nicolasa
RACHED, Emilio Alberto
REUTEMANN, Carlos Alberto

RÍOFRÍO, Marina Raquel
RÍOS, Roberto Fabián
RODRÍGUEZ SAA, Adolfo
ROMERO, Juan Carlos
ROSSI, Carlos Alberto
SAADI, Ramón Eduardo
SALAZAR, Carlos Eduardo
SÁNCHEZ, María Dora
SANZ, Ernesto Ricardo
TORRES, Eduardo Enrique
TROADELLO, Mónica
VERA, Arturo
VERANI, Pablo
VIANA, Luis Alberto
VIUDES, Isabel Josefa

AUSENTES CON AVISO

GIRI, Haide Delia
MASSONI, Norberto
URQUÍA, Roberto Daniel

CON LICENCIA

VIGO, Élida María

SUMARIO

1. Izamiento de la bandera nacional
2. Homenaje al general don José de San Martín
3. Asuntos Entrados
4. Pedido de licencia de señora senadora
5. Plan de labor
6. Acuerdos
 - OD-237/09: Jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal
 - OD-238/09: Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal
 - Juez del Tribunal Oral Criminal Federal Nro. 2 de Córdoba
 - Juez Federal de Azul, provincia de Buenos Aires
7. Régimen jubilatorio especial
8. Consideración en conjunto de órdenes del día
 - OD-274: Medidas para que la Argentina firme la Convención sobre Municiones de Racimo, adoptada en Dublin, Irlanda , el 30 de mayo de 2008 .
 - OD-290: Plan de emisión y sellos postales de correo oficial para el año en curso, uno conmemorativo de los 15 años de la reforma de la Constitución Nacional.
9. Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios
 - OD-299/09: Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios
 - OD-300/09: Zona de desastre agropecuario y forestal
 - OD-301/09: Zona de desastre y emergencia agropecuaria
 - OD-302/09: Zona de desastre agropecuario y emergencia económica y social
 - OD-303/09: Emergencia agropecuaria
 - OD-304/09: Zona de desastre y emergencia agropecuaria
 - OD-305/09: Zona de emergencia agropecuaria
 - OD-306/09: Zona de emergencia agropecuaria
 - OD-307/09: Zona de desastre y emergencia económica
 - CD-50/09: Zona de emergencia y desastre agropecuario
10. OD-293/09: Ratificación de delegaciones legislativas
11. OD- 292: Modificación de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
12. Manifestaciones
13. Manifestaciones en minoría.
14. Apéndice.
 - I. Plan de labor parlamentaria
 - II. Asuntos entrados
 - III. Asuntos considerados y sanciones del H. Senado
 - IV. Actas de votación
 - V. Inserciones

Nota: Los asuntos cuyos textos fueron leídos por Secretaría se incluyen en la versión taquigráfica; el resto figura en el Apéndice.

— *En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 11 y 48 del jueves 20 de agosto de 2009:*

Sr. Presidente. — La sesión está abierta.

1. Izamiento de la bandera nacional

Sr. Presidente. — Invito a la señora senadora por Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, María Rosa Díaz, a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.

- *Puestos de pie los presentes, la señora senadora Díaz procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)*

2. Homenaje al general don José de San Martín

Sr. Presidente. — En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se convino rendir homenaje al general don José de San Martín, al haberse conmemorado un nuevo aniversario de su fallecimiento. Se presentaron diversos proyectos.

Por Secretaría se procederá a dar lectura al texto unificado.

— *El texto es el siguiente:*

Texto unificado

Sr. Presidente. — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— *Se practica la votación.*

Sr. Presidente. — Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.

3. Asuntos Entrados

Sr. Presidente. — Conforme lo dispuesto en el artículo 187 del Reglamento, se informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la nómina de asuntos ingresados para que eventualmente los señores senadores se sirvan formular manifestaciones que estimen pertinentes.

Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdos, a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Senado.

Sr. Secretario (Estrada). — “Mensaje del Poder Ejecutivo número 1.063/09 por el que se solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2008 al personal militar superior de la Fuerza Aérea vicecomodoro Gustavo H. Astini.

“Mensaje del Poder Ejecutivo número 1.069/09 por el que se solicita acuerdo para designar director del Banco Central de la República Argentina al doctor Sergio M. Chodos.

“Mensaje del Poder Ejecutivo número 1.071/09 para designar síndico titular del Banco Central de la República Argentina al contador público nacional don Hugo C. Álvarez.

4. Pedido de licencia de señora senadora

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura a un pedido de licencia formulado por una señora senadora..

Sr. Secretario (Estrada). — La senadora Élide María Vigo solicita licencia por razones de salud a partir del 19 de agosto y por el lapso de treinta días.

Sr. Presidente. — Con goce de haberes

Sr. Secretario (Estrada). — Sí.

Sr. Presidente. — En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— *Se practica la votación.*

Sr. Presidente. — Aprobada.¹

5. Plan de labor

Sr. Presidente. — Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en el plenario celebrado ayer.

Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: he pedido la palabra para solicitar el tratamiento sobre tablas de dos iniciativas. La primera de ellas lleva el número de expediente S. 2.883/08 y es de mi autoría. Y la segunda es un proyecto S. 2661/08 de los senadores Rached e Iturrez

¹ Ver el Apéndice.

de Cappellini, que trata justamente de la declaración de emergencia en distintas localidades de las provincias de Formosa y Santiago del Estero. Solicito que se reserven estos proyectos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: con mucho gusto nuestro bloque está dispuesto a tratar la cuestión de la emergencia de Santiago del Estero porque ha habido simplemente una omisión en el tratamiento de la comisión; por supuesto, no se firmó el dictamen sin intención. Así que estamos dispuestos a incorporarla; vamos a acompañar este pedido de tratamiento sobre tablas. Sin embargo, en el caso de Formosa queremos tratarla en comisión; además queremos enmarcarla también en la emergencia nacional.

Por lo tanto, estamos de acuerdo con el primer proyecto sobre Santiago del Estero. Respecto del otro proyecto, hay un compromiso del senador Mayans de sentarse con el senador Naidenoff y abordar este tema, para lo cual tenemos toda la predisposición.

Sr. Presidente. — Reservamos en mesa el proyecto sobre emergencia de Santiago del Estero.

Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. — Solicito preferencia para el tratamiento en la próxima sesión de este proyecto de declaración porque, si bien contiene asignaciones específicas, no hay inconveniente en modificar la asignación y que las facultades se reserven, en este caso, al Poder Ejecutivo. Me parece que urge el tratamiento.

Sr. Presidente. — En consideración la preferencia para la próxima reunión, con despacho de comisión.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

— *Se practica la votación.*

Sr. Presidente. — Aprobado.

Tiene la palabra el señor senador José Martínez.

Sr. Martínez (J.C.) . — Señor presidente: a los efectos de ratificar lo que se acordó ayer en la reunión de labor parlamentaria, solicito preferencia para la próxima sesión, con o sin despacho de comisión, para el expediente CD 31/09 relativo a impuestos sobre productos tecnológicos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: ayer nos hemos comprometido todos los bloques en presencia suya; estamos de acuerdo en el tratamiento de este proyecto de ley.

Sr. Presidente. — En consideración la preferencia para la próxima reunión.

Si no se hace uso de la palabra, se va votar.

— *Se practica la votación.*

Sr. Presidente. — Aprobado.

Corresponde considerar el plan de labor aprobado en el plenario de labor parlamentaria celebrado ayer.

En consideración.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— *Se practica la votación.*

Sr. Presidente. — Aprobado.²

(...)

² Ver el Apéndice.

10. OD-293/09: Ratificación de delegaciones legislativas

Sr. Presidente. — Corresponde la consideración de los Ordenes del Día con proyectos de ley que por Secretaría se enunciarán

Sr. Secretario (Estrada). — Dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley en revisión por el que se ratifica la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública. (Expediente CD 49/09).

Sr. Presidente. — En consideración.

Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto. — Señor presidente: voy a pedir si podemos elaborar la lista de oradores, proceder a votarla, habilitar las inserciones y establecer una hora estimativa de votación para dar previsibilidad a la sesión.

Sr. Presidente. — Recuerdo que ayer se convino en utilizar 10 minutos para cada orador y 30 minutos para los miembros informantes y presidentes de bloque. Con ese criterio, vamos a comenzar a elaborar la lista de oradores.

Tiene la palabra el señor senador Fernández como miembro informante.

Sr. Fernández. — Señor presidente: si está la lista, la podemos votar.

Sr. Presidente. — Mientras usted informa, vamos terminando de redondear la lista de oradores.

Sr. Fernández. — Perfecto.

Cuando se sancionó la Reforma Constitucional de 1994, se creó el artículo 76, que prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, la cláusula transitoria octava de la Constitución establece que la legislación delegada preexistente a la Reforma que no contenga plazo establecido para su ejercicio caduca a los cinco años de la sanción de esa Constitución, salvo que el Congreso expresamente ratifique su vigencia.

Esta caducidad masiva de normas dio como resultado que, en agosto de 1999, se sancionara la Ley 25146, que por primera vez prorrogó por tres años la vigencia de esta delegación. Con posterioridad, y a los tres años, se sancionó la Ley 25645, que nuevamente prorrogó por dos años la caducidad masiva de las normas. Luego, en agosto de 2004, la Ley 25918 vuelve a prorrogar la vigencia de la normas y, finalmente, la Ley 26135, dictada el 16 de agosto de 2006, la prorroga nuevamente hasta agosto del presente año. En esa situación, podemos decir que el 24 de agosto de este año correspondería la caducidad masiva de todas aquellas normas que efectivamente sufrieron distintas prórrogas de vigencia como consecuencia de las sanciones del Congreso.

Ahora bien, ¿cuáles son las normas delegadas a las que hacemos referencia? Aquí es donde nos vamos a encontrar con alguna disparidad de información. En 1999, mientras se debatía este asunto en la Comisión de Asuntos Constitucionales, el IFEP —el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios— hizo referencia a que, más o menos, había 1.900 ó 1.901 normas. Este informe fue evaluado el 16 de junio por el entonces presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el ex senador Yoma, quien, respecto del estudio del Instituto Federal, manifestó que, independientemente del trabajo que se había efectuado —que era destacado y muy bueno—, no se podía determinar cuál era la calificación por materias ni se podía deducir qué normas efectivamente habían caducado por vigencia de plazo o no.

A fin de hallar este tipo de norma delegada, el Instituto Federal de Estudios

¹²Ver el Apéndice.

¹³Ver el Apéndice.

Parlamentarios utilizó como método la búsqueda de voces o de palabras. En consecuencia, en todas aquellas normas que incluían los términos “facúltese”, “autorícese” o “deléguese”, el Instituto entendía que estaba en presencia de una facultad delegada. Ya en 1999, el senador Yoma dijo que, independientemente de la bondad del trabajo, no se podía dar por cierto que toda aquella norma que contuviera cualquiera de estas voces nos indicaba en forma absolutamente certera que estábamos en presencia de una facultad delegada. Por lo tanto, él creía que ese era un estudio que debía servir de base, pero que teníamos que complementarlo, ordenarlo y analizarlo.

Recordemos, entonces, que para el IFEP había 1900 normas. Sin embargo, en 1999, el subsecretario de Asuntos Legales, el señor Reyna Almandos informaba que estábamos en presencia de 199 normas y no de 1900. Esto nos muestra en forma clara la complejidad del trabajo de seleccionar, unificar e identificar este tipo de normas.

Ahora bien, próximo al abordaje de este tema en agosto, la Comisión de Asuntos Constitucionales solicitó información a la Unidad de Coordinación del Digesto del Ministerio de Justicia. Con fecha 12 de agosto, remitió un informe en el que habla de, más o menos, 1500 normas y utiliza la expresión potencial “se habría”, porque, efectivamente, tampoco puede indicar certeza respecto de la cantidad de normas.

Quiero decir también que, en forma extraoficial, se puede conocer que, como consecuencia de la delegación —entre leyes, decretos y resoluciones—, hay aproximadamente entre 16.000 y 20.000 normas que debemos analizar; que son normas de menor rango constitucional pero que efectivamente entran dentro del paquete que tenemos que tratar.

Debo destacar que sobre el particular hay un esfuerzo importante, realizado no sólo por la Comisión de Asuntos Constitucionales sino, además, por la senadora Negre de Alonso —creo que ha trabajado con el senador Rodríguez Saá— para tratar de encontrar un abordaje que ponga fin a esta delegación. La senadora Negre de Alonso llega a la conclusión de que estaríamos en presencia de solo 89 normas. Independientemente de la bondad de ese trabajo, me parece importante destacar que, junto con el informe del Ministerio de Justicia, del Instituto Federal de Estudios Parlamentarios, más el trabajo que han efectuado los dos senadores a los cuales hice referencia, esto nos puede demostrar que estamos en presencia de un tema en el cual no hay precisión respecto de la cantidad de normas que debemos tratar.

Ahora bien, ¿qué se hizo hasta acá? Porque el Digesto Jurídico que ordenaba la Ley 24967 empezó a tratar de cumplir con sus objetivos y, en esa finalidad, el Ministerio de Justicia ordenó una licitación pública internacional que fue ganada por la Universidad de Buenos Aires, que empezó su trabajo en el año 99 y terminó con la elevación al Ministerio de Justicia de la Nación del soporte informático de un informe que dio como síntesis las 1.500 normas que, después, la Comisión del Digesto Jurídico remite a esta comisión. En el ínterin, hubo una comisión de juristas y se designó como presidente al doctor Sabsay. La Comisión Bicameral del Digesto Jurídico del Congreso de la Nación estableció en 2005 que dejaría de funcionar en 2006. Lo cierto es que hoy, no tenemos ni el Digesto ni el trabajo concluido.

En realidad, como dijo bien Liliana Negre de Alonso a la hora de reunirse la comisión para abordar este tema, independientemente de lo que haya hecho el Ministerio de Justicia y de los trabajos inconclusos, la mora es del Parlamento. El Parlamento tenía por mandato constitucional, establecer un digesto y, a partir de ahí, poner fin a la delegación que venía de la Constitución de 1994. Este trabajo no está terminado.

Cuando empezó a funcionar, la Comisión del Digesto Jurídico trabajó con la Universidad de Buenos Aires, primero durante el decanato del doctor D'Alessio y, después, durante el del doctor Alterini. Finalmente, primero con un grupo de diez profesionales y, después, en 26 comisiones que hablan de las distintas ciencias del Derecho, efectivamente arrimaron este trabajo en síntesis, que es el que hace al soporte de la Comisión de Digesto Jurídico del Ministerio de Justicia.

Frente a esto, la Cámara de Diputados estableció un punto final, indicando que ha de entenderse que se ratificó el conjunto de delegaciones legislativas preexistentes hasta el 1994 y devienen por sí en legítimas y vigentes todas las normas dictadas en consecuencia. Establece 240 días de plazo para terminar con el Digesto y con este estudio, que, entre otras cosas, dará a luz al Digesto de Legislación Histórica de la República Argentina, con sus decretos y reglamentaciones. Además, representa un salto de calidad, porque termina con la

subdelegación.

Creo que la Cámara de Diputados trabajó con absoluta responsabilidad. De hecho, considero que no hay manera de sortear una situación como ésta, con distintas informaciones y gran cantidad de normas en abordaje. La verdad es que este Digesto no sólo no está terminado sino que, además, tenemos algo que ver con la mora que el Parlamento tiene en la manda constitucional. Me parece importante que el consenso que se logró en la Cámara de Diputados ponga plazo final a la delegación; que establezca justamente un orden, una uniformidad y una calificación de cada una de las normas por ciencia; que establezca que, dentro de 240 días, hay que disponer también del Digesto Jurídico Histórico, y que, además, haya terminado con la subdelegación, a efectos de que los distintos ministerios y secretarías no puedan emitir más normas delegadas, y que, en consecuencia, solo las pueda suscribir el presidente o el jefe de gabinete, con lo cual tendrán control parlamentario por el artículo 100, incisos 1° y 4°. Se trata de dos acciones que, hasta el momento, no habíamos hecho. Considero que es una salida lógica para no generar inseguridad jurídica ni un abordaje desprolijo y absolutamente asistémico.

Estamos considerando una sanción de la Cámara de Diputados que nos coloca frente a un fenomenal trabajo. El Parlamento tendrá mucho que ver con esta tarea de terminar con este análisis, con este estudio. Ojalá que, de la mano de los distintos organismos que consultemos, tengamos mejor suerte que la que hemos tenido hasta ahora. Repito: hubo licitaciones públicas, contratos de locaciones de servicio y de obra, pero lo cierto es que no pudimos cumplir en forma ordenada la manda constitucional de 1994. Es hora de que nos hagamos cargo de esta circunstancia, porque la sanción de la Cámara de Diputados pone un punto de inflexión: tenemos 240 días, prorrogables sólo por 30 días más, para terminar con la calificación y el ordenamiento de las distintas normativas vigentes como consecuencia de la delegación.

Reitero la importancia de que tengamos en cuenta que el hecho de que el IFEP, el Ministerio de Justicia, la UBA y algunos otros organismos consultados no se ponen de acuerdo ni siquiera en cuanto a la cantidad de normas que debemos abordar. Esto habla por sí solo de la absoluta desproporción que significaría que se pretenda que en horas o días se termine con una tarea que viene —repito— incumplida desde 1994, período en el que han pasado distintos ejercicios ejecutivos.

La sanción de la Cámara de Diputados no sólo pone orden y claridad sino que, además, nos introduce en un callejón que va a terminar, si Dios quiere, con el cumplimiento de la manda constitucional de 1994 que hasta ahora no se ha dado, independientemente de los esfuerzos del Parlamento y de lo que hicieron el Ministerio de Justicia y la UBA.

Sin perjuicio de destacar el trabajo de los otros senadores en conjunto con la comisión para pretender terminar con la tarea, lo cierto es que no está terminada. Sin el Digesto que califique, ordene y nos enfrente con qué tipo de normas estamos tratando, cuáles han cumplido su objeto —como, por ejemplo, la de Reforma del Estado—, cuáles han caducado por el vencimiento del plazo y cuáles no, sería imposible llevar esta tarea adelante en forma prolija y ordenada.

Los actos del Congreso de la Nación tienen responsabilidad, pero debemos ser muy prolijos en el abordaje, porque si, por un análisis erróneo estas normas pierden vigencia y no debieron haberla perdido, habrá consecuencias patrimoniales que, en general, las paga el Estado y, en consecuencia, los argentinos. Por eso me parece una muy buena la actitud de la Cámara de Diputados. Ojalá nosotros podamos accionar en paralelo con ellos y terminar dentro de los 240 días con el mandato.

Por las razones expuestas, nosotros apoyamos la sanción que viene de la Cámara de Diputados y proponemos que se vote.

Sr. Presidente. – Voy a leer la nómina de oradores para que se cierre y se vote la respectiva lista.

Están anotados los senadores Petcoff Naidenoff, Negre de Alonso, Fuentes, Escudero, Pinchetti de Sierra Morales, Pérez Alsina, Reutemann, Cabanchik, Torres, Rossi, Jenefes, Estenssoro, Latorre, Romero, Rodríguez Saá, Guinle, Giustiniani, Morales, Sanz y Pichetto. También se anotan los senadores Corregido, Castillo, Vera, Basualdo, Lores, Colombo y Marín. Después reordenaremos la lista.

En consideración el cierre de la lista de oradores.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

— *Se practica la votación.*

Sr. Presidente. — Queda cerrada la lista de oradores. Luego evaluaremos el tiempo.

Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.

Sr. Petcoff Naidenoff. — Señor presidente: creo que estamos ante una discusión trascendente y de fondo, en función de que el Ejecutivo intenta, por esta vía, prorrogar de manera permanente facultades que no le son propias sino que son atribuciones que le competen al Congreso de la Nación.

En primer lugar, tal como lo expresaba el propio miembro informante, no debemos perder de vista la reforma de la Constitución de 1994. Porque la reforma de la Carta Magna de 1994 tuvo como propósito central, en principio, atenuar el presidencialismo, revitalizar el rol del Congreso, lograr un mayor equilibrio de poderes en la Argentina y, fundamentalmente, acentuar la independencia del Poder Judicial. Al respecto, el convencional García Lema señalaba que las ideas--fuerza giraban en ese sentido: la consolidación y el perfeccionamiento del sistema democrático, el equilibrio de poderes, la disminución —sobre la base de su atenuación— del presidencialismo exacerbado y lograr mecanismos de control que, justamente, nos dieran previsibilidad.

Entre los institutos que se han reformando, y respecto de la materia de facultades delegadas, se estableció un principio general a través de la sanción del artículo 76. En ese sentido, la Constitución ha establecido como regla de manera muy clara y contundente, desde 1994 en adelante, la prohibición para el Poder Ejecutivo de ejercer facultades legislativas. Es decir, se prohíbe el ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo. Ahora bien, esa regla tiene excepciones. Ellas están dadas en materia de determinada administración o de emergencia pública, con plazos fijados para su ejercicio y dentro de las bases para la delegación que el Congreso establezca. Podemos decir que, desde 1994 en adelante, las reglas estaban muy claras. Pero, ¿qué se hacía con la legislación delegada preexistente a la Reforma de 1994? Justamente, para eso se introdujo la cláusula transitoria octava, que establecía un plazo de cinco años a efectos de que el Congreso revisara la legislación delegada y, en ese período, el Parlamento pusiera en su justo lugar cuáles eran las leyes que se ajustaban a lo resuelto por la Constitución conforme su modificación o no.

Lógicamente, transcurrieron cinco años —el miembro informante fue muy claro en su exposición— y se fueron sancionado sucesivas prórrogas. Es decir que este Congreso ya estuvo en mora en 1999, pues por medio de la Ley 25148, se prorrogó por tres años y con arreglo a las bases oportunamente fijadas por el Poder Legislativo la totalidad de la delegación legislativa. Esto se prorroga nuevamente en 2002 por un plazo de dos años más a través de la Ley 25645. En 2004, y manteniendo la misma línea, se profundiza la prórroga por un plazo de dos años. Y llegamos a la Ley 26135, de 2006, mediante la cual se prorrogan por tres años más las facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo, que vencen el 24 de agosto.

En el contexto de un Poder Ejecutivo que ha hecho uso y abuso de las facultades delegadas, la Corte, como intérprete final de la Constitución, también ha establecido ciertos parámetros: justamente, el parámetro al cual deben estar acotados las facultades y los decretos delegados. Al respecto, la Corte señaló, en un fallo relacionado con una presentación efectuada por el Colegio Público de Abogados, que el artículo 76 es muy claro y establece tres requisitos. Justamente, se establecen las delegaciones conforme las pautas del artículo 76 pero con un agregado que tiene que ver con el artículo 100, inciso 12, de la Constitución Nacional. Es decir que el artículo 76 prohíbe delegar facultades, salvo —de manera restrictiva y excepcional— que se trate de materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. En ese caso, eso deberá estar refrendado por el jefe de Gabinete de Ministros y sometido al control de la Comisión Bicameral Permanente. Pero la verdad es que transcurrieron quince años, durante los cuales, por una razón u otra, este Congreso no asume las facultades que le son propias, y la interpretación de naturaleza restrictiva y excepcional, prácticamente, se ha transformado en una cuestión ordinaria, generando de manera clara y contundente no sólo un desfase institucional sino, hasta si se quiere, la

pérdida concreta de derechos de muchísimos ciudadanos, como lo voy a explicar más adelante.

El miembro informante fue muy claro cuando ha dicho lo que se ha hecho ante esta propia mora y ante este paquete de más de 1.900 leyes para tratar de cumplir con este mandato constitucional. Más allá de los proyectos que fueron presentados, inclusive por nuestra propia bancada, lo cierto y concreto es que el Congreso está en mora. De hecho, uno puede tener la mejor predisposición o buena voluntad para que, a través de una comisión bicameral permanente, por ejemplo, se trate el estudio de esta materia delegada; pero la realidad es absolutamente diferente en la Argentina actual, respecto de la vivida tiempo atrás. Aquí no se trata de oportunismo sino de realidades. ¿Y por qué de realidades? Porque, quizás, algunos no lo quieran admitir o a algunos, tal vez, les resulte funcional, pero estamos empantanados en una especie de permanente democracia delegativa. En este empantanamiento de la democracia delegativa, el Poder Ejecutivo, muchas veces, está plenamente convencido de que los ciudadanos le otorgan un poder absoluto o un cheque en blanco para hacer lo que se quiere, y que todo control institucional resulta una injustificada traba. Como diría Guillermo O' Donnell, los gobiernos de turno olvidan muchas veces que el Congreso no es menos gobierno que el Poder Ejecutivo. Con este mecanismo de prórroga de facultades extraordinarias, se produce la mayor abdicación o la mayor de las claudicaciones, que es la de conceder facultades extraordinarias a un Poder que no tiene facultades para legislar.

Siempre somos conscientes —y en esto coincidimos también con el propio O' Donnell— de que todo mecanismo de representación conlleva o trae aparejado una dosis de delegación. Ahora bien, las delegaciones deben marcarse, justamente, en el contexto y en los parámetros que establece la propia Constitución. De hecho, representación y delegación no son contradictorias. Lo que observamos es que hay una democracia delegativa absolutamente profundizada que no cumple con el eje central de la rendición de cuentas. Porque hay una rendición de cuentas en la democracia delegativa entre gobernantes y gobernados a través del mandato y a través de las urnas a las que uno se somete cada dos años; pero en la rendición de cuentas horizontales —que son a través de las instituciones—, quienes encarnan la democracia delegativa observan este tipo de mecanismos de control como un estorbo, como muchas veces resulta un Congreso, cuando uno quiere manejarse en el marco de la discrecionalidad más absoluta, no sometiéndose a ningún tipo de control.

Entonces, más allá de lo que se vino dando en estos quince años hay que reconocer —como se ha dicho— que estamos en mora, que estamos en falta. Creo que todo tiene su tiempo y su momento. Me parece que en el país se han dado una serie de hechos que también es importante tener presente y, fundamentalmente, tener presente el mensaje de la gente. Tenemos que ser muy claros cuando hablamos del mensaje de la gente. Porque, ¿qué ha cambiado en el país en los últimos tiempos? No sólo me refiero al mes de marzo, cuando, desde lo personal y en función de la experiencia que nosotros receptamos en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, hemos presentado un proyecto tendiente a trabajar en un marco de contexto serio e institucional. ¿Con qué objetivo? Crear una bicameral a efectos de sujetar esta legislación delegada a los parámetros de la Constitución, para cumplir con el mandato constitucional. Pero, más allá de eso, no solo cambiaron los tiempos sino que cambiaron las realidades. No hay que olvidarse lo que generó el conflicto con el campo y el acompañamiento de la sociedad. Cuando la gente visualizó un Congreso en función de un Ejecutivo que no entraba en razones, el Congreso fue la bocanada de aire fresco para destrabar un conflicto que había puesto en vilo a la sociedad argentina.

Claro está que el 28 de junio la gente también se expresó. En tal sentido, creo que la gente no solamente dijo “basta” a un estilo de ejercicio de poder que tiene mucho de intolerante, mucho de autoritario, sino que, fundamentalmente, fue una expresión de decir “basta a la discrecionalidad”. De hecho, decir “basta a la discrecionalidad”, también, fue decir “basta” a un Poder Ejecutivo que hace lo que quiere más allá de que el Congreso exista. Poner freno a la discrecionalidad va de la mano de que el Congreso recupere su rol. Y recuperar su rol es cumplir con la Constitución. Entonces, cuando decimos que no se pueden delegar ininterrumpidamente estas facultades y se debe cumplir con el mandato de la Constitución, estamos hablando de que tenemos que recuperar nuestro propio rol. Porque acá no se acaba el

mundo ni se viene la noche. Acá, lo o único que puede pasar es que, si no se otorga la prórroga de las facultades delegadas, el Congreso cumpla con su cometido: recuperar nuestro propio rol. Si eso significa discutir políticas públicas vinculadas con sanciones legislativas, bueno: para eso está el Congreso.

¿Qué hizo el gobierno con el mensaje de la gente, señor presidente? Es bueno saber qué se ha hecho en este tiempo. En una primera instancia, parecía que el gobierno había receptado el mensaje de la ciudadanía y convocó al diálogo, tanto a los partidos políticos como a diversas organizaciones. Con absoluta buena fe y —creo yo— con mucha esperanza, la gente tomó esta iniciativa con muy buenos ojos. Sin embargo, han transcurrido más de treinta días desde el comienzo del diálogo y lo que observamos es que, más que un diálogo, es un monólogo donde hay imposiciones. Además, en el lugar donde se tienen que definir las políticas vinculadas con lo que la gente ha votado —poner un freno a la discrecionalidad—, nos encontramos con esta clase de proyectos: se va por más prórrogas y por más superpoderes que, en realidad, no tienen el techo que se dice. La línea es la misma. Se avanza con decretos de necesidad y urgencia para aumentar el gasto sin ninguna discusión en el Congreso. Es decir, “acá no ha cambiado nada” y, en realidad, han cambiado muchas cosas.

No solamente hubo un mensaje de la gente sino que, también, hay que asumir que el Congreso de la Nación —y en especial nosotros, como senadores de la Nación— debe recuperar la autoestima y darse cuenta de que debe cumplir con el mandato de la Constitución sin considerar las excusas para la prórroga. Algunos dicen: “Bueno, está bien; se trata de 1.900 leyes”. Es así; sin embargo, ya pasaron quince años. Como bien lo ha explicado el señor miembro informante, hay senadores de algunos interbloques que tienen un trabajo hecho en el sentido de que no son 1.900 sino muchas menos. Está bien; pero lo real y concreto es que hay que abocarse ya a recuperar las facultades que corresponden al Congreso de la Nación. De eso se trata. Pero mientras se dialogaba y mientras en el Congreso tratamos estos temas, en el marco del diálogo, “bueno, avancemos con un impuestazo, avancemos con un tarifazo mediante un decreto en virtud de una facultad delegada; y, de paso, también, tratemos de poner un techo que no existe con los superpoderes”. Es decir, la discrecionalidad está al orden del día en la Argentina. De la mano de concebir y ejercer este estilo de poder, lo real y concreto es que lo excepcional se ha transformado en ordinario. El gobierno —claro está— no logra distinguir caminos alternativos y se aferra a la misma receta. Como lo dice O'Donnell, este convencimiento de ser los intérpretes de los más altos intereses de la Nación tiene mucho que ver con esta lógica de la confrontación de amigos y enemigos.

Fíjese cómo funciona esta lógica, señor presidente, que hasta nos han tomado como enemigos. Porque he escuchado a senadores del oficialismo acusarnos de ser dramáticos, exagerados, de hiperdimensionar los hechos y hasta nos preguntaron si los íbamos dejar gobernar. Hacer este tipo de preguntas, sobre todo, a los miembros de la bancada de la Unión Cívica Radical, una bancada que ha acompañado muchas de las políticas del gobierno, pone en la balanza dónde estamos parados. El mensaje del Poder Ejecutivo es más discrecionalidad, y fijar el camino del diálogo, en realidad, ha sido tratar de entretener para poder avanzar en la línea que se viene teniendo hasta el presente.

Señor presidente: creo que, en función de las cosas que se han dado en estos últimos quince años y más allá de la mora, por los momentos que vive nuestro país, necesitamos en forma imperiosa recuperar las facultades delegadas. Y estoy plenamente convencido de que, si el gobierno necesita que se trate una materia pendiente, acá estamos y estaremos. Eso hace el Congreso de la Nación: discute y trata lo que le corresponde. Si bien se está en deuda ante la sociedad, fundamentalmente por la propia mora, me parece que, si en el pasado se cometieron errores, esos errores deben servir para hacernos cargo de ellos. Hacerse cargo de estos errores también significa asumir facultades. Por eso, señor presidente, nosotros no solo no acompañamos este proyecto sino que estamos plenamente convencidos de que la política no es únicamente conflicto o confrontación; la política es diálogo. En esa línea, no vamos a acompañar este proyecto.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: si tuviera que definir esta iniciativa que estamos tratando hoy, diría que es uno de los cuatro jinetes de Apocalipsis. Es una ley que no puede causar mayor impacto en el sistema institucional, no puede tener mayor poder de destrucción

ni carencia de límite y, además, no tiene límites en los daños que ha causado y en los que irá a causar en el futuro. Porque esto que hoy estamos debatiendo no tiene que ver únicamente con los intereses de un importante sector de la Argentina, el agropecuario, el de la producción. Estamos debatiendo la institucionalidad de la República Argentina; estamos debatiendo el funcionamiento de la República; estamos debatiendo la naturaleza misma de este órgano al cual nosotros pertenecemos, ya que honrosamente los pueblos de nuestras provincias nos votaron para que los representemos.

Además, señor presidente, quiero adelantar al sector del campo, que está tan preocupado por esta norma, que no se haga problema, porque hoy terminan las facultades delegadas. Hoy, presidente —ya lo voy a desarrollar—, no hay ratificación, en este proyecto que está sosteniendo el oficialismo, de las normas delegadas. Entonces, hoy mueren en la Argentina las retenciones y la delegación del Código Aduanero; y ya voy a desarrollar el tema.

Ya hablaron de la historia el miembro informante, presidente de la Comisión; y el miembro informante por la Unión Cívica Radical. Efectivamente, esto es anterior a la Reforma Constitucional. Fíjese, presidente, que esta ley tiene origen en los gobiernos de facto. Si leemos a los constitucionalistas, dicen que son los gobiernos de facto de la Argentina los que primero se arrogaron las facultades y empezaron a legislar, y que fueron las distintas Cortes las que ratificaron esa función en virtud de que no existía una norma expresa en la Constitución. Están los famosos casos Delfino y otros, que tantas veces hemos nombrado.

En oportunidad de la Reforma Constitucional, el núcleo de las Coincidencias Básicas era fortalecer el funcionamiento de la República. Por eso, dije que era uno de los jinetes del Apocalipsis. Hay otros: los DNU, el Consejo de la Magistratura. Entonces, el constituyente dice: “De ahora en más, prohibimos la delegación legislativa, con excepciones. Además, tenemos el artículo 29 de la Constitución, que nunca debemos olvidar, nunca lo debemos olvidar. Pero vamos a tomar una medida con respecto a la legislación anterior”. Así, fija la cláusula octava para que revisemos la legislación delegante anterior al año 94. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que mencionó el senador Fernández acá. No es que él haya querido menoscabar pero yo, en verdad, quiero hacer un homenaje al Instituto de Estudios Parlamentarios del Senado de la Nación. Porque ya en 1999, este instituto, que dirigía el doctor Iribarne, había elaborado un arduo y enjundioso trabajo, en el que se establecía que había 1.901 leyes dictadas en virtud de legislación “delegante”, que es distinto a “delegada”. Es distinto y lo tenemos que entender, aunque me parece que el Ministerio de Justicia no lo entiende, por los antecedentes que ha enviado a este Congreso. Entonces, elabora esto; y no se puede realizar.

En realidad, el Digesto Jurídico fue proyectado con anterioridad a 1999, en 1998. Pero voy a dejar de lado el tema del Digesto Jurídico porque quiero señalar que aquí existe una responsabilidad funcional de cada uno de nosotros en este tema. Sin embargo, nunca se logró y, entonces, vinieron las prórrogas. Quiero que analicemos atentamente las tres leyes de prórroga y el proyecto que el Poder Ejecutivo ha enviado para prorrogar estas normas por 240 días.

En 1999, se sanciona la Ley 25148, por medio de la cual se ratifican las facultades delegantes por tres años, y en el artículo 3E, se aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante anterior a 1994. O sea, el Poder Ejecutivo tenía delegadas facultades legislativas y, en virtud de ese poder, dicta leyes, decretos o reglamentos delegados —como los llaman otros constitucionalistas—. En 1999, se ratifica todo eso anterior a 1994 y se prorroga por tres años. En 2002, se sanciona la Ley 26645, por medio de la cual se aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la delegante anterior a 1994, pero no se expresa nada con respecto a la legislación delegada. En 2004, cuando se vuelven a vencer estos plazos, se aprueba la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante hasta el 24 de marzo de 2002. Y después, en 2006, se vuelve a aprobar la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la Reforma, desde agosto de 2004 hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley.

Señor presidente: como le dije al señor senador Fernández en la Comisión de Asuntos Constitucionales, ese artículo no está en la ley. Consecuentemente, hoy no estamos

ratificando el uso de las facultades delegadas de los tres años anteriores, razón por la cual, cesan en el día de hoy todas las normas que se dictaron en uso de las facultades delegantes, porque no hay ratificación. Tendrán que dictarlas de nuevo si la norma que propone el oficialismo logra tener sanción.

¿Cuál es la cuestión que hoy se plantea, presidente? Se afirma que no hubo tiempo. En realidad, yo hago también un *mea culpa* por no haber insistido en este estudio. Hace unos días, me encontré con un ex senador, un colega de la Unión Cívica Radical, García Arecha, quien me dijo: "Bueno, por fin terminaste con el famoso tema de las leyes y la legislación delegada". Efectivamente, es un tema pendiente para el Congreso. Entonces, con el señor senador Rodríguez Saá y nuestros equipos de trabajo nos dijimos: "Pongamos un límite; cerremos el capítulo institucional de la Argentina y terminemos con esta materia pendiente que tiene el Congreso". Efectivamente, es una materia previa que venimos llevando año tras año; nos van prorrogando los plazos y nos permiten "seguir en la universidad". Más o menos ese es el tema. De tal modo, nos pusimos a revisar las 1900 leyes.

No es que estemos enamorados del proyecto. Se lo hemos mandado a todos los senadores y puede tener errores, es perfectible. Pero lo cierto es que de esas 1.901 leyes, nosotros creemos que hay 88 —podrán ser más, podrán ser menos— que deben cesar y que hay 10 que deben ser reemplazadas por instrumentos legislativos que necesitan debate y que podían prorrogarse, según era nuestra propuesta, por un año más. ¿Qué es lo que queremos decir en este marco? Que hemos probado que hay que desmitificar el "no se puede", la máquina de impedir. Pero no es ingenua la máquina de impedir, ni tampoco lo es que el Senado y la Cámara de Diputados no revisen. Yo he mandado a la Cámara baja el proyecto cuando me lo han pedido. ¿Cómo puede ser que sobre 98 leyes no haya una sobre la que podamos compartir el hecho de que hay que hacerle caducar los poderes delegados al Poder Ejecutivo? ¡Esto no es ingenuo! Por supuesto, es más fácil ocupar el rol del Legislativo y del Ejecutivo. ¿O qué vamos a decir? ¿Qué únicamente tenemos la culpa nosotros? Si nos hubiéramos puesto en marcha, lo podríamos haber hecho. Tal vez, podríamos haber dividido esta tarea entre todos y así hubiésemos revisado dos o tres leyes cada uno. Pues bien, trajimos 98 leyes a consideración de los colegas y el oficialismo no aceptó ni una.

A la vez, quiero decir al señor senador Fernández que lo del Ministerio de Justicia es una verdadera vergüenza, es un escándalo, una falta de respeto a este Cuerpo. Más aún, creo que podría dar lugar al planteo de una cuestión de privilegio. El tema fue así: el presidente de la comisión nos informó en la reunión del 12 que el ministro le había mandado ese trabajo, que tengo acá y que, por supuesto, me tomé el trabajo de revisar íntegramente. ¿Saben cuándo lo mandó a la Comisión de Asuntos Constitucionales? El 11, que fue miércoles y cuando se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados. ¿A usted le parece, señor presidente, que eso es serio para el funcionamiento de una república? ¿A usted le parece que podemos hablar de calidad institucional cuando el ministro de Justicia tenía esto guardado desde 2006? Porque tenemos la copia de la Comisión de Juristas que se lo remitió. ¿Es ingenuidad política? No. Es intento de despotismo, de legislar dictatorialmente. Es denostarnos, despreciarnos, porque no seríamos capaces de legislar. Es mentira lo que dicen en cuando a que es legislación delegante. Acá hay legislación delegada y la legislación delegada está ratificada por nosotros hasta el año 2006. Consecuentemente, no hay nada para revisar. Esto lo mandaron para asustarnos. Claro, el que no estudia se asusta, pero a mí esto no me asusta. Yo me puse a revisarlo. No importa que duerma dos o tres horas por día. Acá está: es mentira. Además de que nos han faltado el respeto, nos quieren hacer creer que tendríamos que revisar todas estas leyes para salir de esta situación de empantanamiento institucional que tenemos. No es así, señor presidente. Aquí estamos para trabajar por la República y para que le vaya bien al gobierno, porque significa que le va bien a la Argentina, pero respetando los roles que cada uno tiene en este país y respetándonos a nosotros como institución.

Quiero ir terminando, señor presidente. Nosotros hemos presentado un dictamen en minoría y nos habría encantado que, por lo menos, en el caso de una ley —repito: una ley—, algún miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales o su presidente hubiera dicho que compartía nuestra opinión y que era necesario hacer caducar esta o aquella otra. Por lo menos, para darle una señal a la sociedad. Tal vez, podrán ser 100 ó 150; algunos considerarán que

deberían ser sólo 30, lo que es perfectible, porque se trata de una tarea humana. Pero no puede ser que a libro cerrado y con las manos atadas sigamos prorrogando la legislación delegante.

Además, señor presidente, como no estamos ratificando la legislación delegada, hoy cae el aumento de las retenciones de noviembre de 2007. Por eso, le dije al sector agropecuario que no tenga miedo. Quiero aclarar que esto es mucho más grave que los intereses de un sector: hace a la institucionalidad y a la calidad institucional de la República Argentina.

Por los motivos que acabo de exponer, vamos a votar en contra de este proyecto.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

Sra. Escudero.– Señor presidente: quiero compartir lo que dijo la señora senadora preopinante en el sentido de la importancia de lo que hoy estamos decidiendo, por cuanto la decisión de hoy nos va a trascender y tiene mucho que ver con la institucionalidad.

La cuestión de las facultades delegadas es compleja. Ya lo era en nuestro sistema constitucional, por cuanto en nuestra Carta Magna y leyes tenemos dos vertientes, la norteamericana y la española, que constituyen dos sistemas distintos.

La Reforma Constitucional de 1994 tuvo una intención absolutamente clara y fue la de poner orden a este caos de delegación legislativa que existía en el país. La decisión fue clarísima y está plasmada nítidamente en el artículo 76 de la Constitución Nacional: reducir el poder presidencial. Así, se establece el principio de prohibición de delegación legislativa, aunque con dos excepciones: materias de administración y de emergencia pública; y, siempre, por un plazo determinado.

Además, se eleva el status del refrendo de esa legislación delegada exigiendo que sea efectuado por el jefe de Gabinete de Ministros. Es decir, está clarísimo: la delegación se permite en los dos únicos casos que se aceptan y se da al jefe del Poder Ejecutivo, es decir, al presidente, quien tiene que ejercerla con el refrendo del jefe de Gabinete de Ministros.

Para solucionar las cuestiones anteriores, la Constitución Nacional contiene la cláusula octava, que establece claramente un plazo de caducidad de la legislación delegada de cinco años, a menos que una ley expresa la prorrogue.

En este punto, quiero hacer una clara distinción, a la que ya se refirió un poco la señora senadora Negre de Alonso, entre legislación delegante y legislación delegada. Legislación delegante es aquella por la cual el Congreso se desprende de parte de sus facultades y dice: “Este poder de legislar se lo paso al Poder Ejecutivo”. Y legislación delegada son los reglamentos que el Poder Ejecutivo dicta en ejercicio de ese poder que le ha sido delegado. Son dos cosas distintas.

La cláusula octava habla de legislación delegada; de ningún modo la Constitución Nacional ha autorizado prórrogas genéricas de legislación delegante. La legislación delegante se terminó con el artículo 76 de la Constitución Nacional. No hay legislación delegante que no cumpla con los requisitos del artículo 76 de la Constitución Nacional, es decir, cuestiones de administración o de emergencia y por plazo determinado. Lo único que se podía prorrogar, y sí se hizo, fue la legislación delegada, es decir, la legislación nacida al amparo de esas facultades cedidas transitoriamente.

¿Qué ha caducado? En la Argentina, ya ha caducado toda legislación delegante. Esa legislación delegante anterior a 1994 no existe más. Y la legislación delegada ha sido ya incorporada y hecha ley hasta la última ratificación que se hizo en 2006. En adelante, se presume que toda legislación delegante es adecuada al artículo 76.

Entonces, no se entiende qué es lo que se quiere prorrogar con esta norma que tiene sanción de la Cámara de Diputados. O sea, si estamos queriendo prorrogar legislación delegante, podemos decir que no hay facultades para ello, pues la única legislación delegante que podríamos prorrogar tendría que ser específica en cada caso y debería estar adecuada a las condiciones que fija el artículo 76 de la Constitución Nacional.

De ningún modo podríamos estar autorizando delegación de facultades al jefe de Gabinete de Ministros, porque eso está absolutamente prohibido por nuestra Carta Magna. Es decir, la Constitución establece que solamente se puede delegar facultades en esos dos únicos casos, por plazo determinado, y las tendría que ejercer el Poder Ejecutivo por vía de decreto, refrendado por el jefe de Gabinete de Ministros y bajo el control de la Comisión Bicameral Permanente.

Con estas aclaraciones,, quiero referirme también a qué pasa con los derechos de exportación. Hemos visto una gran inquietud por parte de las organizaciones agropecuarias, pues entienden que, si se prorrogasen estas facultades —de aprobarse esta norma—, se estarían prorrogando también las facultades que está ejerciendo el Poder Ejecutivo en materia de derechos de exportación.

Como dije anteriormente, la Ley 25148 dejó caducar toda la legislación delegante que no se refiriera a alguno de los supuestos del artículo 76. Pero, en materia tributaria, ni antes de la reforma de la Constitución ni después de ella, es posible delegar facultades que establecen tributos. Eso está absolutamente prohibido y ha sido la doctrina permanente, unánime, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque, si algo ha resguardado, es el poder del Congreso de establecer y crear tributos.

Efectivamente, en uno de sus fallos, la Corte ha dicho que, en el régimen representativo y republicano de gobierno, ningún principio es más esencial a su naturaleza y objeto que la facultad atribuida a los representantes del pueblo para crear contribuciones necesarias a la existencia del Estado. En todo Estado soberano, el Poder Legislativo es el depositario de la mayor suma de poder y es, a la vez, el representante más inmediato de la soberanía. El contribuyente, el ciudadano, con su voto, designa a sus representantes para que estos sean los únicos que puedan crear impuestos; y eso no se puede delegar. Ese es un principio indelegable. La reserva constitucional de ley formal para la imposición de tributos es absoluta y no deja resquicio alguno para dispensar la intervención del Congreso.

Actualmente, hay una causa pendiente de decisión en el ámbito de la Corte Suprema que ha establecido esta doctrina. En el caso “Gallo Llorente, Santiago y otros c/Ministerio de Economía”, correspondiente al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10, la Justicia dice claramente que, dada su naturaleza, las retenciones cuestionadas no resisten el análisis de constitucionalidad de cara al principio de legalidad. La delegación genérica prevista en el artículo 755 del Código Aduanero y la subdelegación instrumentada por Decreto 2752/ 91 y demás normas ratificantes no cumplieron con las exigencias del artículo 76 de la Constitución Nacional. En consecuencia, hoy no cabe duda de que, en la Argentina, las retenciones a las exportaciones agropecuarias carecen de sustento legal. Diferente es lo que sucede con las retenciones a los hidrocarburos, que sí fueron autorizadas por el Congreso en la ley de emergencia, que es prorrogada todos los años.

Fíjense que la naturaleza tributaria de las retenciones a las exportaciones es absolutamente reconocida. Recordemos que Joaquín V. González las denominaba “Impuestos de aduana” y señalaba que todo lo que se refiera a la legislación sobre aduana, al establecimiento de derechos, fijación de tarifas y demás impuestos remuneratorios derivados de los servicios que la Nación presta por medio de ellas es una facultad privativa del Congreso.

En su artículo 754, el Código Aduanero dispone que el derecho de exportación específico debe ser determinado por ley. Los artículos 733 a 749 establecen la base imponible sobre la cual se debería determinar legalmente el monto del impuesto. El artículo 755, que contiene esta delegación, es una norma de 1981, de un Poder Ejecutivo de facto, por lo cual —como todo lo que hizo ese Poder— viola la Constitución y establece una delegación absolutamente inconstitucional. Esa delegación ha caducado a partir de la reforma de la Constitución Nacional. Y esa facultad ha caducado a partir de lo que este propio Congreso ha resuelto con posterioridad.

Quiero señalar lo que agrega la Justicia cuando analiza este tema de las retenciones a las exportaciones agrícolas, cuestionando el texto legal del artículo 755 del Código Aduanero. Dice que no fijó bases ni límites; no estableció una política legislativa clara para el ejercicio de la atribución conferida; y tampoco fijó valores o escalas como, por ejemplo, sí lo hizo el artículo 676 del mismo Código para los derechos de importación.

Es decir que aquí estamos prorrogando facultades que no existen. En efecto, el Poder Ejecutivo carece de facultades legislativas para establecer derechos a la exportación en cualquier materia, salvo aquellas que se encuentran reguladas específicamente pero, en este caso, no hay ley que lo sustente.

De modo que quiero destacar el trabajo que ha realizado la señora senadora Liliana Negre de Alonso, efectuando un esfuerzo que va encaminado en el sentido correcto. Como ya

no se puede prorrogar legislación delegante abiertamente y como la legislación delegada ya ha sido incorporada, lo que hay que hacer es revisar cada una de estas leyes ratificadas por haber sido dictadas como consecuencia de facultades que tenía el Poder Ejecutivo y, así, empezar a derogar todas aquellas normas que ya no tiene sentido sostener.

Creo que hoy estamos decidiendo algo muy importante. Entiendo que el precio que pagamos al desconocer los principios es muy alto. A la anomia que hoy vive el país, a la falta de cumplimiento de las normas por parte del propio Poder Ejecutivo —que es el encargado de respetarlas—, se suma la crispación social.

En consecuencia, pido a mis pares que reflexionemos y sepamos qué estamos haciendo por el país en el día de hoy.

Sr. Presidente. — Como el señor senador Torres no está en el recinto, tiene la palabra la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales.

Sra. Pinchetti de Sierra Morales. — Señor presidente: desde que comenzó este debate de la delegación de facultades, hemos escuchando a diferentes senadores el relato del trabajo ímprobo que debíamos haber hecho para ordenar las 1.901 leyes que todavía están pendientes de ser revisadas.

En este sentido, quiero resaltar la tarea que se ha hecho en mi provincia, para poner como ejemplo a los señores senadores y diputados de la Nación que una tarea como la que aquí no se ha efectuado sí se puede hacer tranquilamente cuando hay voluntad y decisión políticas. En el término de un año, en Tucumán, se han revisado ocho mil leyes y el Digesto consolidado será entregado a la opinión pública y a la ciudadanía de la provincia este próximo 29 de agosto, fecha en que se celebra el natalicio de Juan Bautista Alberdi.

Con esto quiero decir que esta tarea largamente demorada se puede hacer. Se ha intentado varias veces y nunca se ha llegado a consolidar esta labor. Por lo tanto, es hora de que se la haga; y los señores senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá han dado un ejemplo de voluntad, de perseverancia y de conducta política y ciudadana. En este sentido, creo que todos nosotros debemos estarles agradecidos. Por eso, además, hemos firmado el dictamen que dicha señora senadora ha presentado y hoy quiero hacer mías sus expresiones, así como las de la señora senadora Escudero.

Vengo a este debate, como aquéllas, a defender la Constitución Nacional, porque es la piedra angular del estado de Derecho y porque juré hacerlo por encima de partidos, afectos y emociones. Además, vengo a defender la tarea que tiene que hacer el Congreso de la Nación como poder del Estado de una República democrática, y sobre todo, la voluntad soberana expresada en las urnas el último 28 de junio, que le puso freno a una manera de hacer política y de administrar una Nación.

Apoyada en estas tres razones, y en las expresadas largamente por las señoras senadoras Escudero y Negre de Alonso, vengo a rechazar la prórroga de la delegación de facultades legislativas, porque la Constitución Nacional encomienda al Congreso sancionar las leyes sin importar si le gusta o no al poder de turno.

Si hoy aprobáramos esta delegación, estaríamos dándole la espalda a la voluntad popular e hiriendo gravemente al núcleo vital de la democracia, que es el Congreso de la Nación. El artículo 76 de la Constitución Nacional prohíbe enfáticamente la delegación de facultades legislativas. El Congreso de la Nación debe recuperar las facultades que les son propias, porque nosotros tenemos razón de ser en tanto y en cuanto cumplamos con nuestra función de legislar, función que no debemos ni podemos delegar en el Poder Ejecutivo nacional.

Además, tal como han dicho quienes me han precedido en el uso de la palabra, dentro de estas 1.901 normas que deben ser revisadas, actualmente, dentro de la legislación delegante, se encuentra el Código Aduanero, a partir del cual se establecieron las retenciones a las exportaciones. Es decir, si hoy se impone la voluntad de la mayoría, podría llegar a interpretar el Poder Ejecutivo nacional que todavía tiene poderes para seguir castigando al sector agropecuario, que es el más activo de la economía y el que más aporta a los destinos del país.

En las reglas de juego democráticas, republicanas y federales, el rol de los representantes del pueblo y de las provincias es indelegable. No debemos dejar decisiones propias a nuestra tarea y a nuestra función, y que afectan a toda la sociedad, en manos de la

voluntad y del criterio de una sola persona.

La Constitución, como lo hemos dicho muchas veces en este mismo recinto, es un pacto político; es el tratado de paz de los argentinos; garantiza el equilibrio de los poderes y la autonomía de las provincias, que ha sido vulnerada en forma permanente porque miembros del Congreso Nacional han decidido quitarle los poderes al Parlamento —en donde están representados el pueblo y las provincias— y darle el poder que es de ese pueblo y de esas provincias al presidente de la República.

El 28 de junio el pueblo argentino votó mayoritariamente que la Argentina vuelva al respeto y a la normalidad de sus instituciones. Votó mayoritariamente que se acabaran los superpoderes y que las facultades delegadas de manera excesiva, de las que ni siquiera se conoce su contenido, sean definitivamente olvidadas.

Con nuestro voto en contra, venimos a decir que esta oposición que hoy estamos representando está planteando más y mejor calidad democrática; y que si la Argentina, en determinados momentos, ha tenido terribles estados de excepción, es hora de que nuestro país sea capaz de mejorar su calidad democrática y de entender que la construcción colectiva es la que se merece nuestro pueblo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Pérez Alsina.

Sr. Pérez Alsina. — Señor presidente: como ya lo dijeron los señores senadores preopinantes, estamos ante un proyecto de una importancia institucional muy fuerte.

Considero que tiene dos aristas que debemos analizar. Una es el aspecto político-institucional y otra, el aspecto jurídico, al que se han referido varios de los señores senadores que ya hicieron uso de la palabra, en especial, el miembro informante.

En el aspecto político, debemos aceptar que, si se aprobara hoy el proyecto tal cual viene con el dictamen de mayoría, en primer lugar, certificaría, lamentablemente, el fracaso del diálogo político. Porque hablar de diálogo político cuando se impone este proyecto sin un consenso previo es, prácticamente, hablar de la inutilidad del debate. Y no me refiero a aquellos que aceptaron la convocatoria y llevaron un temario expreso. ¿De qué sirve llevar un temario expreso si, después, se decide de manear unilateral? Lamentablemente, ese tipo de actitudes son receptadas por la sociedad. Asimismo, a través de este proyecto, se ignora la voluntad electoral plasmada el último 28 de junio. Esa voluntad no se expresó en contra de este sistema; simplemente, lo que el pueblo argentino votó el 28 de junio fue la adopción de una política de consenso y de diálogo para que puedan tratarse cada uno de los temas en un ir y venir entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento, porque son demasiadas y muy graves las cuestiones con las que estamos en deuda los argentinos como para considerarlas unilateralmente. Esos eran los temas que el pueblo quería que fueran discutidos entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Además, son muchos los puntos a tratar a través del consenso. Uno de ellos es el de la política agropecuaria, que está siendo cada vez más regresiva, a pesar de que hay un sector que prácticamente aporta un 40 por ciento de empleo. Por lo tanto, ¿cómo no va a haber un debate conjunto entre estas dos instituciones acerca de la política agropecuaria, y no una acción unilateral?

— *Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado, el senador José Juan Bautista Pampuro.*

Sr. Pérez Alsina. — Entre esos temas, también está la política federal —con provincias cada vez más empobrecidas—; política de empleo —con un aumento, independientemente de los índices, cada vez mayor del desempleo, del trabajo informal y de los índices de pobreza—; política para disminuir la brecha que se está dando entre los sectores de mayores y menores ingresos—; política de seguridad; política en cuanto a la retención de capitales; política relacionada con la inversión directa —inversión que contribuye al desarrollo, la que al ser cada vez menor aumenta el problema laboral—; política en la manipulación de los índices; y política energética, respecto de la cual prácticamente se aceptó el fracaso de las últimas medidas que implementó el Poder Ejecutivo.

¿Cómo, en todo esto, no va a actuar el Parlamento? Hay que tener en cuenta que se trata de un Congreso que ofrece encarar estas acciones junto con el Poder Ejecutivo, es decir, no en forma unilateral ni mediante imposiciones. Todo esto —que era necesario— cae por tierra con la aprobación de esta iniciativa, porque solamente dejamos en cabeza de un poder la discusión de estos temas.

Escuché atentamente al señor miembro informante, quien hizo una defensa jurídica de este proyecto que considero equivocada, pues podría llegarse a la misma solución mediante un camino totalmente distinto y de consenso. Prácticamente, lo que manifestó el señor miembro informante podría resumirse en "aprobemos esto porque se cae un andamiaje jurídico". Sin embargo, de ninguna manera se cae un andamiaje jurídico. Hay formas de hacerlo sin esta prórroga de delegaciones que se pretende aprobar.

En primer lugar, es importantísima la distinción que hizo la senadora Escudero entre legislación delegante y legislación delegada. En ese sentido, parecería que el proyecto que se pretende aprobar no hizo esa distinción y confundió totalmente los términos. Y lo digo con respeto.

El andamiaje jurídico se sostenía, simplemente, con ratificar y aprobar, como decían las leyes anteriores, las legislaciones delegadas que fueron dictadas a tenor de las facultades delegadas. Es decir que aprobando eso, toda aquella legislación que se dictó tenía sostenimiento jurídico.

En un proyecto que presenté, decía esto expresamente. Pero, también, señalaba de modo claro que, a partir de ese momento, es decir, de la fecha en que se dictaba una nueva ley, el Parlamento recobraba toda su atribución a tenor de la división constitucional. Cualquier normativa que hubiera sido dictada de allí para atrás tenía su sostenimiento jurídico pero, a partir de entonces, la división quedaba absolutamente expresa, y lo que era atribución del Poder Ejecutivo lo dictaba el Poder Ejecutivo y lo que era atribución del Poder Legislativo lo dictaba el Poder Legislativo.

Entonces, de ninguna manera es necesaria esta prórroga. Y no nos engañemos; seguro que dentro de un año no va a ser estudiada toda la normativa; es muy probable que no haya sido analizada toda la normativa, que por otra parte, no era necesario. Si me permiten decirlo en lenguaje sencillo, con un consenso entre lo que apoya la mayoría y lo que sostenían los sectores opositores y aprobando lo que acabo de decir, tenemos todo el tiempo para luego ir dictando la normativa que haga falta.

En este sentido, el ejemplo más simbólico es el tema de las retenciones. El Poder Legislativo tiene la facultad de hacerlo; tiene la atribución, según lo establece la Constitución; lo podemos hacer mañana o pasado: ratificar las actuales retenciones, disminuirlas, aumentarlas, etcétera; pero lo que no podemos hacer es seguir prorrogando la facultad en el Poder Ejecutivo.

No me voy a olvidar de que la disposición transitoria, que tanto se ha citado, daba un tiempo en el cual caducaban todas las normativas preexistentes, salvo aquellas que fueran aprobadas y ratificadas, y son las que se hicieron a partir de la Ley 25148 en adelante. La voluntad constituyente era: "Señores, tienen cinco años para discutir esto; si no, caduca todo, salvo que se ratifique o apruebe". Y esa era una técnica legislativa que puede ser discutida, pero era legal. Se ratificó absolutamente todo y se aprobó, y se fue haciendo así sucesivamente.

Señor presidente: nuestra propuesta es que, si hay problema de andamiaje jurídico, aprobemos la legislación delegada pero, a partir de hoy, no necesitamos prorrogar un solo día la facultad delegante a la cual se refirió la señora senadora Sonia Escudero. A partir de hoy, retomemos lo que nos dice la Constitución, que cuando expresa "Por un tiempo determinado" y en relación con las bases que las mismas leyes reglamentan, de ninguna manera se refiere a quince años, que es el tiempo que estamos llevando en todo esto.

Entonces, sostengo que estamos cayendo en una nueva violación constitucional. No podemos prorrogar más facultades delegadas. Por eso, no le tengamos miedo al consenso; ratifiquemos las leyes que fueron dictadas en virtud de la legislación delegada, pero volvamos a tomar la atribución, porque si no, lamentablemente, dentro de un año, creo que vamos a estar en la misma posición sin haber avanzado mucho, sobre todo, si se sigue en esta política unilateral.

Por estas razones, señor presidente, adelanto el rechazo al dictamen de la mayoría.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Vera.

Sr. Vera. — Señor presidente: como ya todos saben a esta altura del debate, se encuentra en tratamiento un proyecto de ley en revisión que contempla la prórroga de la delegación de facultades del Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo.

Se ha dicho por parte del bloque oficialista que el gobierno necesita esta prórroga en razón de que, pese a que han pasado quince años desde que se dictó la reforma de la Constitución de 1994, no se han podido revisar las leyes dictadas en función de delegaciones anteriores.

Creo que basta mencionar el transcurso de quince años para que todos, tanto quienes estamos acá como los que no, nos demos cuenta de que se trata de un argumento totalmente falso. No es aceptable, no es posible, que en la República Argentina, a lo largo de quince años, no se hayan podido revisar las leyes que hacían falta para determinar cuáles debían ser ratificadas o no, si es que el objeto para el cual habían sido dictadas estaba agotado. Además, se ha dicho aquí, como un fundamento del oficialismo, que esto efectivamente es así porque se trata de muchas leyes. Lo cierto es que, de un número infinitamente inferior que había en 1994, hoy, se ha llegado a miles de leyes, según dicen algunos, aunque yo no conozco el número exacto.

Si ese argumento fuera cierto, en unos años más, y yo no tengo ningún fundamento para suponer que es la última prórroga —ya que cuando algo se ha hecho muchas veces, lo razonable es que se volverá a repetir la prórroga—, habrá diez mil, veinte mil u ochenta mil leyes que deberán ser revisadas, y que, en cada oportunidad en que venzan los plazos, nos veremos obligados a establecer nuevas prórrogas con el mismo argumento hoy esgrimido. En mi opinión, esto también muestra que se está ante una cuestión de interés político de mantener la facultad de dictar leyes.

Creo que aquí debo ser muy breve. Estamos en este ámbito, o están, si quieren, por una elemental cuestión de elegancia, las personalidades más importantes de la política nacional: senadoras y senadores de la República. En consecuencia, es bueno decir que aquí no están en juego los argumentos que expone el gobierno —que, si fueran razonables, deberían ser acompañados— sino el interés político del gobierno en mantener esta facultad. Pero debo decir que, en este ámbito, el gobierno cuenta con su bloque, que es el mayoritario. Y el bloque mayoritario acompaña este anhelo del Poder Ejecutivo de mantener el poder.

Lo que contiene el pedido de prórroga de las facultades delegadas es la ambición de un gobierno de mantener facultades que no le son propias y que corresponden al Congreso de la Nación. Y yo agregó: en un momento de la historia nacional en el que la vida pública necesita tanto prestigiarse, que uno de los poderes —el Legislativo— y una de las Cámaras —la de Senadores— reniegue de sus facultades, probablemente, constituye un elemento más —no excluyente, por supuesto— para que esta sociedad tarde más tiempo en devolver o reconocer la jerarquía que debe tener y por la que debe transitar la vida pública.

Disculpen esta referencia, pero no creo que debamos soslayar que una cuestión tan importante como esta se encubra bajo el argumento de que parece razonable que haya que prorrogar la delegación de facultades porque caen las leyes. Si la sociedad creyera que esto es así, seríamos unos imbéciles los que no acompañamos a nuestro gobierno. Estamos convencidos, y por eso vamos a votar en contra este proyecto que cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados, de que la verdad es otra. Estamos en presencia de un gobierno cuyo Poder Ejecutivo anhela seguir gobernando con facultades delegadas y seguir legislando.

No podemos desconocer, quienes además de ser senadores tenemos un gran compromiso político en nuestro país, en nuestras provincias y en nuestras regiones, el riesgo que ha incorporado a nuestras calidades en la gestión pública el ejercicio de estos poderes delegados. La potestad de legislar que ha tenido el Ejecutivo —que demasiadas veces se ha usado discrecionalmente y, en muchas ocasiones, equivocadamente—, sin duda que nos genera a nosotros o a quienes acompañan esta prórroga una mayor responsabilidad política.

Por ahí se ha hecho bandera de la pelea del sector agropecuario, que quedó muy mal después de los avances que tuvo el Poder Ejecutivo respecto de las retenciones. Pero esta es una parte. Si a eso nos tenemos que referir, es verdad que si no hubiese habido facultades delegadas, no se habría sufrido el daño y el deterioro enorme que padeció nuestra economía el año pasado como consecuencia de decisiones del Ejecutivo tomadas en virtud de estas facultades; ni se habría producido la crispación o el disgusto de toda la sociedad, y, por qué no, la caída de las economías de muchos pueblos, sobre todo, los de aquellas provincias que dependen casi en un ciento por ciento de la producción agropecuaria, que sigue siendo —les guste a algunos o no, lo reconozcan o no, y, pese a la negación nada menos que de las más

altas autoridades del gobierno— el sostén de la economía nacional.

Digo que ello no se hubiese producido, porque sin duda que se habrían debatido en el Congreso las pretensiones, en este caso, de subir las retenciones, y habríamos tomado decisiones infinitamente más contemplativas de los requerimientos para funcionar que tiene nuestra economía. Sin embargo, como el Poder Ejecutivo las pudo tomar de un día para el otro, paralizamos en algunos pueblos hasta el 80 por ciento de la actividad económica. Y si no, que lo digan los santafesinos, que saben bien el efecto negativo que el año pasado tuvo la paralización de la economía en sus pueblos.

Por lo tanto, creo que lo esencial aquí, y es lo que estamos discutiendo hoy, es un modelo de gobernar que lleva adelante el justicialismo, actualmente liderado por el matrimonio Kirchner; un modelo que no es republicano, que no acepta la división de poderes y que, en mi opinión, pese a todo lo que ha tensado la relación en la Argentina, sigue haciendo lo mismo que ha hecho hasta acá. Esto es así pese a que el 28 de junio, es evidente —entre otras razones que habrá tenido la mayoría del electorado para votar como lo hizo— que estaba esta forma de gobernar.

Sr. Presidente (Pampuro). — Vaya concluyendo, senador.

Sr. Vera. — Señor presidente: por lo tanto, pido y espero la mayor reflexión a efectos de que, en la ley que sancionemos acá, encontremos la forma de redacción que permita impedir el horror que significaba la situación de alguna ley que quizá no debería fenecer el 24 de este mes.

Pero, a su vez, deseamos que no se repita la delegación de facultades que, hasta aquí, ha sido demasiadas veces mal usada por el gobierno que hoy tenemos los argentinos.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra la señora senadora Corregido.

S r a .

Corregido. — Señor presidente: en realidad, los señores senadores preopinantes ya han hecho el relato desde 1853 hasta 1999 acerca de cómo se fueron delegando estas facultades sucesivamente. La verdad, no me atrevo a definir cuáles de las 1900 normas expuestas se pueden ratificar o derogar.

Yo soy peronista; pertenezco al bloque oficialista y quiero que a este gobierno le vaya bien, porque eso significará que al pueblo también le irá bien. Pero para ayudar, estoy convencida de que lo que no debo hacer es callar. Para ayudar, tenemos que tratar de resolver, en este Congreso, todos los problemas que la sociedad reclama. Cada vez que he opinado distinto, me he tomado la libertad, con las convicciones que tengo, de plantear las disidencias. Por eso, me gustaría decir con qué cosas no estoy de acuerdo y cuáles me gustaría tratar en este Congreso.

En ese sentido, no estoy de acuerdo con los tarifazos ni con el modo en que el INDEC pretende contarnos la verdad. Tampoco me gusta que no podamos discutir en el Congreso y en este Senado una política agropecuaria integral, porque —como dije cuando tratamos la Resolución 125— me gustaría que podamos pensar qué estructura social agropecuaria queremos, qué tipo de campo deseamos los argentinos y en manos de quién o quiénes debe estar. O sea, si vamos a permitir que siga la extranjerización de nuestras tierras.

También, me gustaría que discutamos sobre las distorsiones que hay en los precios desde el productor a la góndola; en cómo producir más alimentos —más carne, más leche y más huevos— para los argentinos y el mundo; acerca de cuáles son las consecuencias para la salud humana del uso del glifosato, el 2,4-D y el endosulfán que se utiliza en el campo para la soja —de lo que nadie habla—; y también sobre el nivel de mínima equidad e igualdad que debe existir entre los argentinos, porque quienes venimos de las provincias muy pobres como las del norte vemos cómo se subsidia al país central y nosotros pagamos la luz, el gas y el gasoil más caro, mientras que los productores logran conseguir el gasoil que necesitan para producir.

Pero tampoco me gusta el discurso de que caiga todo. Me parece que todos tenemos que trabajar para que los mandatos presidenciales concluyan y que debemos ponernos de acuerdo para resolver, entre todos, los problemas de los argentinos. No creo que porque un sector exija hoy la baja de las retenciones tengamos que dejar a la presidenta que gobierne mediante decretos de necesidad y urgencia. Los intendentes de mi provincia y el bloque de diputados Justicialista de mi provincia me ha pedido especialmente que apoye este proyecto, porque con el Fondo Federal Solidario los municipios están resolviendo algunos

problemas.

Mi provincia tiene muchísimos problemas y los intendentes son los que reciben cotidianamente los reclamos; y el señor senador Nikisch lo sabe, porque también ha sido intendente. Los jefes comunales son quienes reciben todos los días los reclamos de la sociedad, y la verdad es que con el fondo federal solidario que se constituye con las retenciones a la soja los intendentes están haciendo veredas y pavimentos y sosteniendo el nivel de empleo en pueblos donde no hay ninguna otra posibilidad.

Estoy de acuerdo en que a través de este proyecto se prohíba la subdelegación, que fue lo que posibilitó que, durante años, funcionarios de rangos menores adoptaran resoluciones que tenían el valor de leyes. Este Congreso lo toleró, y la comisión bicameral que debía controlar las facultades permitió que durante años dictaran resoluciones y decisiones funcionarios de menor rango. Con este proyecto, prohibimos la subdelegación. Es necesario que esta facultad la ejerza la presidenta o el jefe de gabinete de Ministros y que dentro de diez días venga a control del Congreso.

También es importante otro aspecto de este proyecto: que a partir de ahora y en el término de un año, la Comisión que se va a conformar en el Congreso analice las 1.900 normas que deben ser revisadas. Yo espero que entre todos podamos concretar esta tarea que se prevé en esta iniciativa, que podamos revisar esas 1.900 normas, que podamos sentarnos alrededor de una mesa de consensos a resolver los problemas que existen en todas las provincias y así, de una vez por todas y con profundo espíritu democrático y federal, hagamos una Patria más justa y equitativa para todos.

Sr. Presidente (Pampuro). – A continuación, le correspondía hacer uso de la palabra a la señora senadora Colombo, que no se encuentra presente en el recinto.

Tiene la palabra el señor senador Basualdo.

Sr. Basualdo. – Señor presidente: acá hemos escuchado, fundamentalmente, hablar del eslabón principal que tiene esta ley, que es de carácter jurídico. Así lo explicaron muy bien las señoras senadoras Liliana Negre de Alonso y Sonia Escudero. A su vez, hemos escuchado a varios señores senadores hablar del tema político, que es sumamente importante. Pero también, hay un tercer tema que es muy importante, la cuestión económica.

¿Por qué digo que es tan importante el tema económico? Acá nosotros tenemos que ser creíbles; siempre digo esto en el tratamiento de distintos proyectos de ley. Debemos ser creíbles y darle seguridad a la gente y a los mercados.

Fíjense una cosa: se nos están yendo casi dos mil millones de dólares por mes. ¿No tenemos culpa nosotros? Sí, porque no tenemos las reglas de juego claras. ¿Qué quiere cualquier inversor? Reglas de juego claras. Si esos dos mil millones de dólares que se van afuera del país estuvieran en el mercado interno y en el consumo, ¿saben cuánto recaudaría el gobierno nacional? Mil millones de dólares, porque de lo que consumimos aproximadamente, el 50 por ciento corresponde a impuestos —diferentes IVA, primario y secundario; impuesto a las ganancias, y otros impuestos provinciales y municipales—. O sea que volveríamos a recuperar mil millones de dólares por mes, lo que al año sumaría un total de 12 mil millones.

Por otro lado, estamos diciendo que se quieren suprimir las retenciones a las economías regionales. ¿Saben cuánto significa eso? Significa trescientos millones de dólares anuales, y acá podríamos recaudar 12 mil millones de dólares siempre y cuando seamos creíbles. ¿Qué quiere la gente? Certeza. Quiere saber que si va a hacer una inversión, no le van a cambiar las reglas de juego. Eso es lo que no tolera el electorado. ¿Se acuerdan del corralito? Salieron a la calle no únicamente los que tenían plazo fijo, sino todos, porque habían cambiado las reglas de juego. Con la resolución 125 no salió a la calle únicamente la gente del campo, sino todos, porque habían cambiado las reglas de juego, que es algo que la gente no tolera.

Acá tenemos que ser creíbles y cada poder debe cumplir con su función. Tenemos que cumplir el rol como Poder Legislativo, como también deben hacer lo propio el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. En ese sentido, nosotros queremos y necesitamos que le vaya muy bien al Poder Ejecutivo, para que pueda atender los problemas de educación, de salud, de seguridad; para que pueda apoyar a los productores, a las intendencias y a las provincias que necesitan ayuda.

Entonces, necesitamos que le vaya bien al gobierno, pero hagamos cosas para que

le vaya bien. Si le damos los superpoderes, la ley de emergencia y todo lo que le estamos dando, dejamos de ser creíbles y los mercados comienzan a no tenernos confianza. Por eso, es fundamental el rol del Congreso, que debe legislar. Todas las leyes tienen que pasar por el Parlamento. Les puedo asegurar que si todos los senadores y los diputados tenemos que trabajar las veinticuatro horas, lo vamos a hacer y aprobaremos todos los proyectos que sean necesarios, pero que sean necesarios para el crecimiento no de unos pocos, sino de la economía en general, que es lo que todos queremos.

Por eso, adelanto mi voto negativo a este proyecto. No quiero que piensen que estamos en contra de alguien o del gobierno de turno, ni nada por el estilo. Tenemos que estar a favor de la gente. Por eso, necesitamos credibilidad, para que el dinero no se vaya al exterior, sino que quede acá; y van a quedar acá si les damos certeza y confianza.

Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra el señor senador Lores.

Sra. Colombo.— Señor presidente...

Sr. Presidente (Pampuro).— Perdón, señora senadora. Pero cuando le concedí el uso de la palabra, usted no estaba presente en el recinto.

Tiene la palabra el señor senador Lores.

Sr. Lores.— Señor presidente: en principio, quiero aclarar que mi posición respecto de este tema que estamos considerando tendrá un enfoque particularmente político, pues no soy un hombre de leyes. De todos modos, respeto profundamente el análisis jurídico que han hecho las señoras senadoras preopinantes. Pero así como creo que son muy importantes y valiosos los aportes desde el punto de vista jurídico, me parece que no tenemos que perder de vista aquellos vinculados con el componente político de estos temas trascendentales que consideramos en el Congreso de la Nación.

Todos los gobiernos, por lo menos desde el restablecimiento de la democracia en la Argentina, han utilizado, de una u otra manera, superpoderes y facultades delegadas, y no sólo los gobiernos nacionales, sino también muchos provinciales.

Aquí se han discutido y analizado las sucesivas prórrogas sancionadas después de la reforma constitucional de 1994, de cómo en 1995 se gambeteó el vencimiento del plazo con una nueva prórroga y de cómo hubo nuevas prórrogas posteriores de estas facultades delegadas. Ahora se ha llegado a la situación actual en la que, por primera vez —por lo menos desde que estoy sentado en esta banca—, observo que un proyecto del Poder Ejecutivo sufre sustanciales modificaciones en la Cámara de Diputados que, a mi modo de ver, acotan este problema y nos permiten visualizar una salida importante y definitiva en el corto plazo.

Por lo pronto, se crea una comisión bicameral con facultades para compilar, analizar y dictaminar sobre estas leyes —sean 100, 200 ó 1901— para resolver esta cuestión en el futuro. También con visión política, tenemos que analizar o tener en cuenta que a fin de año habrá una nueva composición, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Por lo que todos hemos visto en el resultado de las últimas elecciones, evidentemente habrá una composición mucho más diversa, lo que enriquecerá el debate.

Entonces, asociando las cuestiones vinculadas con el funcionamiento de esta comisión bicameral y la nueva constitución del Parlamento, tal vez podamos salir definitivamente de esta temática de las facultades delegadas.

Por otra parte, quiero señalar que en este tema se ha focalizado demasiado la cuestión de las retenciones. Yo fui uno de los senadores que en la madrugada del 17 de julio votó en contra de la resolución 125.

Lo hice con convicción, y lo digo claramente, como lo dije en ese momento. Entonces critiqué duramente al campo por las medidas que habían tomado, medidas de fuerza que alteraron el funcionamiento de la Nación, que perjudicaron notablemente a provincias como la mía, que tiene en el turismo una fuente importante de recursos. En todos esos días se perdieron millones de pesos por esta actitud del campo. Sin embargo, consideré que en ese momento el principal responsable de esa situación era el gobierno nacional, porque nos había llevado a un callejón sin salida, con una política autoritaria, con un discurso de confronte, poniendo de un lado a los malos y del otro a los buenos. Es decir, en función de eso yo voté en ese momento en contra de la resolución 125, con otros fundamentos también. Porque me parecía que en el Congreso de ninguna manera debíamos aprobar una resolución que había sido emitida por un ministro, que en ese momento creo que ni siquiera estaba en funciones.

En esta oportunidad visualizo, incluso desde el punto de vista político, una situación diferente: es el campo el que ha adoptado una actitud parecida a la que en ese momento tuvo el gobierno nacional. Yo escuché los discursos que se pronunciaron en la Sociedad Rural; discursos agresivos, discursos violentos que nos devolvieron al pasado, ensalzando nombres como el de Martínez de Hoz.

Escuché a un miembro de la Sociedad Rural al cual le hicieron un reportaje, un señor de apellido Pereyra Iraola, que calificó de “yegua” a Evita, y cuando el periodista le preguntó: “¿Usted dijo ‘yegua’?”, respondió: “Sí, dije ‘yegua’”.

Esto me hace pensar que estamos cayendo de nuevo en una polarización política de altísimo riesgo para el país. Entonces, tenemos que manejar nosotros, que somos responsables de llevar la política por los cauces normales de las diferencias de opiniones, de las diferencias de criterios ideológicos, etcétera, sin caer en estos extremos que nos puedan poner en una situación difícil, en esta pelea de clases que nuevamente está recrudeciendo en nuestro país.

Hago énfasis en este tema del campo, pero no es el campo el único sector del país que está teniendo problemas. Creo sinceramente que hay sectores que están en mucho peor situación que la que está atravesando el campo en este momento. Pongo como ejemplo a mi propia provincia. Hace poco hicimos una reunión de la Comisión de Energía donde yo planteé con claridad —y no fui escuchado ni respaldado— que la provincia del Neuquén está subsidiando la provisión de gas a todo el país. Y yo digo, como político y como senador por mi provincia, que para Neuquén es un orgullo poder subsidiar el gas de los pobres, el gas de la garrafa, pero que Neuquén tiene todo el derecho de que se le reconozca el valor del gas que también está siendo utilizado por aquellos sectores de la población —de la agroindustria, del campo en la producción de fertilizantes, etcétera— que pueden pagar a valores mucho más elevados.

Por otra parte, el gas es un recurso no renovable, y aunque no me crean se termina dentro de seis años. El gas que tiene Neuquén, que provee el 51 por ciento del gas que se consume en el país, consumiendo la provincia sólo el 1.5 por ciento, se termina dentro de seis años. Esto no lo va a sufrir solamente la provincia del Neuquén, que se transformará en un páramo, sino que lo sufrirá todo el país, porque tendremos que comprar el gas a valores muchos más elevados, y entonces sí va a haber un verdadero tarifazo.

Pero volviendo a la cuestión, quería decir que esto no se da solamente en mi provincia. Ayer se planteó en la reunión de labor parlamentaria el tema de Tierra del Fuego. Ese tema debió ser tratado hoy, porque las urgencias que tiene la provincia hermana de Tierra del Fuego no pueden postergarse. Sin embargo, se acordó que esto se tratará recién el 2 de septiembre, y los hermanos de Tierra del Fuego están esperando esta solución para poder salir adelante.

En definitiva, dado el panorama que se nos presenta con esta comisión bicameral, que por primera vez aparece incorporada al texto de la ley, con la cuestión de la conformación de la nueva Cámara de Senadores y de Diputados en el próximo año, visualizo que a corto plazo vamos a poder salir de esta cuestión en forma definitiva.

Por eso es que anticipo mi voto afirmativo al proyecto que ha venido de la Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Reutemann.

Sr. Reutemann. – Señor presidente: vengo a este cuerpo a fundamentar mi voto negativo referido a la prórroga de la delegación legislativa.

Lo hago en base a la convicción de que es imprescindible encarar seriamente la resolución de los problemas en el marco de una mayor calidad institucional.

Todos sabemos que la última prórroga conferida hace tres años vencerá el 24 de agosto próximo. Por eso, comprendemos la urgencia de su tratamiento, pero no los argumentos expuestos a favor de su continuidad, que no alcanzan a conmover los principios y valores por los que he trabajado siempre.

Desde el punto de vista jurídico, es particularmente relevante recordar los alcances del artículo 76 de la Constitución Nacional, que tras la reforma de 1994, y en el marco de las atribuciones del Congreso de la Nación, establece taxativamente la prohibición de delegar facultades, con algunas excepciones, y también la cláusula transitoria octava, que fijó un plazo de vigencia, salvo que el Congreso Nacional la ratifique expresamente por una nueva

ley.

En ese contexto, el Congreso Nacional ha venido procediendo a delegar facultades al Poder Ejecutivo Nacional, primero en 1999, luego en el año 2002, más tarde en el año 2004 y finalmente en el año 2006 con la vigente ley 26135, cuya prórroga vence este lunes. En todos los debates parlamentarios en oportunidad de tratarse este tema se ha insistido con la crisis jurídica que se produciría ante la falta de prórroga y en la necesidad de hacer un estudio a fondo de dichas facultades delegadas para determinar con fundamento cuáles debían prorrogarse por necesidades institucionales y cuáles no. Este estudio a fondo, en definitiva, nunca se concretó y es una materia pendiente que debemos abordar en forma inmediata con el dictado del Digesto Jurídico.

Con respecto al caos jurídico que se anuncia que se produciría en caso de no delegarse las facultades al Ejecutivo, en rigor no sería tal, ya que en todo caso el Congreso puede y debe tratar todas las iniciativas puntuales que sean necesarias respecto a normas que permitan preservar la seguridad jurídica y el Estado de derecho. Es decir, el Poder Ejecutivo nacional en lugar de remitir este proyecto de ley de delegación de facultades en forma genérica y casi universal podría enviar al Congreso las normas que específicamente requiere para su adecuado funcionamiento, en la certeza de que todos los legisladores nacionales en uso de sus facultades y en un auténtico ejercicio de responsabilidad política vamos a apoyar todas y cada una de las facultades que sea menester delegar si correspondiera.

Se estima que existirían más de 1900 leyes que contienen prescripciones por las que delegan facultades al Ejecutivo, relacionadas con cuestiones diversas como el Código de Minería, el Código Aduanero, el Código Alimentario, etcétera.

Creo necesario destacar la importancia de la cuestión de las atribuciones delegadas que se derivan de la aplicación del artículo 755 del Código Aduanero, que han llevado al Poder Ejecutivo nacional a emprender una errada política en el sector agropecuario.

Este conflicto que afecta a gran parte de la sociedad argentina ya lleva demasiado tiempo y no se resuelve, entre otras causas, por dar continuidad a la delegación legislativa a través de la sanción de este tipo de leyes.

Bien lo saben todos los habitantes de mi provincia cuánto han sido afectados por una política de retenciones al agro —que no discrimina entre pequeños, medianos y grandes productores y, además, por zona— que, con la excusa de "desojizar", logra efectos contrarios, ya que perjudica la siembra de maíz, de trigo, de girasol, y es un desaliento a la producción y a la toma de riesgos, en el marco de un clima de negocios y de imprevisibilidad que está llevando a una profunda desaceleración de la economía, y a una baja o ausencia de incentivos a la producción de alimentos de la agroindustria, que perjudica inclusive al transporte.

Ya en sendos proyectos legislativos de mi autoría, presentados en diversas oportunidades, se propició específicamente la derogación de los artículos 755 y 756 del Código Aduanero, como asimismo las demás normas complementarias y decretos o resoluciones del Poder Ejecutivo dictados en virtud de ellos.

Esa ha sido mi posición constante y permanente durante estos años. Entonces, sería un contrasentido que ahora avale una nueva delegación que altera mis más íntimas convicciones y que, en lo que atiene al Código Aduanero, incluso ha merecido que muchos juristas hayan sostenido que se ha venido actuando en la materia en violación de expresos mandatos constitucionales.

Por ese motivo, que el Congreso resigne, una vez más, la fijación de políticas públicas de fondo y de largo plazo en un tema crucial como el de la producción agropecuaria, es un despropósito que no lee la crisis sectorial y regional que afecta a los argentinos. Y de votarse favorablemente esta iniciativa, una vez más dejaremos que el Poder Ejecutivo nacional fije por sí mismo, y de acuerdo con su criterio, las políticas fiscales o tributarias.

Delegar facultades al Poder Ejecutivo una vez más, como si nada hubiera ocurrido o como si nada debiera suceder, en nada ayuda al equilibrio de los poderes ni a lo que la ciudadanía le pide a su dirigencia ni a la relevancia que debe tener el Congreso de la Nación. Congreso que tras el último acto electoral, y en espera de sus representantes —que asumirán el 10 de diciembre próximo—, debe recuperar su rol de caja de resonancia de las discusiones de los grandes problemas del país, y de encuentro de soluciones con el máximo consenso posible, a fin de tomar cuanto antes las decisiones fundamentales que esperan los ciudadanos

y las ciudadanas argentinas.

Por este motivo, y por todo lo expuesto, votaré por la negativa el presente proyecto de ley.

Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.

Sr. Cabanchik.— Señor presidente: antes de referirme al fondo del tema en discusión, quiero aclarar que mi interpretación es que hoy estamos considerando un dictamen en minoría. En otras oportunidades, durante el trabajo en comisión se dijo que un proyecto que cuenta con dictamen en minoría no debería ser debatido en el recinto. Sin embargo, hoy estamos debatiendo un dictamen en minoría. Por lo tanto, quisiera dejar esto aclarado para no dejar sentado a futuro el precedente. Pretendo que quede asentado que se trata de un hecho de excepción que hoy estemos considerando un dictamen en minoría, con los mismos usos y costumbre que un despacho en mayoría

A continuación, me referiré al fondo del asunto.

Me parece que es claro para todos, por experiencia propia, que valoramos la salud cuando nos enfermamos.

Es decir que para nosotros la salud es una presencia real en nuestra vida sólo cuando la perdemos, cuando se nos resiente. Algo similar pasa con el orden del derecho para la salud o para la vida de una nación entera, de un pueblo. Sólo cuando perdemos el orden del derecho, al igual que cuando perdemos la salud, porque estamos enfermos, la extrañamos; cuando perdemos el orden del derecho lo extrañamos y luego somos enfáticos enfervorizados defensores o nostálgicos del derecho perdido.

Es claro que en esta discusión se anulan tanto la fragilidad del derecho como lo que podríamos llamar el derecho de la fuerza. Esto es lo más importante o más general respecto de lo cual este debate está teniendo lugar, porque mucha de la legislación delegada es legislación de facto, porque el Poder Ejecutivo, que es el principal beneficiario de la delegación, para fijar sus políticas con menores regulaciones, puede imponer dentro de un orden jurídico establecido por todos los vericuetos que el mismo permite, el derecho de la fuerza por sobre la fuerza del derecho. Pero aquí estamos en el Congreso Nacional; estamos también custodiando la vigencia de la Constitución Nacional y además se trata de una materia en la cual tenemos el mandato de una Convención Constituyente porque estamos entendiendo en un problema que incluye la cláusula transitoria octava, que es un mandato constituyente para que el Congreso de la Nación obre en consecuencia.

Ahora, este es un poder fuerte de una Convención Constituyente que ha reformado la Constitución, que ha establecido en ese sentido un marco legal fundamental para la Patria, pretendidamente en algunos aspectos yo creo que así lo es, superior a la anterior, pero en algunas cosas me parece que no lo es. Y ese orden de derecho tendría que tener, entonces, toda la fuerza por sí mismo. Sin embargo, no es la situación en la que nos encontramos. A esa fuerza del derecho se le opone una y otra vez el derecho de la fuerza, el poder fáctico. Es un poder legítimo porque lo ostenta el Poder Ejecutivo legítimamente elegido pero desoyendo el ordenamiento constitucional que debe regir la República, porque como establece el artículo 1E de la Constitución, nuestro régimen es republicano, representativo y federal. Y aquí estamos los representantes del pueblo en uno de los tres poderes que deben ser respetados en un plano de igualdad. Pero ¿qué es, entonces, lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que esa cláusula transitoria octava no fue cumplida por el Congreso Nacional. Ahora, el incumplimiento es básicamente del Congreso pero en el Congreso hay mayorías y minorías, así que quiero decir que yo interpreto que la principal responsabilidad de este incumplimiento es de la mayoría legislativa, del oficialismo, porque es bastante natural que el Poder Ejecutivo aproveche todo lo que el orden legal le permite para ejercer los poderes fácticos con los que puede hacerse, pero el Poder Legislativo debe custodiar la vigencia plena de la Constitución Nacional.

Entonces, en mi opinión, este es el principal defecto que tenemos que remediar. Está bien, es el conjunto del Congreso Nacional el que no ha cumplido en el 99 lo que debía haber cumplido por mandato constituyente.

Ahora bien, el artículo 76 es muy claro en lo que determina en su segundo párrafo, exceptuando cualquier delegación de facultades de algunos casos específicos que no entran en esta materia. Es decir que toda la legislación delegada a 1994 es la que aquí está en juego, y cualquiera que subsista luego de 1994 debe ajustarse al artículo 76 de la Constitución

Nacional.

Por eso, me parece que no cabe duda alguna de que hoy no se puede volver a prorrogar este corpus legal delegado.

Se ha argumentado que habría un caos jurídico de no hacerse esta prórroga. Sin embargo, no veo ningún fundamento para sostener que se abriría la puerta a un caos jurídico de no prorrogar la delegación legal.

En realidad, están los derechos adquiridos y, además, es clara la Constitución cuando dice, justamente, en el citado artículo que la caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.

Es decir que todo derecho adquirido, todo el conjunto de reglas jurídicas vigentes, sigue vigente en virtud del mencionado artículo. Lo que cesa es la posibilidad de que facultades legislativas descansen en el Poder Ejecutivo. Lo que se tendría que reponer, lo que ahora estamos obligados a reponer, es la división de poderes. Seguir delegando la facultad legislativa en el Poder Ejecutivo es seguir consagrando el derecho de la fuerza por sobre la fuerza del Derecho. Sin embargo, cuando nos enfermamos, cuando se pierde el orden constitucional y el orden del Derecho, lo extrañamos. Así como nos maltratamos a nosotros mismos cuando, estando sanos, no nos cuidamos para no enfermarnos, ahora maltratamos el orden del Derecho.

Entonces, si hasta aquí se cometió un error al realizar prórrogas sucesivas, no se debe seguir persistiendo en él. Lo digo en lo que respecta al hecho mismo de que se siga prorrogando la delegación de facultades. Porque aquí están en juego la delegación de la competencia y la delegación de la vigencia. A lo que nos oponemos quienes no estamos de acuerdo con esta iniciativa es a la delegación de la competencia.

Lo que decimos es que a partir de las cero hora del 24 de agosto de 2009 el Poder Ejecutivo ya no puede seguir ejerciendo la facultad que antes ejercía por delegación. O sea, el orden legal vigente sigue así hasta tanto no se le opongan decretos y leyes correspondientes.

Además, me parece que hay algo en donde más que avanzar lo que se hace es retroceder, involucionar. Me refiero a realizar delegaciones en la figura del Jefe de Gabinete de Ministros. Eso no resiste el menor análisis en cuanto a que es anticonstitucional.

Hasta ahora hay un festival de subdelegaciones en juego. Tal como se dijo en la Comisión de Asuntos Constitucionales es como si hoy cualquier funcionario, sin haber sido electo por nadie, o en todo caso más que por la titular del Poder Ejecutivo, se considerara legislador. No obstante, aquí estamos los representantes votados por el pueblo para eso. No puede ser que un ministro, secretario o subsecretario legisle por sí en virtud de la delegación de facultades de la que hablamos. Entonces, claro, parece un gran avance que, a partir de ahora, eso lo haga solamente la presidenta de la Nación —el titular del Poder Ejecutivo— o el señor Jefe de Gabinete de Ministros.

¿Dónde está el fundamento constitucional para permitir que el Jefe de Gabinete de Ministros siga legislando, diría, de facto, porque no se ajusta a Derecho?

El artículo 87 de la Constitución Nacional, en uno de esos momentos totalmente claros de la norma, dice: “El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la Nación argentina.”

Esto es taxativo. Es decir, la titularidad del Ejecutivo está en manos de una sola persona. ¿Cómo puede ser que deleguemos en manos del jefe de Gabinete? Eso es inconcebible desde el punto de vista de la Constitución.

Entonces nos encontramos frente a qué va a hacer este Congreso Nacional con la reiteración del predominio de lo que podríamos llamar el orden de la excepción. Es decir, estamos constantemente frente a un estado de excepción.

Es materia del pensamiento y de debates políticos contemporáneos la cuestión de que hoy el estado de excepción, en todo el mundo, parece haberse confundido con el estado de derecho. La excepción se ha vuelto regla.

Por el comportamiento y la práctica que tiene el Poder Ejecutivo en el ejercicio de la administración pública, yo diría que cumple a rajatablas con ese giro de excepcionalidad que predomina en el mundo. En la Argentina, vivimos en un estado de excepción permanente, pero que encuentra los subterfugios necesarios para pretender ser pleno estado de derecho.

Por eso digo que es el derecho de la fuerza y no la fuerza del Derecho, que es lo que tenemos que privilegiar en este recinto.

El proyecto CD 49/09, en su artículo 1° promueve una ratificación de esta delegación de facultades. Pero contiene una subdelegación porque afirma que el titular del Poder Ejecutivo nacional y el jefe de Gabinete de Ministros ejercerán exclusivamente las facultades delegadas. No hay ningún fundamento jurídico para que nosotros deleguemos en el jefe de Gabinete. Acabo de leer el artículo 87 de la Constitución, que dice que el Poder Ejecutivo es ejercido sólo por el presidente de la Nación, y la delegación sólo puede hacerse, literalmente, según la Constitución, al Poder Ejecutivo. ¿Qué se deduce de estas dos premisas? Que sólo se puede delegar en la titularidad del Ejecutivo, que según el 87 es unipersonal, y lo ejerce la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no un funcionario nombrado por ella. Me parece que eso debiera ser revisado incluso por la bancada oficialista. Entiendo que nunca encuentra márgenes para diferenciarse de los dictados del Poder Ejecutivo, pero nuevamente, de esa forma, desde el Poder Legislativo, estamos profundizando los poderes de facto. Me refiero, en este caso, al poder fáctico que deviene de hacer ley por decreto, de hacer legislación a partir de funcionarios no elegidos en el orden vigente para ser legisladores. Eso es poder de facto, no es poder que se ajuste a derecho.

Por eso digo que es manifiestamente inconstitucional el dictamen que estamos considerando, que cuenta con media sanción, porque delega en el jefe de Gabinete sin tener apoyo constitucional.

Antes de volver a la línea fundamental, quiero citar a algunos constitucionalistas en beneficio de lo que estoy sosteniendo, que sostienen que el jefe de Gabinete es un auxiliar del presidente, que no puede quitarle competencias al presidente, que sólo puede dictar reglamentos autónomos en materias que le competen, pero no dictar reglamentos de ejecución, reglamentos delegados, ni decretos leyes. También Quiroga Lavié ha escrito en el mismo sentido, y otros constitucionalistas prestigiosos. Es decir, de nuestra propia lectura de la Constitución, me parece que si todos compartimos una razón común no hay apoyo para esta subdelegación o delegación en el jefe de Gabinete. Y la opinión de los expertos va en el mismo sentido.

Sabemos que esto profundiza un debilitamiento de este cuerpo, del Congreso Nacional. Se ha argumentado lo del caos jurídico. Creo que otros senadores ya opinaron en ese mismo sentido de que no hay tal caos jurídico. Están todas las condiciones dadas para que la Comisión Bicameral que se va a crear, efectivamente se cree, y se aboque a la tarea que el Congreso se debe. Pero, mientras tanto, no hay por qué prorrogar este corpus legal.

Quiero reiterar, entonces, que debemos tener mucho cuidado, porque los poderes fácticos son eso: poderes fácticos. Y cuando se abre la puerta a que lo que rige es el poder fáctico, luego no hay derecho, por ejemplo, a considerar que tal o cual poder fáctico es destituyente, dado que —y esto lo digo en un tono más polémico—, yo pienso ser custodio del orden constitucional siempre, porque es mi compromiso como legislador nacional.

Pero todos tenemos la responsabilidad de ser parte del gobierno; el Congreso Nacional es parte del gobierno. Habitualmente hablamos del gobierno nacional identificándolo con el Poder Ejecutivo. Sin embargo, esto es un deslizamiento que ocurre como consecuencia de que asociamos gobernabilidad con el Poder Ejecutivo, como concentración de poder. Ese es, aparentemente, el concepto que tiene este Poder Ejecutivo, ya que constantemente identifica gobernabilidad con concentración de poder.

Recuerdo que en el debate sobre la resolución 125, en este mismo recinto, eso estuvo constantemente en el aire, y así fue declarado por las máximas autoridades del país. Aquí mismo se lo argumentó.

Hace poco, en la Comisión de Asuntos Constitucionales el señor senador Pichetto preguntó: "La cuestión es, ¿nos van a dejar gobernar o no?" Esto ya concede el punto. Expresar las cosas en esos términos, es aceptar que la concentración de poder es la única forma de gobernar; que el Congreso Nacional, donde están expresadas todas las voces en una representación directa del pueblo, no es parte de la gobernabilidad; y, coyunturalmente, que el 28 de junio el pueblo no se ha expresado en el sentido en que efectivamente lo hizo, cuando se expresó pidiendo que gobernemos juntos oficialismo y oposición y reclamando que se reparta el gobierno entre el Ejecutivo y el Legislativo. Creo que ese fue el sentido más profundo del

voto y que la convocatoria al diálogo fue una puesta en escena para honrar ese sentido.

Sin embargo, si hoy convertimos en ley otra prórroga de delegación de facultades y el proyecto de ley de superpoderes, estaremos contradiciendo la significación del diálogo y desoyendo el mensaje de las urnas del 28 de junio.

Además, luego, ¿cómo vamos a tener fuerza oficialismo y oposición parlamentaria para decir a cualquier poder fáctico: "no pasarán"? No vamos a tener el Derecho ni la razón de nuestra parte, porque nosotros mismos habremos abusado del derecho de la fuerza y no de la fuerza del Derecho.

Luego podré continuar con estas reflexiones, si me permite el cuerpo, cuando discutamos los superpoderes; porque creo que hay una matriz común en todo esto. Es decir, en ambos proyectos estamos enfrentando esta tentación, quizás a veces comprendida legítimamente —es decir, con un convencimiento real— de asociar gobernabilidad con concentración de poder. Pero, precisamente, si uno refuerza allí el poder, luego esto se convierte en el hilo más delgado por donde se corta el esquema. Si todo el poder está en un solo lugar, luego la supuesta fuerza destituyente debe ir por ese poder, solamente a ese lugar. Pero si el poder está repartido y es participado por las distintas voces de la República, vamos a tener República para rato, que es lo que queremos nosotros y el pueblo argentino, que una y otra vez lo ha reclamado.

Es responsabilidad de todos, pero aún más de la bancada oficialista, escuchar ese reclamo y actuar en consecuencia.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senadora Colombo.

Sra. Colombo. — Señor presidente, señores senadores: nos encontramos, sin duda, ante la inminente quinta prórroga de la legislación delegada y frente a esa circunstancia cabe recordar los debates previos en los cuales se dio sanción a las leyes 5148, 25645, 25918 y 26135, que es la próxima a vencer el 24 de agosto.

En los debates parlamentarios de todas estas normas fue recurrente la mención a la imposibilidad de avanzar en determinar cuál era la legislación delegante o delegada si no se contaba previamente con el Digesto Jurídico Argentino. Como todos sabemos, se había sancionado una norma, la 24967, por la que se creó este Digesto Jurídico Argentino. En ella, además de establecer cuáles son los objetivos de dicha ley, en el artículo 9º se fijan responsabilidades concretas para el Poder Ejecutivo nacional como encargado de la confección del Digesto Jurídico Argentino, un plazo para el trabajo de la comisión de juristas que luego fue prorrogado por un año más en el año 2005; es decir, que originariamente ese plazo venció en el 2005; también se conforma una comisión legislativa y en el artículo 15 se dice que dentro de seis meses de elaborado el proyecto el Poder Ejecutivo nacional lo elevará al Congreso; se crea en el ámbito del Parlamento nacional una comisión y establece un plazo para la reglamentación de la ley.

El Digesto se hizo, pero previo a eso, cuando se sancionó la primera prórroga, que es la 25148, en el Senado se anexó un listado de normas proporcionadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros. Allí están todas las normas que contienen delegación legislativa. Estamos hablando de hace diez años: del año 1999. O sea que en 1999, al momento de aprobar la primera prórroga, este Senado anexó la lista de las leyes que contenían delegaciones y que había sido elaborada por la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El Digesto Jurídico Argentino se creó por ley y se avanzó en su trabajo. En ese sentido, existe una publicación del doctor Antonio Martino respecto de esta obra, a la que califica de ciclópea y monumental. Él dice que la Argentina lidera a los países de la región en tener un régimen de consolidación de las leyes vigentes y de sus reglamentaciones.

En ese trabajo, que se dividió en dos grandes ejes, él explica que una comisión de expertos trabajó para la elaboración del manual de técnica legislativa; la otra comisión de expertos trabajó para la revisión de todas las normas sancionadas desde el año 1853 en adelante, con el objetivo de determinar cuáles eran las normas que habían sido aprobadas, cuáles eran contradictorias con el sistema jurídico vigente y cuáles eran caducas o de plazo cumplido. Incluso, el doctor Martino plantea en su análisis, como dato anecdótico, que a través de ese estudio se había detectado que, por ejemplo, la ley número 1 estaba duplicada y que, por suerte, la 1 bis había sido derogada. Después plantea cuestiones de carácter

prácticamente anecdótico. Él concluye diciendo que lo que se procuró es saber cuál es el derecho que está en vigor como base fundamental del funcionamiento del sistema político de nuestro país porque, de otro modo, siempre hay que recurrir al arbitrio de la Corte Suprema de Justicia para que decida cuáles leyes son constitucionales o inconstitucionales. Sin embargo, a veces el árbitro no tiene en claro cuál es el universo de leyes vigentes.

Realmente, son cosas demasiado serias como para que ahora estemos por crear otra comisión cuando existen estudios como el Digesto Jurídico Argentino, que ha sido entregado, de acuerdo con lo que se estima, entre los años 2005 y 2006 al Ministerio de Justicia de la Nación, que a su vez tenía el deber de remitirlo al Congreso en el plazo que la Ley 24697 establece. Al respecto, no tengo conocimiento si ha sido o no remitido al Congreso para su tratamiento. Me parece que estamos incurriendo en una falta a nuestros deberes funcionales.

Cuando el senador por Formosa planteaba que no nos encontramos ante una cultura de un sistema representativo, sino de delegaciones, por supuesto que es inocultable la responsabilidad que el Congreso de la Nación tiene en esto. En ese sentido, hace un momento el senador por la Capital Federal planteaba claramente que las responsabilidades también son compatibles con el grado de responsabilidad, valga la redundancia, que cada sector tiene.

En este Congreso no ha habido un sistema de mayorías y minorías, o de primeras minorías y segundas minorías. Realmente, deberíamos asumir en este momento las responsabilidades que tenemos y, sobre todo, quienes tuvieron mayores responsabilidades por haber sido mayorías parlamentarias durante casi todo este período democrático iniciado en el año 1983.

El propio Martino plantea que de 45 mil leyes o enunciados normativos, entre leyes y decretos, haciendo la eliminación de las que habían sido abrogadas o tenían el plazo cumplido o habían caducado, quedaban 20 mil normas. A su vez, si a esas 20 mil normas se las analizaba bajo la óptica de ver cuáles eran contradictorias con el sistema jurídico vigente, no quedarían más de 5 mil normas. Incluso, él planteaba en ese trabajo que esto era como tener el sueño —no recuerdo cómo lo planteaba— del sistema jurídico ordenado, que sea un universo no solamente dominable de normas, sino también determinable.

Esto debe haber ingresado al Congreso y aquí debe haber responsabilidades en quienes han ejercido el cargo de Ministro de Justicia de la Nación, que deben responder por ellas, no solamente los legisladores.

Por supuesto, no vamos a aprobar una nueva delegación, una nueva prórroga, porque no hay atenuantes, no hay excusas. Al respecto, está el trabajo del IFEP que hace diez años ha sido anexado a la sanción que le dio el Senado a la primera prórroga; está el trabajo que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de un instituto jurídico de su dependencia; está el trabajo del Digesto Jurídico Argentino.

Entonces, está todo eso pero lo que nunca estuvo fue la voluntad política de resolver esta cuestión para terminar con la discrecionalidad de la que han hecho uso y abuso todas las administraciones gubernamentales en la Argentina desde 1983 para aquí, algunas más y otras menos, pero sobre las cuales la ciudadanía se ha pronunciado de manera clarísima y tajante en la elección del 28 de julio.

Sr. Presidente. — La senadora Negre de Alonso le solicita una interrupción.

Sra. Colombo. — Si no disminuye mi tiempo, se la doy encantada.

Sr. Presidente. — Para nada. Igual le queda un minuto y medio.

Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: es para darle a la senadora el dato que estaba señalando. El Ministerio de Justicia mandó ese trabajo el día 11 de agosto al Senado, cuando ya se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados, y el 12 de agosto tuvimos reunión de comisión y ahí tomamos conocimiento.

Sr. Presidente. — Continúa en uso de la palabra la señora senadora Colombo.

Sra. Colombo. — Escuché que decía eso en su intervención, lo que no sabía exactamente es si lo que promete Martino en esa publicación, que no la pude incorporar en la versión taquigráfica porque no se puede imprimir, es que alrededor del mes de mayo del año 2005 puede haber habido una prórroga de no más de un año. Ese trabajo iba a ser entregado al Ministerio de Justicia de la Nación.

Entonces, ¿por qué demoró el Poder Ejecutivo Nacional en remitir ese informe al que estaba obligado por una ley al Congreso Nacional? Serán preguntas muy interesantes que le podremos plantear al doctor Aníbal Fernández cuando venga a visitarnos.

Digo esto porque hemos pasado años con los superpoderes y sin contar con el informe del jefe de Gabinete de Ministros. Entonces, ¿en qué República vivimos? ¡Cómo no va a haber pobreza en la Argentina! ¡Cómo no va a haber injusticia distributiva, si estamos ante una democracia vaciada de contenido, con un régimen constitucional vigente en plenitud donde no se respeta el principio de división de poderes!

Finalmente, tal como lo había planteado, no vamos a acompañar el dictamen de la mayoría, pero sí el de la minoría —en este caso, de la Unión Cívica Radical— porque declara concluidas todas estas normas delegantes o delegadas. No obstante, formulamos dos disidencias parciales que obedecen a que el dictamen de los correligionarios de la Unión Cívica Radical incurren en dos cuestiones que perjudican de manera directa y objetiva a la provincia de Catamarca, porque dejan vigentes las retenciones a las exportaciones mineras.

Efectivamente, en los artículos 5° y 17, establecen una cláusula de garantía al sector agropecuario, asegurándole que no tendrá retenciones sin ley. Por lo tanto, quisiéramos darle esas mismas garantías también al sector minero, que para nuestra provincia tiene una importancia sustantiva. Digo esto porque las retenciones mineras a Catamarca le han generado un perjuicio económico que es demostrable y objetivo, porque impacta sobre las utilidades de la empresa YMAD, que es la empresa interestadual que integra Catamarca; y por otra serie de razones que —para no abusar del tiempo disponible— quedarán fundadas en la inserción que solicitaré.

Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Jenefes

Sr. Jenefes.— Señor presidente: en primer lugar, quiero hacer algunas aclaraciones.

Se ha dicho por ahí que estamos tratando un dictamen en minoría. En realidad, estamos tratando el dictamen que tiene la mayor cantidad de firmas de acuerdo con el artículo 105 del Reglamento. Por lo tanto, es el dictamen que se tiene que poner a consideración.

En segundo lugar, por allí también se dijo que no entendían...

Sr. Cabanchik.— Pido la palabra para una interrupción...

Sr. Presidente.— Le solicitan una interrupción, senador Jenefes.

Sr. Jenefes.— No voy a conceder ninguna interrupción. Yo escuché atentamente a todos los senadores. Por lo tanto, no voy a conceder a nadie interrupción alguna.

En segundo lugar, también escuché que algunos no entendían por qué se facultaba al jefe de Gabinete a la firma de los decretos vinculados con la legislación delegada. Aclaro que el artículo 100, inciso 12, de la Constitución, expresamente determinada el porqué; y que ese artículo 100, inciso 12, fue incluido en todas las leyes que trataron esta temática de la delegación legislativa.

Señor presidente: quiero destacar que la delegación legislativa y su prórroga que hoy consideramos nacen de la cláusula transitoria octava de la Constitución nacional, la que dispone que la legislación delegada preexistente que no tiene un plazo para su vigencia caducará al término de cinco años, excepto que el Congreso de la Nación ratifique dichas normas por una nueva ley. Por lo tanto, eso es lo que estamos haciendo hoy: la ratificación por una nueva ley de la legislación delegada en materias de administración y de emergencia pública.

A su vez, ésta no es una cuestión novedosa, porque los cinco años que fijaba la cláusula transitoria octava vencieron en 1999. Se dictaron cuatro leyes en distintas presidencias, por las que se prorroga hasta agosto de 2009, y hoy estamos tratando una nueva prórroga. Esas leyes fueron dictadas durante las presidencias de los doctores Menem, De la Rúa, Duhalde y Kirchner.

Los debates que se realizaron —lo voy a decir en forma muy sintética, atento al tiempo que tengo— giraban en torno a que quienes pedían la prórroga de la delegación legislativa lo hacían fundados en que se iba a producir una inseguridad jurídica como consecuencia de un eventual vacío legislativo. Esta posición la sostuvo el Partido Justicialista cada vez que fue gobierno. Por su parte, los opositores sostuvieron que, si existía esa posibilidad de vacío legislativo, teníamos que tener la prórroga, pero que le debíamos poner

un fin porque había muchas facultades delegadas que debía recuperar el Congreso de la Nación.

Cuando la Alianza estuvo en el gobierno, los argumentos que esgrimió el justicialismo para la prórroga de las facultades delegadas, también, los sostuvo el radicalismo. El justicialismo sostuvo: “Bueno, esta vez la damos, pero estudiemos de tal manera que recupere el Congreso de la Nación esa facultad delegada”. Así pasaron diez años, y estamos en 2009, pidiendo una nueva prórroga hasta agosto de 2010.

El tema de las leyes delegadas, que datan de mucho tiempo atrás de 1994, ha entrado en ebullición como consecuencia de un asunto central que tuvo debate en este Senado de la Nación: el de las retenciones. En ese sentido, algunos senadores preopinantes expresaban que este era uno de los temas que más les preocupaba en cuanto a la prórroga que se pudiera dar a la legislación delegada.

Quiero aquí reiterar un poco de historia de la República Argentina, un poco de historia del artículo 4º de la Constitución nacional, que es el que determina que corresponden al gobierno de la Nación los derechos de exportación y de importación con los cuales provee a sus gastos. Ese artículo 4º tiene una larga historia de luchas, de enfrentamientos, de sangre argentina.

Desde 1816 hasta 1852, hubo en la República Argentina una lucha entre unitarios y federales. En 1852, cuando Justo José de Urquiza triunfa sobre Rosas en la batalla de Caseros, se inicia el camino hacia la organización nacional. Se dicta una Constitución en 1853, que dispone expresamente, en el artículo 4º, que los derechos de exportación y de importación le corresponden al gobierno nacional.

Como consecuencia de esta normativa —porque era la pelea de los derechos del puerto de la ciudad de Buenos Aires—, la provincia de Buenos Aires no forma parte de la Confederación Argentina. A raíz de ello, la Confederación Argentina empieza a fomentar el puerto de Rosario. Todo lo que entraba por el puerto de Rosario tenía una serie de ventajas, y todo lo que entraba por el puerto de Buenos Aires y quería ser introducido al resto de las provincias argentinas tenía un gravamen. Como consecuencia de ello, se produce una lucha: la Confederación Argentina se enfrenta con la provincia de Buenos Aires. Se produce la batalla de Cepeda, en la que triunfa Justo José de Urquiza y se firma el Pacto de San José de Flores. Allí, se hace una reforma a la Constitución que dispone que los derechos de exportación y de importación por seis años pertenecían únicamente al gobierno de la Nación.

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires declara nulo el Pacto de San José de Flores y se produce otro enfrentamiento entre argentinos: entre la Confederación Argentina y la provincia de Buenos Aires. Esta vez, gana la provincia de Buenos Aires en la batalla de Pavón. Se decide llamar a elecciones. Mitre es elegido presidente. La República Argentina entra en la famosa y triste guerra de la Triple Alianza. En 1866, se decide modificar nuevamente el artículo 4º y se dispone que los derechos de exportación y de importación corresponden al gobierno de la Nación en forma permanente, porque el gobierno necesitaba recursos para sostener la guerra. Desde 1866 a la fecha, eso no se ha modificado. Por ello, declamar que los derechos de exportación y de importación son coparticipables es totalmente improcedente.

A su vez, desde 1876 hasta la fecha, todas las leyes aduaneras creaban los derechos de exportación y de importación, pero delegaban en el Poder Ejecutivo la fijación del *quantum* de lo que se iba a pagar de los derechos de exportación. Eso era así por una simple razón: los derechos de exportación y de importación constituyen un formidable instrumento de política financiera del Poder Ejecutivo. Es algo vivo, que cambia. Como consecuencia de ello, en el Código Aduanero, que crea los derechos de exportación y de importación, es claro que resulta válido que se delegue la fijación del *quantum* de los derechos de exportación en el Poder Ejecutivo.

Por ende, esta delegación en materia de derechos de exportación y de importación a mí no me preocupa. Lo que me preocupa hoy es la morosidad que tiene el Congreso de la Nación. No busquemos responsables: es este Congreso de la Nación que, desde el año 1994, en que se modifica la Constitución nacional, no ha avanzado con el propósito de poner un punto final a este tema de la legislación delegada.

Ahora se está creando una comisión. Espero que esa comisión, en el tiempo que fija el proyecto de ley sancionado por la Cámara de Diputados, pueda determinar qué legislación delegada tenemos y qué legislación delegada constituye un exceso de la Constitución y debe recuperar el Congreso, de tal manera que no tengamos un vacío jurídico, de tal manera que realmente la recuperemos los derechos indiscutibles que tiene el Congreso de la Nación.

Por estas razones, voy a votar favorablemente el proyecto de ley que ha venido de la Cámara de Diputados, porque considero que es un instrumento que hoy necesita el Poder Ejecutivo con el propósito de que no se produzcan una laguna jurídica y una inseguridad jurídica.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Castillo.

Sr. Castillo. — Señor presidente: voy a ser muy breve, por cierto.

Considero que el tema que nos está convocando tiene las cuestiones históricas previas a la Convención Constituyente de 1994, la sanción de la cláusula transitoria octava y las consecuencias políticas que de ella derivan. Previo a esto, no había una legislación que prohibiera o consagrara expresamente, de manera tal que las delegaciones se iban sucediendo o llegaban al estadio público a través de la revisión del Poder Judicial o de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, la primera noticia estentórea es el caso Delfino, de 1927, relacionado con la reglamentación del Puerto de la ciudad de Buenos Aires.

En los años siguientes, van apareciendo otros temas, en algunos casos con ribetes escandalosos, porque se trataba de la creación de contravenciones mediante delegaciones que luego se transformaban en edictos policiales. Todos los senadores conocemos el accionar de la "policía brava", la policía de los conservadores de la década del 30. Estas policías, a través de interpretaciones delegativas, llegaron no sólo a hacer interpretaciones del Código de Procedimiento Penal sino también de las propias tipologías penales.

Al respecto, hay casos muy típicos: por ejemplo, que mediante contravenciones, se hacía ilusorio el derecho de reunión establecido por el artículo 14 de la Constitución Nacional. En ese sentido, en virtud del caso Schuster, de 1941, se decía que se consideraba razonable restringir el derecho de reunión si se trataba de comunistas. Posteriormente, la Corte —a través de un fallo extraordinario— llegó a plantear que tratándose “como en el caso de marras” —es decir, de comunistas— dicha acción era lícita. Se imaginan que esto que sucedió en la década del 30, más los otros planteos que fueron más bien de orden comercial, hicieron que, en algunos casos, esas delegaciones tuvieran ribetes casi escandalosos.

Cuando se impulsa la reforma constitucional de 1994, se contempla en el artículo 76 de la nueva Constitución el principio de la no delegación, salvo en los supuestos de materias determinadas de administración o de emergencia pública, y por un tiempo determinado. Esas serían las cuestiones básicas a analizar.

No hice referencia a la cuestión puntual de la cantidad de leyes sino a estas cuestiones anecdóticas, pero sí quiero decir en cuanto a los objetivos de la reforma que lo que estaba en claro era recrear nuestro sistema constitucional más allá de los intereses contrapuestos.

— *Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador Rubén Hugo Marín.*

Sr. Castillo. — Seguramente, el mayor interés del Partido Justicialista era la reelección de Carlos Saúl Menem y, de nuestro lado, quizás la mayor fuerza en cuanto al núcleo de cuestiones básicas era recrear algunas cuestiones de institucionalidad.

Lo que sí planteamos allí era la necesidad de amenguar el sistema presidencialista, de fortificar al Congreso y de dar mayor independencia al Poder Judicial. Al menos, ese era nuestro pensamiento y ese fue el sentido de muchas de las normas plasmadas actualmente, que nos llevará muchos años más interpretar y dar su justeza cabal.

Hace poco escuché decir a Tomás Eloy Martínez —un gran escritor argentino que vive en Estados Unidos— que, muchas veces, cuando dos personas leen incluso un libro de ficción o una novela y luego se ponen a conversar sobre él, parecería que no se tratara de la misma historia. Algo similar suele ocurrir a veces en política, por ejemplo, cuando se fue

protagonista, nada más ni nada menos, que de una reforma constitucional; así, tenemos interpretaciones tan diversas respecto de estos temas.

Ahora bien, más allá de las interpretaciones, cuando se trata de una delegación —sobre todo de este tipo—, lo que está en juego o en debate, en definitiva, es la división de los poderes: este es el juego; este es el tema del que se habla cuando se discuten las delegaciones.

En esta delegación, si pudiéramos ser gráficos, es como si se nos angostara la capacidad o el poder del Congreso y se nos enanchara el camino del Poder Ejecutivo. Pero, la verdad, la reflexión es que, ni siquiera cuando se delega, el Congreso realmente da facultades al Presidente de la República. En verdad, hay un desplazamiento del eje del poder desde el Congreso a la burocracia técnica de un gobierno. Y acá voy al tema que son los beneficiarios: la burocracia técnica de un gobierno que no tiene responsabilidad política.

Acá se le ha dado delegaciones a alguien que ha sido seis años jefe de Gabinete: burócrata técnico. Era funcionario de Alfonsín, era jefe de asesores jurídicos del gordo Mazzorín, ¿se acuerdan? ¿Cuándo votaron ustedes a ese jefe de Gabinete? ¿Cuándo fue a una boleta? Después, el otro funcionario técnico extraordinario...

Acá, hemos asistido muchas veces a debates en los que se demonizaron, en las recordaciones, las leyes del liberalismo de la década del 90, haciendo planteos de otra cuestión diferente del proyecto en cuestión. Pero cuando venían a defender el proyecto, allí mismo estaba Pezoa. Cuando yo era gobernador —y a algunos otros, acá, les habrá pasado—, cada vez que abríamos la puerta del despacho de Pezoa pidiendo alguna cuestión del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, lo primero que nos decía era “¿ya privatizaste la luz?, ¿ya privatizaste el agua?, ¿qué haces con el banco? Tenés que liquidarlo”.

Señores: lo que estoy planteando es que en este Congreso, en este recinto, hay ex presidentes de la República, hay ex gobernadores, y los que no sean ex, todos los que están sentados acá han ganado o perdido una elección. Acá hay responsabilidad política de quienes estamos sentados acá y, con las delegaciones, lo que estamos haciendo es dar es una facultad a burócratas —lo digo en el buen sentido, no en forma despectiva— que no tienen esa responsabilidad. Y no estamos hablando de Francia. No estamos hablando de un país donde se hace un *cursus honorum* de la burocracia. Estamos hablando de la República Argentina con todas las características que tiene.

Este es el tema que estamos tratando, y lo estamos haciendo en un régimen constitucional presidencialista como es el que tenemos en nuestro país, donde no disponemos de las chances del voto de desconfianza que hay, por ejemplo, en un régimen parlamentario, donde está el gobierno. O al revés: donde el presidente de la República disuelve el Congreso y ahí queda zanjado este tema de las delegaciones. En un caso, habrá que hacer un nuevo gobierno; en otro caso, se convoca a elecciones y hay un nuevo Parlamento que elegirá un nuevo ministro.

Acá, cuando hay esas delegaciones, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con estos caminos de duda, que ¿quién los zanja? En nuestro sistema, los zanja en forma general el Poder Judicial y, en forma particular, la Corte Suprema de Justicia. Este es el tema; le daremos vuelta o no le daremos vuelta, pero acá se trata de un concepto de poder. Seguramente, se va a aprobar; seguramente, se darán las votos y habrá una nueva delegación. Pero, también, tengan en cuenta a quién están transfiriendo ustedes el poder, porque eso es lo que nosotros acá estamos discutiendo.

Señor presidente: en estas últimas elecciones del 28 de junio, yo diría que ha habido una expresión de la sociedad. En muchas oportunidades, la sociedad vota —y lo ha hecho— dando fuerza al Ejecutivo, y en este país lo hemos visto: se le dio fuerza cuando se necesitaba de la autoridad. Yo huelo que lo que se votó el 28 de junio es que la sociedad quiere más bien una estabilidad; quiere una vuelta a la Constitución.

Quiere que estas cuestiones delegadas no existan más. Ha habido un ejercicio desmedido y abusivo de ciertas cuestiones que ha hecho que la sociedad así se exprese.

Seguramente, todos hemos estado parados en distintas tribunas antes del 28 de junio y, además de saber cuáles han sido los resultados electorales, hemos visto algo muy

particular: no ha habido un voto atado a partidos políticos sino un apoyo a distintas cuestiones o expresiones reflejadas aquel 28 de junio.

De manera tal que cuando se habla de gobernabilidad, que en nuestro sistema viene del soberano, que es el pueblo, lo que hay que hacer es escuchar lo que dijo el pueblo que, en este caso, significa volver a la Constitución, volver a dar un equilibrio a esta zarandeada Carta Magna durante los últimos años a fin de afianzar la democracia y que haya un sentido de crecimiento y desarrollo avalado por la expresión del pueblo durante el último acto eleccionario.

— *Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.*

Sr. Castillo. — Quiero reiterar lo que dijo mi colega del Frente Cívico y Social de Catamarca.

Vamos a votar el proyecto de minoría presentado por la Unión Cívica Radical, aunque con la salvedad de lo relativo a las retenciones a la minería.

Reitero que el caso de la minería no es como el de la soja, donde uno ara, echa agua y vuelve a crecer. En este caso, la minería es una actividad extractiva: lo que se saca no regresa.

En este sentido, quiero decir que somos autores de un proyecto donde solicitábamos que el porcentaje de la retención fuera distribuido entre las provincias de la región. Como no nos dieron bolilla, perdón por la expresión, reiteramos una vez más que se quitaran esos derechos de exportación a fin de que, como Estado provincial, pudiéramos negociar directamente con la empresa un porcentaje a efectos de que una parte fuera reinvertida en nuestra zona.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Martínez.

Sr. Martínez (J.C). — Señor presidente: se ha puesto mucho énfasis en esta discusión en distintos pueblos y mediáticamente no tanto desde el punto de vista jurídico, sino más bien en lo que la delegación significa en materia de derechos de importación y exportación.

Concretamente, los sectores involucrados en estas cuestiones plantean dirimir este asunto en términos de las economías regionales y, tal como decía el senador Jenefer, en términos de lo que significó a nivel histórico el tema de los derechos de exportación y de aduanas, con sus desencuentros.

Cuando el año pasado votamos negativamente la Resolución 125 planteamos distintas cuestiones en el marco de lo que son las retenciones. De hecho, esperábamos que se abriera un debate en el Congreso de la Nación, en la sociedad y en el propio Poder Ejecutivo, pero lamentablemente no fue así.

Me gustaría traer a colación una cuestión donde la población de Tierra del Fuego, su población y la propia economía regional hizo aportes sin realizar ninguna clase de planteos porque creemos en un país federal e integrado.

Para ser más específico: el mismo día que se dictó la Resolución 125 se dictó la Resolución 127. ¿En qué consistía esa Resolución 127? Que el derecho de exportación de hidrocarburos gaseosos —el gas— iba a tener el ciento por ciento de retenciones sobre el valor de referencia más alto del gas importado por nuestro país.

Esto hizo, juntamente con la medida de suspensión de exportaciones en el 2007, que la economía regional de Tierra del Fuego se viera afectada. Pero la provincia de Tierra del Fuego, tanto sus habitantes como el gobierno, entendió que había que ser solidaria, que no se podía exportar gas cuando la Argentina no se autoabastecía.

Entendemos que tiene que haber un precio interno del gas regulado por el Estado para que haya energía barata. Entendemos que no se puede exportar gas barato y comprar gas caro y hemos sido solidarios, pero esto lo hemos manifestado en varias oportunidades.

Quiero hacer un planteo acerca de cuál es la matriz energética actual de la Argentina. El 49 por ciento de la matriz energética funciona en base a gas; el 41 por ciento, a base de petróleo; la energía nuclear aporta el 2,5; la hidroeléctrica aporta el 4 por ciento; biomasa aporta el 1,9 por ciento; el carbón, 0,7 por ciento. ¿Es correcto que el Estado nacional haga una política activa con los derechos de importación y exportación para el bien común y la integración regional? Sí, por supuesto.

¿Es correcto que un sector —no digo todos porque eso se planteó con la 125, pero en muchos casos, una segmentación de los pequeños productores— pida que les subsidien los insumos, energía barata, agroquímicos baratos, hierro barato y, después, pueda exportar a precios internacionales, sin retenciones? No, no es correcto.

¿Es correcto que ese sector exporte energía limpia con el 20 por ciento de retenciones —me refiero al biodiesel—, cuando la Argentina compra energía sucia, el fuel oil, para nuestras usinas eléctricas? ¿Es correcto? No, no es correcto.

¿Hay que discutirlo? Sí.

El Estado nacional tiene, a nuestro criterio, esas atribuciones. Tiene que tener la visión integral del país y de las economías regionales. Y éstas no podemos pretender que a cada uno se le devuelva lo que aporta, porque hay algunas provincias que no han sido favorecidas por la naturaleza o por distintas cuestiones de proximidad a los centros comerciales. Las provincias productoras aportamos muchísimo y se nos maltrata muchas veces, y se nos pone en el foco de atención como que somos insensibles a la cuestión que se está debatiendo con relación al tema rural. No es así.

Creemos profundamente en una visión de un país integrado, donde todos tenemos que aportar y se tiene que discutir. Pensamos que esta delegación legislativa que se está cuestionando se tiene que acabar. Me parece razonable el plazo de un año que impuso la Cámara de Diputados en la modificación. Creo que las subdelegaciones legislativas le han hecho mucho mal al país y esto se ha corregido. Hay que revisar todo en un plazo razonable y hay que buscar arribar a un acuerdo de todos los argentinos, vengamos del sector que vengamos, porque si seguimos promoviendo la división de los argentinos nos vamos a encontrar, como el año pasado, en un país con dos plazas a punto de un gran desorden civil. Y eso no es lo que queremos. Creemos que somos responsables.

En su momento, dimos los argumentos de por qué no acompañábamos. En esta oportunidad, nos parece razonable la sanción de Diputados, y el bloque de Tierra del Fuego, la senadora Díaz y yo vamos a acompañar ese proyecto.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora Latorre.

Sra. Latorre. — Señor presidente: en principio, vengo a adelantar mi voto negativo a este proyecto. Vengo a reiterar mi compromiso con el sector agropecuario que es, en definitiva, para mi provincia, la esencia medular y el sentido de su economía.

En razón de los episodios ocurridos en las últimas horas, vengo a desmentir enfáticamente haber habilitado el dictamen en mayoría con mi firma.

Firmo el dictamen en mayoría en disidencia total, consciente de que existía el número total de firmas por parte del oficialismo para bajar este dictamen al recinto, básicamente porque es impensable que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado no tuviera asegurados los votos del propio oficialismo.

Me llama poderosísimamente la atención que un sector de la Sociedad Rural de la provincia de Santa Fe haya constituido este tema de la firma en disidencia total en una cuestión de Estado, existiendo en mi provincia veintiséis sociedades rurales y sabiendo el sector agropecuario de mi provincia el compromiso que vengo manifestando con ellos y que, reitero, continuaré expresando a través de mi voto en función del mandato popular: así que lo desmiento enfáticamente.

El sentido de votar negativamente el adelantamiento de las elecciones en el momento en que esta ley fue abordada en el Senado de la Nación tiene que ver con este clima de intolerancia que reina hoy en el país. Nosotros sabíamos que la dirección del resultado electoral iba a ir en contra de la convivencia con el Parlamento nacional durante seis o siete meses el cual, contra las urgencias legítimas de los ciudadanos, va a estar expresando quizás otra direccionalidad respecto del voto. Para que no se engañe la ciudadanía: muy probablemente recién en el mes de marzo se va a poder observar ese equilibrio y ese resultado reflejado respecto del voto popular del pasado 28 de junio.

Creo que los parlamentarios debemos tener el control de la ciudadanía. Nos deben mirar con lupa. A mí me honra estar en el Senado de la Nación y que miren con lupa mis movimientos, pero me parece que ningún actor social debe cruzar la raya. Cada parlamentario sabe perfectamente lo que hace. Cada uno toma un compromiso. Todos hemos sido elegidos

por el voto popular y todos damos cuenta, frente a la ciudadanía, del sentido de nuestro voto y del comportamiento en cada una de las comisiones.

Reitero mi voto negativo y el compromiso con el sector agropecuario, que es la esencia de la economía de mi provincia. Repito que, de ninguna manera, el dictamen firmado en disidencia total, habiendo querido firmar un dictamen único de minoría —como le consta a los otros sectores opositores y tal como hiciéramos con el tema de los superpoderes—, no responde si no al mensaje de la ciudadanía.

En aquellas políticas medulares de Estado contra el oficialismo, por favor: ¡dejen de lado las diferencias partidarias y unifiquen criterios! Se logró en el tema de los superpoderes, pero no con el proyecto sobre las facultades delegadas. Ese fue el verdadero sentido de mi voto.

Quizás hoy, en este clima de intolerancia instalado en el país, particularmente en mi provincia —donde circula todo tipo de versión infundada—, lo pensaría muy bien y, en todos los escenarios, emitiría un dictamen personal. Quizás hoy también pensaría mucho antes y no estamparía mi firma ni siquiera en disidencia total. Pero no sé si esto, a su vez, hace a la pérdida de la calidad de la democracia y de la República.

Sr. Presidente. — Señora senadora Latorre: no la quise interrumpir para que no perdiera la ilación de su discurso, pero el señor senador Cabanchik quería efectuar una aclaración. ¿Le concede la palabra?

Sr. Latorre. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Cabanchik.

Sr. Cabanchik. — Señor presidente, señora senadora: gracias por la interrupción.

Me parece muy bien que haya podido terminar su exposición la señora senadora a fin de no perder la ilación de su discurso.

Solamente quería remarcar lo que dije antes, que fue respondido también por el señor senador Jenefes ratificando mis expresiones: yo no dije que no debía considerarse primero el dictamen que estamos discutiendo. Obviamente, se debe considerar primero porque reglamentariamente, cuando sólo hay dictámenes en minoría como creo que ocurre en este caso —ahora la senadora Latorre lo ha confirmado perfectamente—, el primero que debe considerarse es aquel que contiene la firma del presidente de la comisión: en este caso, del senador Nicolás Fernández. Entonces, está bien que se considere primero este dictamen. Pero que quede claro que es un dictamen en minoría: que una firma en disidencia total no puede ser parte de una voluntad mayoritaria.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Jenefes.

Sr. Jenefes. — Señor presidente: reitero que nuestro Reglamento es claro. Este dictamen tiene la firma de 7 senadores a favor de la aprobación del proyecto. Hay una firma en disidencia total, pero no otro dictamen. Entonces, es el dictamen en mayoría.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la señora senadora Estenssoro.

Sra. Estenssoro. — Señor presidente: la iniciativa que estamos considerando desde hace unas horas, es decir la prórroga de la delegación en el Poder Ejecutivo de facultades que son propias de este Congreso Nacional, así como el proyecto de ley que vamos a considerar a continuación, la llamada ley de superpoderes, tienen un núcleo común y una visión política similar. Por ello, solicito permiso para hacer una reflexión conjunta, considerando a los dos como una unidad, aunque luego analice a su turno, en más detalle, cada uno por separado.

Ambos proyectos de ley se fundan en el concepto de que nosotros, los representantes del pueblo, los legisladores de la Nación, los senadores y diputados de este país, no estamos en condiciones de asumir la totalidad de las responsabilidades y funciones que nos otorga la Constitución.

Ambas iniciativas se basan en el preconcepto —por no decir prejuicio— de que los legisladores de la Nación no estamos en condiciones de hacernos cargo de la totalidad de las atribuciones ni del mandato que depositaron en nosotros los ciudadanos y las ciudadanas que nos votaron para ocupar estas honorables bancas.

¿Cuántas veces hemos escuchado decir que el Congreso no trabaja, que los legisladores son lentos, etcétera? A mi juicio, estos proyectos que estamos considerando en esta sesión se fundan en un razonamiento similar que sería el siguiente: como nosotros, los

legisladores, no tenemos ni la agilidad, ni la voluntad de trabajo, ni el buen criterio —y ahora voy a leer directamente los fundamentos del proyecto de ley sobre superpoderes— “para optimizar el uso de los recursos públicos o garantizar la gobernabilidad y la capacidad de respuesta del Estado en el marco de una crisis económica y social”, se nos insta a ceder al Ejecutivo —que, aparentemente, sería mucho más eficiente— algunas de las facultades esenciales que tenemos como senadores de la Nación. Se nos pide que renunciemos a cumplir acabadamente con lo estipulado en dos artículos de la Constitución Nacional, los artículos 75 y 76, que conforman el artículo IV de nuestra Constitución, donde se estipulan nuestras atribuciones.

Estas delegaciones, que se han naturalizado en la Argentina —hoy estamos tratando dos proyectos que conllevan esa delegación de facultades—, no son ingenuas. Le pegan al corazón de los dos únicos artículos que establecen nuestras atribuciones y que definen la esencia del Poder Legislativo y la naturaleza de nuestro poder como poder autárquico de la República.

Veamos qué dice el artículo 75: “Corresponde al Congreso: 1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las evaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación.”. El inciso 8 de ese mismo artículo nos da la potestad de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión.

Por otro lado, el artículo 76 dice claramente que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.”.

Pero en estos dos proyectos de ley, específicamente en el que estamos considerando, se nos pide que renunciemos temporariamente —en el que trataremos después sin tiempo fijo—, a algunas de nuestras facultades fundamentales sin plazos y sin causa en forma permanente.

Realmente, yo no comprendo por qué si la Constitución considera que para definir el presupuesto nacional y sus modificaciones es necesario llevar adelante un proceso deliberativo por el cual los que decidimos, los que mandamos en este caso, somos 72 senadores y 257 diputados elegidos por el pueblo, representantes de distintas regiones geográficas, de distintas visiones políticas, sectores sociales y económicos, que de allí deriva nuestra representatividad y riqueza, y no establece la Constitución nacional que sea el presidente y su jefe de Gabinete de Ministros quien lo haga de manera rápida e inconsulta, sin necesidad de consultar, ¿por qué nosotros, los senadores de la Nación, vamos a renunciar a estas facultades y responsabilidades?

Estamos hablando del poder que la Constitución nacional nos otorga a cada uno de nosotros. ¿Vamos a renunciar a nuestro poder frente al poder del Presidente y sus ministros? Realmente, me preguntó, ¿por qué? Si la Constitución nacional hubiera querido establecer un proceso unipersonal de toma de decisiones en temas tan sensibles como la fijación, por ejemplo, de los derechos de exportación e importación, o la definición del presupuesto nacional y sus modificaciones, lo habría hecho. Sin embargo, no fue así porque esta Constitución republicana y liberal es sabia; configuró un sistema donde el poder y la toma de decisiones, y de eso estamos hablando, están repartidos en tres poderes diferenciados pero equivalentes en cuanto a jerarquía para evitar la concentración y abuso de poder.

Delegar es no ser responsables; delegar es pensar que no tenemos la capacidad de atender los temas urgentes con responsabilidad cuando el Poder Ejecutivo lo requiera. Delegar es decir, cuando las cosas no funcionan: “Yo no fui, fue Menem”, que estuvo aquí hace un rato pero ya se fue. Últimamente la culpa es de Menem o fue de de la Rúa. “Yo delegué, yo no fui. Fue Duhalde, fue Cavallo” y después va a ser Kirchner. “Yo no fui, yo delegué”. Eso es lo que quiere decir delegar. Nosotros estamos aquí para ejercer nuestras facultades, nuestras responsabilidades, para usar nuestro poder de decisión y no para delegar.

La matriz delegativa es la base del hiper presidencialismo, que se ha naturalizado en la Argentina; que es una concepción y una praxis a mi juicio errada. Muchas veces leemos

en los diarios o hay debates sobre que por la naturaleza hiper presidencialista de nuestro sistema tendríamos que hacer una reforma de nuestra Constitución nacional para ir hacia un sistema parlamentario. En realidad, nuestra Constitución nacional no establece el régimen hiper presidencialista, que nosotros practicamos violando su espíritu y su letra. No tenemos que reformar la Constitución nacional: la tenemos que cumplir, practicar, hacer realidad.

Esta concepción hiper presidencialista cree que el presidente —o la presidenta, en estos momentos— sabe más, puede más, vale más que los integrantes de los otros dos poderes: el Legislativo y el Judicial. Estamos hablando de nosotros mismos. A mi juicio es un resabio feudal, autoritario y personalista de un Poder que necesita estar por encima de los controles y la necesaria rendición de cuentas. Así lo ha definido, como ya se lo citó muy bien, el cientista político Guillermo O'Donnell, que denomina a este tipo de democracia como “democracia delegativa” por contraposición a la democracia representativa.

Quiero citar algunas partes de un texto de O'Donnell. Dice que la esencia de esa concepción es que quienes son elegidos creen tener el derecho y la obligación de decidir como mejor les parezca que es bueno para el país —sería: “Aquí mando yo”—, sujeto sólo al juicio de los votantes en las siguientes elecciones. Creen que éstos les delegan plenamente esa autoridad durante ese lapso. Dado esto, todo tipo de control institucional es considerado una injustificada traba. Por eso, los líderes delegativos intentan subordinar o cooptar estas instituciones.

Respaldados en sus éxitos, los líderes delegativos avanzan entonces en su propósito de suprimir, doblegar o neutralizar las instituciones que pueden controlarlos. Sus seguidores, en este ámbito, repiten escrupulosamente el discurso delegativo: ya que el presidente —o la presidenta— ha sido electo libremente, ellos tienen el deber de acompañar a libro cerrado los proyectos que les envía el gobierno. Olvidan, como dijo el senador Naidenoff, que la Constitución nacional establece que el Congreso no es menos gobierno que el Poder Ejecutivo. Entonces, producen la mayor abdicación posible que puede cometer una Legislatura: conferir y renovar repetidamente facultades extraordinarias al Ejecutivo. De eso estamos hablando. La delegación es una abdicación.

En consecuencia, no voy a acompañar esta iniciativa ni tampoco el proyecto de ley de superpoderes. No delegar facultades a ningún gobierno, ya sea propio o ajeno, ha sido la posición histórica de Elisa Carrió, del ARI y de la Coalición Cívica. Y esta es una posición ideológica, política, pero también moral. Desde que la Argentina y su dirigencia eligieron, hace ya unos veinte años, el camino de aprobar leyes de excepción, de emergencia, de superpoderes y de delegación de facultades, nos hemos convertido en una democracia institucionalmente débil y en una sociedad mucho más desigual, injusta, corrupta y, lo que es peor, desesperanzada.

Para terminar, quiero citar un fragmento de la versión taquigráfica de 2003, cuando por primera vez el entonces presidente de la Nación Néstor Kirchner pedía superpoderes durante el tratamiento del presupuesto 2004. En ese momento, Elisa Carrió dijo: “Tiene que quedar clara la tarea que está realizando este Congreso. Todo esto es inconstitucional. Y no es que lo estemos diciendo recién ahora; desde 1995, año de nuestra asunción, que votamos en contra de la delegación de facultades. Asimismo, en la Convención Constituyente también votamos en contra, advirtiendo que por vía del artículo 76 se vaciaban las facultades del Parlamento nacional, tal como está ocurriendo”.

Y más adelante citaba: “El inicio de este camino, por demás innecesario frente a la legitimidad que ostenta el presidente de la República —se refería a Néstor Kirchner—, significa el comienzo de la ruta trágica de la Argentina, donde sólo nos damos cuenta del presente cuando ya es pasado. Dentro de dos, tres o cinco años vamos a decir qué mal que actuamos quienes estuvimos en aquel momento”.

En 2004, Elisa Carrió señalaba lo siguiente: “Quiero decir que las leyes vendrán al Parlamento sin poder tocarles una sola coma; y los legisladores sólo podrán aprobarlas u oponerse a ellas. Con ello, se habrá vaciado de sentido al Poder Legislativo, a sus propias vidas políticas —las nuestras— y al sentido institucional. Cuando nos demos cuenta de lo que significa una democracia refrendataria, va a ser tarde”.

Este es el núcleo de lo que ahora discutimos. En ese sentido, quiero hacer más las consideraciones jurídicas de las señoras senadoras Negre de Alonso y Escudero. No soy jurista, pero creo que ellas han explicado muy bien por qué es innecesario seguir prorrogando esta delegación legislativa y cómo ya mismo podemos retomar esa facultad.

Por otro lado, a nadie se le escapa que una de las cosas que estamos discutiendo...

Sr. Torres.— Pido la palabra para una interrupción.

Sr. Presidente. — Señora senadora Estenssoro: el senador Torres le solicita una interrupción. ¿Se la concede?

Sra. Estenssoro. — Prefiero terminar con mi exposición. Además, como la mayoría de los señores senadores del oficialismo que hicieron uso de la palabra no han querido conceder interrupciones, que cada uno ocupe su tiempo para realizarlas.

Decía que a nadie se le escapa que, además de considerar la prórroga de la delegación de facultades, también hablamos del Código Aduanero y de la posibilidad de que el Congreso de la Nación retome la facultad que le da la Constitución Nacional de fijar los derechos a las exportaciones e importaciones. Y allí está el conflicto con el campo. Creo que mantener latente el conflicto con el sector agropecuario desde hace más de un año y medio puede ser para el gobierno una pulseada que demuestra su fortaleza o su poder, pero tiene consecuencias gravísimas no sólo en la economía de las provincias agropecuarias, sino en la de todo el país.

Nuestras naciones vecinas están saliendo de la crisis económica que todos sufrimos por la debacle internacional, sin embargo la Argentina está cayendo cada vez más en un pozo negro, en una recesión de la que no sabemos cuándo podremos empezar a salir adelante.

De manera que seguir con estas delegaciones, continuar pensando en que no tenemos que discutir acá en el Congreso, buscando un consenso, una política de retenciones a las exportaciones agrícolas y una política de hidrocarburos, como temas de Estado, y delegar estos asuntos en la presidenta y un puñado de personas, está teniendo consecuencias gravísimas.

Por otra parte, me sorprende que senadores que vienen de provincias petroleras avalen una política energética que con una visión solamente fiscalista nos ha llevado a la sobreexplotación de los yacimientos y a la depredación —porque esta es la palabra real— de nuestros recursos de hidrocarburos. En este sentido, hemos pedido el 43 por ciento de nuestras reservas de gas en esta década.

Por lo tanto, creo que retomar nuestras facultades es asumir nuevamente el poder, la responsabilidad y la obligación que nos da la Constitución de definir en el Congreso de la Nación las políticas de Estado de nuestro país, sea del campo -como en este caso- o también de hidrocarburos.

Por el contrario, si seguimos delegando y renunciando a esta función que la Constitución y los ciudadanos nos dieron, seguramente la Argentina seguirá en este estado de enorme tristeza. Yo tengo mucha tristeza y me imagino que aunque estemos acá debatiendo y viendo quién gana esta votación, en realidad todos sabemos los apremios que está pasando el país y el estado de crispación, de angustia, de inseguridad con el que estamos viviendo todos. Me hago eco también de los ciudadanos, que realmente están muy angustiados; y creo que no nos merecemos vivir en este estado de zozobra.

Por eso voy a votar a favor de que el Congreso de la Nación recupere su poder y su responsabilidad como uno de los poderes de la Nación.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra la senadora González de Duhalde.

Sra. González de Duhalde. — Señor presidente: quiero responder, en principio, a algunas de las dudas que planteara la señora senadora Estenssoro. Se preguntaba por qué. La verdad, si uno pudiera tener aquí algún sistema como con el que cuenta “Televisión Registrada” podría tener archivado un montón de elementos que nos dirían el porqué.

En dos oportunidades escuché al doctor Pichetto decir: “No estamos aquí para ser librepensadores”. ¿Cómo puede ser que no podamos expresarnos? En una oportunidad, palabras más, palabras menos —porque no pude encontrar la versión taquigráfica—, la hoy presidenta de la Nación, con un pensamiento absolutamente diferente, durante sus años como

senadora —y siendo su esposo presidente—, dijo: “Somos el brazo legislativo del gobierno y ejecutamos sus políticas”.

“Somos” será el oficialismo, si quiere acompañar un proyecto de gobierno. No era el pensamiento de la presidenta de la Nación durante todos los años en que compartí con ella la Cámara de Diputados. Claro que no. Pero a veces los conversos nos terminamos convirtiendo en fundamentalistas y defendemos las cosas que son indefendibles.

No voy a hablar en términos jurídicos, porque lo ha hecho por mí gente realmente muy capacitada. Presenté mi propio proyecto —me acompañaron lo señores senadores Pinchetti de Sierra Morales y Romero—, en donde digo que caducan todas las normas el 24, pero que las áreas jurídicas de cada Ministerio, que saben cuáles utilizan de esa cantidad de leyes —que en realidad no sabemos cuántas son— digan de qué cantidad se trata, que vengan acá y que en un plazo de cincuenta días el Congreso se comprometa a tratarlas.

Todos sabemos cómo va a terminar este debate: haremos una catarsis y nada más que eso.

Pero yo durante la campaña decía que entrábamos en una zona gris, peligrosa, entre el 28 de junio y el 10 de diciembre —en realidad estoy siendo buena con la fecha, porque sería hasta el 1° de marzo—, por esta forma que tiene el gobierno de ejercer el poder.

Hoy la presidenta en un acto muy importante, a través de un contrato guardado bajo siete llaves, estará entregando 600 millones de pesos del Estado nacional para el fútbol, que es un deporte que divide a los argentinos. Pero la verdad es que en mi orden de prioridades no está.

Escuchaba a la senadora Corregido decir que los intendentes de su pueblo le plantean la necesidad de acompañar este proyecto para no perder las obras. Es un reconocimiento explícito, ¡explícito!, de la forma que tiene este gobierno de ejercer el poder: “Si me acompañás, te doy; no me acompañás, te corto los víveres”, hablando en criollo.

Entonces, estamos entrando en un proceso que no es solamente perjudicial en materia de nuestra función como Congreso de la Nación, sino en un proceso peligroso para la Argentina, porque esta hegemonía nos está haciendo perder la libertad hasta de ser libre pensadores, según el senador Pichetto. Para mí es trágico, pues en el medio de todo eso está la gente y los problemas reales del país.

¿Qué votó la gente el 28 de junio? Para eso tuvimos rapidez; el Congreso estuvo presente para adelantar las elecciones. No hubo inseguridad. Lo acompañamos. Ahora parece ser que si no delegamos las funciones en el jefe de Gabinete de Ministros —no estoy discutiendo a la presidenta— o en un ministro, cualquiera sea, es peligroso. ¿Qué da más seguridad jurídica a los que nos miran de afuera? ¿Delegar facultades en un ministro o arrogarnos esa atribución, que es la que nos corresponde? Seguramente a cualquier país serio que ponga los ojos en nosotros va a decir: “Qué bueno, fue el Congreso que dijo sí o que dijo no”. Considero que eso da más seguridad jurídica.

Pero estamos atados a esta forma. Y la gente votó por un país normal. Sin embargo, seguimos discutiendo cuestiones que no tienen que ver con un país normal. Nos fuimos al siglo XIX, con Dorrego y Lavalle. Mientras nosotros teníamos ese problema entre unitarios y federales, en Brasil se estaba creando un imperio. Pero nosotros, como siempre, divididos, no buscando el consenso, no teniendo políticas públicas de Estado y siempre emparchando. Mientras los otros avanzan y nos pasan por encima, nosotros emparchamos, emparchamos, y así estamos los argentinos.

Entonces, es necesario que quienes gobiernan, y nosotros mismos, que somos parte del gobierno, que somos otro poder, entendamos que debemos recuperar nuestro rol, que tenemos que trabajar sobre diez políticas de Estado, que es necesario que encontremos un punto de consenso. Porque el diálogo, a ese diálogo que han llamado, ya desilusionó a quienes fueron convocados, porque en definitiva se sigue avanzando y continúan haciendo lo que les parece.

Es un disparate que se prorroguen estas facultades cuando en diciembre va a asumir otra composición en el Congreso. Ojalá esa nueva Cámara se atreva rápidamente con estas facultades delegadas. Creo que será así, porque muchos de los senadores que hoy votaremos este proyecto fuimos considerados por la gente como incapaces de ejercer la

función en la que estamos. En consecuencia, la gente buscó un cambio; y nosotros no respetamos ese cambio.

No quiero extenderme más porque hay diez oradores más que harán uso de la palabra. Simplemente, les digo que comparto la tristeza que hizo manifiesta la senadora Estenssoro, y que creo que ese es el sentimiento de todos, tanto de los que están en el oficialismo —a muchos de ellos los conozco y sé cómo piensan— como de los que nos ubicamos en el lado de la oposición, porque no estamos cumpliendo con lo que nos demanda la sociedad. La gente votó en contra del kirchnerismo no solamente por la situación económica sino, también, por la forma hegemónica de ejercer el poder. Por lo tanto, estamos volviéndole a fallar a la sociedad. Entonces, o tomamos conciencia de eso, o ninguno de nosotros —sin importar en qué lado del poder nos encontremos— podrá salvarse del enojo y de la indiferencia de la sociedad en su conjunto.

Considero que debemos recapacitar, asumir nuestro error y saber que la mejor manera de ayudar al gobierno es ejerciendo nuestra función y formando parte de un poder verdaderamente independiente.

Para finalizar, adelanto mi voto negativo al proyecto en consideración.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Marino.

Sr. Marino. — Señor presidente: creo que el Parlamento debe interpretar el mensaje que dio la gente a través de las urnas el 28 de junio pasado. Asimismo, los argentinos votaron en contra de la delegación de facultades.

El 28 de junio, la sociedad argentina se expresó de una manera muy clara: casi el 70 de los argentinos le dijo "Basta" —le dijo "no"— o le puso un freno a este uso y abuso de poder. Y me refiero a "abuso de poder" justamente porque estamos delegando en el Poder Ejecutivo atribuciones que son de todos nosotros, quienes pretendemos representar a las provincias argentinas.

Después de casi seis años, esta administración sigue cometiendo innumerables errores, y recorriendo caminos que no son los correctos a través de la implementación de políticas de Estado —absolutamente equivocadas en algunos casos—, en virtud de esas facultades que delegamos en el Poder Ejecutivo nacional.

Hay muchos ejemplos. Podemos hablar de la bochornosa e injusta distribución de los subsidios al transporte que terminó, nada más ni nada menos, en el procesamiento del ex secretario de Transporte —el señor Jaime—, a quien el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical denunció en varias oportunidades sin ningún resultado.

Podemos hablar también de las importaciones de gasoil, de fuel oil y de gas a precios altísimos, mientras se descuida lo que tenemos que proteger —las áreas de explotación— para que no ocurra en nuestro país lo que viene sucediendo de 2003 a la fecha: que no se invierte en los recursos de que disponemos ni pueden utilizarse tranquilamente sin gastar fortunas para su importación.

Las facultades que se pretende que sigan en manos del Poder Ejecutivo nacional son también las que le permitieron a este gobierno trabajar en una política de comercio exterior, y establecer un nivel de retenciones absolutamente injusto y confiscatorio. Recuerdo el debate que se produjo en el Senado hace un año atrás, cuando se consideró la Resolución 125.

Si todos fuéramos responsables deberíamos, por lo menos, repetir ese esquema. En cuanto a esas facultades, si nos referimos al artículo 755 del Código Aduanero, hace un año atrás todavía la producción estaba un poco mejor de lo que se encuentra actualmente. Y si a eso le agregamos el factor climático —que terminó de destruir la economía—, verdaderamente no debería delegarse nuevamente esa facultad en el Poder Ejecutivo.

En el caso de las retenciones, esa medida se intentó justificar haciendo referencia a "La mesa de los argentinos". Se trató de una mentira, tal como dijimos en ese momento, porque a esa "Mesa de los argentinos" es muy probable que el año que viene le falte pan, carne y leche, y que a esos productos debamos importarlos; algo realmente impensado en la Argentina. Jamás nos hubiéramos imaginado que llegaríamos a estos niveles para el año que viene. Pero también es cierto que nosotros debemos decir que aquí tenemos todo para poder producir. Somos un país especial, tenemos una naturaleza que es pródiga, suelo fértil,

tecnología de última generación —realmente todos los niveles al alcance para producir—, un empresariado rural productivo absolutamente comprometido y un gobierno que nos habla permanentemente de la justa distribución de la riqueza. Pero me parece que vamos a tener que empezar a preguntarnos cómo vamos a repartir esa riqueza si no la producimos, si no la generamos, si destruimos lo que realmente genera riqueza. Porque también es cierto que para distribuir, primero hay que generar, pues es difícil distribuir lo que no se tiene.

Tampoco creo que sea posible repartir la riqueza, ya que cada vez la brecha entre pobres y ricos es más amplia. Y no creo que distribuir la riqueza sea superar la barrera del 30 por ciento de pobres en la Argentina.

Con el uso de las facultades delegadas este gobierno ha permitido que funcionarios de tercera línea o nivel, como el señor Guillermo Moreno, manejen a discreción los datos de un servicio que es fundamental para la vida institucional de un país, pues al modificarse guarismos y estadísticas, se lo hace no sólo increíble sino poco serio, no permite que las inversiones se radiquen e impide que haya un sustento con el que podamos hacer frente a los requerimientos de la sociedad.

Hace un rato terminamos de votar la emergencia agropecuaria y nosotros decíamos que son insuficientes 500 millones de pesos para invertir en recomponer o revertir la difícil situación que tiene el sector productivo, que como dije hoy le inyectó nada más y nada menos que 30 mil millones de dólares al erario público en concepto de retenciones.

Pero por otro lado, nos encontramos que ahora se gastan 600 millones de pesos para financiar el fútbol, el déficit de los desmanejos de los verdaderos responsables que son los dirigentes de los clubes más importantes de la Argentina. O sea que vamos a seguir premiando la ineficiencia. Entonces, gastamos 600 millones en el fútbol y sólo invertimos 500 millones, que son absolutamente ineficientes, para la producción.

También es cierto que estas facultades delegadas le han permitido al gobierno tener a las provincias cada vez más oprimidas, más encorsetadas, más pobres, siempre delegando responsabilidades y quitándole recursos. Por eso, gobernadores mendigando, por eso gobernadores arrodillándose frente al poder central para poder conseguir lo que legítimamente les pertenece, porque no vienen a pedir otra cosa que lo que realmente les pertenece. Este es el premio: a quienes son amigos, les contribuimos. A quienes tienen el coraje o el valor o la necesidad de pensar distinto, los castigamos. Me parece que es un esquema poco serio.

Por eso, señor presidente, vamos a decir que no a la delegación de facultades, porque no queremos seguir convalidando este tipo de situaciones. También decimos que no porque queremos representar a ese sector que confió en nosotros el 28 de junio, no podemos defraudar a la gente que nos votó. En mi caso particular tuve el honor de que el partido al cual represento me nominara nuevamente como candidato a senador. Recorrí toda mi provincia diciendo que quería recuperar, entre otras cosas, las facultades que el Congreso había delegado en el Poder Ejecutivo nacional; y creo que lo peor que podemos hacer es defraudar justamente a ese electorado que se expresó claramente el 28 de junio.

También decimos que no, porque debemos recuperar la institucionalidad, tratando de que la división de poderes sea una realidad y no sólo un mero testimonio que está plasmado en nuestra Constitución Nacional.

Para terminar, decimos que no, porque no existe democracia si no hay división de poderes.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rossi.

Sr. Rossi. — Señor presidente: la primera pregunta que se formula y que nos debemos hacer nosotros es ¿qué estamos tratando? Y la respuesta es simple. Estamos tratando nada más y nada menos que delegación de facultades al Poder Ejecutivo nacional, que le son propias.

Esto, por supuesto, tuvo sus antecedentes en la Ley 25148, por un lapso de tres años; luego, mediante la Ley 25645, por un lapso de dos años más; y últimamente por la Ley 26135, del mes de agosto, por otros tres años.

Ahora, después de tantas prórrogas se toma por el atajo más simple: otra prórroga a esa delegación de facultades.

Mire, señor presidente, nunca he votado una delegación de facultades. Ni siquiera me importó el grado de honestidad o de transparencia que podía tener el funcionario a quien

se delegaba. Aun siendo el mejor funcionario y el más competente, no delegaría facultades porque represento a la provincia de Córdoba. Y cuando me votaron lo hicieron para que viniera al Congreso de la Nación a legislar y no a delegar. Me siento un legislador de la Nación y no un delegador de la Nación.

Créame, señor presidente, que cuando uno ve la claridad del texto constitucional y la disposición del artículo 75 de la Constitución Nacional en sus veintitrés incisos, que como comentario al margen es el más largo de la Carta Magna, uno se da cuenta de cuáles son las facultades de los diputados y senadores de la Nación.

¡Mire si habrá cosas por hacer en virtud de este artículo, que es el más largo de la Constitución Nacional! Pero si había alguna duda sobre la responsabilidad que nos otorga dicho artículo, el siguiente artículo -el 76- refuerza aquel concepto estableciendo que son facultades indelegables.

Hoy ya llevamos un montonazo de horas reunidos para ver cómo con *forceps* puede hacerse una nueva delegación. Se ha estado tratando de explicar a la gente lo inexplicable. ¿Si no están para legislar, para qué están? Esto sale del sentido común. ¿Cómo le explicamos a nuestra gente cuando nos pregunta por qué delegaron? ¿Cómo se lo explico a mis hijos y a mi señora? ¿Cómo se lo explico a mi nieto, que tiene diez años, que el otro día en Villa Elisa, en La Plata, estaba con la Constitución en la mano y me decía “abu, esto es indelegable” porque se lo habían enseñado en la escuela?

Pero se están delegando facultades y se está violando la Constitución. Cuando uno delega facultades que nos son propias se incumple con nuestra responsabilidad. Cuando uno delega facultades que nos son propias debilita instituciones de la democracia y del Congreso de la Nación. Cuando uno delega facultades se debilita el federalismo por el cual tanto lucharon nuestros prohombres de la historia.

Somos la Cámara de Senadores, la que representa a todo el país a través de sus provincias, que son su corazón federal.

Finalmente, cuando uno delega facultades somete a gobernadores e intendentes a la dependencia triste y miserable de ese poder político, a ese técnico de la caja de turno, a fin de acceder a los recursos que legítimamente les corresponden.

Creo que de todas las prórrogas habidas esta es la peor, más allá de que ahora se diga que se creará una Comisión compuesta por ocho senadores y ocho diputados. ¿Sabe señor presidente por qué digo que es la peor? Y esto me llevó a reflexionar que esto era peor que la Resolución 125. Porque más allá de que la Resolución 125 atacaba y agravaba fuertemente a un sector vital para la economía del país —particularmente del país federal al cual nosotros pertenecemos—, como es el campo, esto afecta a todo el sistema social.

Digo por qué me parece más grave. Usted fíjese lo que se estaría por aprobar. Y lo voy a leer, porque además de ser cuatro renglones, es el texto del dictamen en mayoría. En cuanto a la misión de la Comisión, dice el despacho, entre otros puntos que el informe debe analizar están los siguientes: a) cuáles son las leyes que delegan facultades —señal de que ni siquiera tenemos hecho el relevamiento—; b) cuáles de ellas están vigentes —con lo cual reconocemos que hoy estaríamos prorrogando facultades de leyes que estarían derogadas, cumplidas o vencidas en su tiempo; c) cuáles fueron modificadas, derogadas o son de objeto cumplido. Y lo más grave, el remate del inciso d), que dice que la Comisión tiene que valorar si las materias se corresponden con lo regulado en el artículo 76 de la Constitución Nacional, que es el que prohíbe la delegación.

La pregunta es inevitable. Cuando esta Comisión empiece a revisar, a mérito de una delegación ya votada y encuentre que esta era indelegable, ¿qué habremos cometido nosotros sino una clara y flagrante violación a la Constitución Nacional, por adelantado? Leo nuevamente el inciso d): “...si las materias se corresponden con lo regulado en el artículo 76 de la Constitución Nacional...” Es decir que hoy estamos por sancionar un dictamen, presumiendo que muchas de las facultades que estamos delegando están prohibidas por el artículo 76.

Otra pregunta. ¿A qué nos llevaron todas estas delegaciones? ¿A tener un país mejor? No; la respuesta es no. Nos han llevado a un modelo unitario y discrecional, en el que dependemos del humor y de la discrecionalidad de un funcionario de turno.

Y también nos tenemos que preguntar si acaso con esta delegación de facultades se han resuelto los graves problemas por los que atravesaba el país a partir de 2002, 2003. O si el INDEC, gracias a esta delegación, hoy tiene un grado de credibilidad por los técnicos que tiene.

¿Acaso hemos resuelto el problema con los jubilados, a quienes de una manera escandalosa se les va a aumentar el 6 por ciento para que lleguen a los 800 pesos por mes, con un manejo discrecional e irresponsable de los fondos de la ANSeS?

Hace un año y medio de aquel 11 de marzo, cuando se dictó la Resolución 125, y poco más de un año de aquella noche del 17 de julio de 2008, y sin embargo la gente de campo sigue sin respuesta, buscando solución a lo que piden, que es volver a la producción.

La pobreza. ¿Qué grado de solución le hemos dado a esta enorme franja de pobreza que se instaló en los argentinos y que hoy nos pone la piel de gallina?

El manejo de los subsidios. ¿Creemos, por casualidad, que el gobierno, a través de sus técnicos —como se dice acá—, el ex secretario Jaime, de Transporte, que ya ha renunciado y es investigado por la Justicia, ha manejado con objetividad, con criterio federal, con ecuanimidad, sin premios ni castigos, los subsidios en la Argentina? ¿Ha sido tan equitativo con el interior del país como con la Capital Federal? Sabemos que no.

Miren lo que ha ocurrido hace quince días en esta casa, el Senado de la Nación. Un secretario de Energía, un funcionario técnico, aprovechando estas facultades, sacó un decreto por el cual actualizó tarifas y dejó al país paralizado por los reclamos. Y vino aquí, merced a una muy buena iniciativa del oficialismo, a explicar qué había pasado. Sin embargo, el ingeniero Cameron siguió con la tosudez de sostener que había actuado en beneficio del país, y afirmando que los únicos que se veían afectados eran quienes conformaban el 5 por ciento de los ricos de la Argentina.

Mientras tanto, todos los medios de comunicación daban cuenta de las facturas de gas que estaban llegando, con hasta un 400 por ciento de aumento. Yo acompañé en persona a un matrimonio jubilado que recibió una factura de gas —él operado del corazón— a efectuar un reclamo, dado que había recibido su factura con un aumento del 250 por ciento.

Pues bien, todo esto lo decide en un escritorio chiquito, un funcionario respecto de quien nadie conoce la cara y a quien nadie reclama nada.

En cambio nosotros, por el contrario, cuando actuamos —bien o mal— somos responsables ante nuestra gente, porque nos conocen en el barrio y en nuestras ciudades, y porque nos señalan y nos siguen, sabiendo cómo estamos actuando ante cada de estas responsabilidades.

Señor presidente: fíjese lo que ocurrió hace un mes y medio en mi provincia, en Córdoba. Usted conoce que no pertenezco al espacio político del gobernador de mi provincia, Schiaretti. Al contrario, hemos tenido fuertes objeciones con él, desde el punto de vista político. Pero cuando se produjo la discriminación de Córdoba porque el gobernador Schiaretti había tenido diferencias con el gobierno central, reaccionamos en conjunto.

Nosotros fuimos claramente discriminados por el actual ministro de Economía, quien en su momento dijo: "A Córdoba no le debemos nada por la Caja de Jubilaciones." Sin embargo, después tuvieron que reconocer que habían firmado que nos debían 600 millones de pesos. Pero no los enviaban. Por esa razón, hoy está instalada una demanda por ante la Corte Suprema de Justicia.

Pero, ¿sabe, señor presidente, a qué llevó esta situación? A que todos los sectores de Córdoba reaccionaran. Se eligieron nueve diputados y tres senadores nacionales, y los tres senadores electos que estamos en este momento en actividad —salvo la senadora Giri, e incluyo al senador Urquía, porque ha firmado— y ocho de los nueve diputados electos —sólo una diputada que entró por el sector de Castello no firmó—, firmamos un acta pública ante toda la prensa y la ciudadanía de Córdoba por medio de la cual nos comprometimos, como punto número uno, a no votar nunca más un superpoder y, asimismo, a derogar las facultades delegadas y los superpoderes otorgados. Esto luego fue ratificado por la Legislatura de la provincia de Córdoba.

De una vez por todas, realmente tenemos que decir que el Poder Ejecutivo tiene que gobernar con poderes —con los poderes que le brinda la Constitución Nacional—, pero

no con superpoderes. Los superpoderes lo distancian de la gente; lo hacen dueño de toda la verdad, aunque no la tenga.

Y si algo faltaba para tener una lectura concreta de lo que estoy diciendo, está en las elecciones del 28 de junio, que encima que se adelantaron cuatro meses y se utilizaron para ellas candidaturas testimoniales, se violentó nuevamente la Constitución y las leyes que sancionamos por unanimidad en este mismo espacio. Porque cuando se buscan tanto políticas de Estado, acá hay que decir que se aprobó por unanimidad aquel cuarto domingo de octubre para tener las elecciones. Y, sin embargo, luego se cambiaron las reglas de juego y se adelantaron para el 28 de junio.

Pese a todo ello, ese día todo el país francamente dijo: "Este modelo no nos gusta. No nos gusta este estilo de gobernar. No queremos más superpoderes." ¿Sabe la suerte que significa esto, señor presidente? Porque cuando uno tiene desconfianza en la gente, como poder parlamentario, es muy difícil que la gente le crea. Pero hoy tuvimos la dicha, la posibilidad cierta, y lo demostró el conflicto del campo, de que se crea en el Congreso de la Nación. Nos piden a gritos y a los cuatro vientos que ejerzamos nuestras funciones y que no deleguemos facultades.

Sin embargo, desoyendo estos reclamos que fueron materia del pronunciamiento de las urnas, desoyendo el clamor de la gente y lo que yo veo en mi provincia, hoy nos aprestamos a delegar facultades, desentendiéndonos de la realidad.

Señor presidente: hace cinco años y medio estaba Daniel Scioli presidiendo la Cámara de Senadores y yo, delante de la mesa ovalada, juré defender la Constitución Nacional y no la quiero violentar. La quiero cumplir a rajatabla, quiero asumir las responsabilidades que nos son propias y quiero dar al Poder Ejecutivo nacional todas las herramientas que quiera con el consenso y con la participación de todos. Este es un Senado que ha dado muestras de que cuando ha tenido que debatir políticas de consenso lo ha conseguido. Y usted sabe que se sancionó por unanimidad la Ley 26222 cuando el Poder Ejecutivo dijo "Vamos a ir por la libre opción jubilaria". Después, el mismo gobierno desanduvo lo que teníamos, que era una ley sancionada por unanimidad. La ley electoral fue otro ejemplo de que se pueden lograr sanciones por unanimidad. Lo mismo pasó hoy con la emergencia agropecuaria, porque somos solidarios entre las provincias.

Seguramente, con esta madurez que hemos logrado después de tantos años vamos a poder encontrar el rumbo del equilibrio legislativo. El Congreso de la Nación tiene que ser el ámbito donde se sancionen las leyes y recordemos siempre que el artículo más largo de la Constitución Nacional —el 75— es el que establece nuestras responsabilidades, mientras que el artículo 76 es el que determina las sanciones y los límites para no delegar.

En este marco y llamando a la reflexión adelante que, obviamente, voy a votar en contra del proyecto de ley en tratamiento, como también lo haré en el caso de la iniciativa sobre los superpoderes, que se tratará a continuación.

Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Romero.

Sr. Romero.- Señor presidente: en los últimos años el Congreso de la Nación ha sido instrumento obediente de las directivas del Poder Ejecutivo, pero también debo decir que esto no sólo ha ocurrido en los últimos años sino que en esta etapa de la democracia, en mayor o menor medida, los cuerpos legislativos han ido delegando facultades paulatinamente. Y muchos de los que hoy formamos parte del Congreso debemos hacer una autocrítica por esa situación: siempre se nos corría con una emergencia o se nos decía que había que evitar algún gran desastre. Al final, no sólo que no se evitó nada de eso, sino que con el tiempo hemos visto que estas delegaciones han ido agravando nuestros problemas y debilitando nuestras relaciones institucionales y la calidad de nuestro sistema republicano y federal y la autonomía del Congreso.

Pero también debemos decir que si bien esta situación venía creciendo, en los últimos seis años se ha incrementado; me refiero a esa terquedad de no aceptar modificaciones o aportes de los legisladores para resolver distintos temas, como podría ser hoy la derogación de aquellas delegaciones que ya no son más necesarias o cumplir con la Constitución que en su artículo 76 dice que no habrá facultades delegadas; no dice que las habrá a medias. Debemos resolver esta transición, pero fue el espíritu de los constituyentes

que no debe haber facultades delegadas; cabe aclarar que no es un artículo que está ahí por casualidad. El señor presidente fue convencional constituyente y testigo de cómo las provincias defendimos todo lo que pudimos la coparticipación y la autonomía en esa Convención.

El caso extremo de la intolerancia en corregir las cosas ha sido el tratamiento aquí hace un año de la Resolución 125, donde la propia terquedad del oficialismo dañó al gobierno y no la acción de la oposición. Esa intransigencia para lograr un acuerdo parlamentario se repite cotidianamente en las sesiones de este Congreso.

En el caso de la resolución vinculada con el campo se vio cómo no hubo voluntad de corregir, sino que se negó, con posterioridad, el resultado de esa votación; se ha alentado la confrontación y los problemas del campo nunca fueron resueltos. Se advierte una suerte de venganza que va destruyendo el ánimo de los productores, que va destruyendo el aparato productivo nacional.

Pero no sólo es el tema del campo. Se han analizado aquí los problemas energéticos graves que tiene nuestro país, los problemas fiscales de las provincias y la domesticación de gobernadores e intendentes. Son temas que no voy a reiterar, pero que son parte de un mismo problema.

También están los escándalos de los subsidios, lo injusto de su distribución y la forma poco transparente de su otorgamiento. Además de esto que se ve, que es la premura y la afición por resolver más rápido los problemas del fútbol que los problemas de millones de argentinos que trabajan el campo, que producen, que están en la pobreza; los que sufren las tarifas de energía y la desocupación por el agravamiento de la crisis económica.

Esa práctica de dividir al país entre buenos y malos, entre amigos y enemigos, en catalogar de enemigos a los que piensan distinto, desprestigia a nuestro sistema democrático. De por sí, cuando se fundó la República, ya la Constitución Nacional hizo una delegación de facultades y es nuestra misión como senadores defender la autonomía de las provincias y las facultades no delegadas en esa Carta Magna.

¿En dónde hemos terminado? En no sólo alterar y agravar la situación de centralismo que hay en el país sino en delegar todas aquellas cosas que deberían ser facultades nuestras para debatir, analizar y estar atentos a lo que la gente nos dice.

En este último tiempo se ha escuchado decir muchas veces que quienes pensamos distinto del gobierno no tenemos ideas ni proyectos alternativos. Quiero creer que ni ellos se creen esto. Nosotros, y también sé que otras fuerzas políticas con representación en este cuerpo tienen una agenda política y legislativa, hemos participado de esas reuniones llamadas “diálogo político”, y no quisimos ir solamente a escuchar sino que hemos dejado una propuesta, en la cual no voy a abundar, para demostrar que sí tenemos ideas y muchas tienen que ver con las facultades que este Congreso debe ejercer.

El primer punto del documento presentado por el Interbloque Federal es justamente la delegación de facultades y los superpoderes: por supuesto apoyando su derogación. Otro punto está vinculado con la necesidad de poner límites a los decretos de necesidad y urgencia. Y también hablamos de reformar la ley de creación del Consejo de la Magistratura, para que deje de ser un tribunal de inquisición sobre el accionar de los jueces.

Así mismo, el Régimen Electoral, que da la impresión que le preocupa mucho al gobierno, es un tema que estamos dispuestos a mejorar, porque sabemos las falencias que tiene y la forma en que se abusa de este sistema en la Argentina, alterando las fechas, presentando candidaturas testimoniales y, algo más grave, que es la forma poco transparente del financiamiento de las campañas. En este sentido, cada vez resulta más difícil financiar una campaña y los únicos que tienen los recursos son los gobiernos Nacional, provinciales y municipales.

El conflicto con el campo, al cual ya nos hemos referido, es otra de las preocupaciones de quienes pensamos distinto al gobierno. La coparticipación federal es parte de este mismo engranaje de sustitución de la voluntad autonómica de las provincias por el sometimiento de los gobernadores, por la distribución injusta de las obras y la distribución arbitraria de los fondos.

Las políticas sociales y la seguridad son asuntos sobre los cuales los senadores estamos trabajando, escuchando la opinión de muchos ciudadanos expertos. Debemos ligar las políticas sociales a la seguridad y a la educación; defender a nuestras empresas que sufren el embate, tanto aquí como en otros países; recuperar la independencia y la credibilidad en el sistema estadístico argentino. Cabe destacar que estos no son los únicos problemas que observamos en la Argentina, sino una síntesis de los más graves y los que presentamos ante el Ministerio del Interior. Sinceramente, no creo que volvamos a dialogar hasta que no haya una respuesta a estos temas.

Si bien es cierto que el pueblo sólo gobierna a través de sus representantes y que aquí no habrá cambios hasta diciembre, no podemos negar el mensaje que dieron las urnas el pasado 28 de junio para que el sector oficial lo tome en cuenta y cambie el rumbo. No voy a caer en la opinión fácil de decir que el mandato popular se traduce en el fin del gobierno. Nada parecido. Es el gobierno el que debe tener en cuenta ese mensaje popular para corregir el rumbo.

Creo que la sociedad votó por el diálogo, por el cambio de actitud; en contra de la prepotencia, del enfrentamiento de los argentinos, de la confrontación permanente. Considero que, implícita en ese voto popular —porque lo vimos después de la sesión de la resolución 125—, está la voluntad de la gente de que el Congreso cumpla su verdadera función y los legisladores ejerzan su autonomía; que, a través del debate, se encuentre la mejor solución y no la imposición de la mayoría.

En ocasiones, es posible que la creencia de la gente de que el resultado electoral puede terminar con muchos problemas acabe en cierta frustración al no ver cambios, al ver que el diálogo es sólo un escenario, pero no profundo. Lo mismo sucede cuando se observa que el Congreso continúa con viejas prácticas, como esta de pretender prorrogar las facultades delegadas. Seguramente, el año próximo nos dirán que no hubo tiempo, que falló alguna fotocopiadora, que no se alcanzó a analizarlas, y nos estarán proponiendo otra prórroga más. En ese sentido, confío en que haya un número mayoritario, razonable, para el caso de que hoy no se logre derogar estas facultades, a fin de que en el futuro se haga algo serio, que es lo que está esperando la gente.

Nosotros tenemos una responsabilidad constitucional, una responsabilidad política de cambiar las cosas, y lo vamos a cumplir. Aunque al gobierno no le guste, aunque persista en las prácticas de terquedad, nosotros creemos que el diálogo profundo es mucho más útil que esta invitación a una puesta en escena. Quienes pensamos diferente no nos vamos a prestar a persistir en esas prácticas equivocadas, o a tolerar con el silencio o el voto que la gente aumente su frustración. No nos vamos a prestar a la frustración de la gente por no decir las cosas como son. Estoy convencido de que la gente votó por el cambio de rumbo.

Nosotros, como Peronismo Federal, hemos trabajado este año en una agenda, la que acercamos al Ministerio del Interior. En ese sentido, estamos dispuestos a trabajar con los demás señores legisladores en una agenda legislativa vinculada con la corrección de la situación que atraviesa el país. No queremos gobernar, ni obstruir, ni dificultar la marcha del gobierno, pero sí aportar. Porque creemos que el Congreso es el mejor lugar para que se hagan los aportes, se enriquezca el debate y, de esa manera —como ya muchas veces sucedió aquí—, se puedan corregir leyes para mejor, para bien del país, cosa que hemos visto estos últimos años que se torna cada vez más difícil en esta Casa.

La sociedad va a observar y verá, tarde o temprano, quiénes son responsables, quién ejerce cierta complicidad y de qué manera; con el voto equivocadamente —creo yo—, persistimos en una política que lleva adelante el gobierno nacional de dividir a los argentinos y no de juntarlos, de degradar las instituciones y no valorizarlas.

Ese es el pensamiento que quería expresar, adelantando mi voto negativo al dictamen.

Sr. Presidente (Marín). — Tiene la palabra el señor senador Guinle.

Sr. Guinle. — Señor presidente: he escuchado con suma atención los conceptos que se han ido vertiendo y, realmente, me quedé con un pensamiento del senador Castillo. Cómo viviendo la misma historia podemos tener visiones tan diferentes, y cómo podemos ir

cambiando, según esa visión diferente y el contexto en el que uno se encuentra o la realidad que está mirando.

He conseguido un trabajo de dos abogadas que hicieron una especialización en información jurídica y técnicas legislativas. Eligieron como tema la cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional. Es un buen trabajo de recopilación, que se lo recomiendo a los señores legisladores en general. Está hecho por una asesora del Senado y por una asesora de la Cámara de Diputados. En este caso, no creo que ninguna de las dos tenga ni responda a la concepción del oficialismo; creo que han hecho un estudio jurídico. Tienen algunas cuestiones sobre las que es bueno reflexionar. Fundamentalmente, porque creo en la pureza de sus pensamientos y en que han ahondado en la cuestión jurídica convencidas de buscar una solución jurídica favorable a los intereses del país. Se refieren a la prórroga y a qué pasa ahora con el vencimiento de las delegaciones realizadas, anteriores a la Constitución de 1994. En ese sentido, expresan que el Congreso viene sancionando proyectos de estas características mecánicamente en razón de su impotencia para resolver la cuestión de fondo. Salvo alguna excepción, en ningún momento se señaló que fuera innecesaria la sanción de aquellas iniciativas. Aun con críticas, todos los bloques sostenían que era un disparate poner en tela de juicio la constitucionalidad del andamiaje jurídico que rige en la República.

Si bien estas leyes son genéricas, prorrogan las facultades delegadas y ratifican la legislación dictada bajo su amparo. Lo cierto es que la institucionalidad de nuestro país debe construirse garantizando la seguridad jurídica. Sería una enorme irresponsabilidad dejar a la Argentina sometida al ejercicio de la prueba y el error, quedando en tela de juicio la constitucionalidad e institucionalidad con respecto a las normas dictadas antes de 1994.

El trabajo tiene también una propuesta: una nueva prórroga con un temario completo de tareas a desarrollar. Entonces, proponen una nueva prórroga y la forma en que se pueden cumplir los cometidos no cumplidos aún, pese a que hay muchos avances realizados en los estudios que se han arrimado. En efecto, se avanzó mucho. Hay compilación que se puede rescatar del trabajo inconcluso del propio Digesto Jurídico.

Me permito leer parte del trabajo: En rigor de verdad, determinar cuál es la legislación delegada preexistente resulta una tarea por demás compleja. Ello por cuanto, en primer lugar, se deben delimitar y excluir aquellas cuyo objeto se encuentra cumplido y agotado, como así también la que a la fecha se encuentra derogada. Asimismo, resulta demasiado amplio el espectro de materias que han sido objeto de delegación: fiscal, aduanera, financiera, educativa, sanitaria, comunicaciones, transporte, energía, ejercicio de profesiones liberales, etcétera. Cabe preguntarse cuánta de esta materia es, a su vez, subdelegada por el PEN a organismos descentralizados o a sus propios ministerios. A su vez, debe resolverse si se trata de materia de administración y/o de emergencia pública —que es lo que dice el artículo 76 de la Constitución Nacional—. Como surge del debate parlamentario de la primera ley, 25148, resulta difícil determinar qué es administración, o sea que no toda la materia de administración es delegada por cuanto en sentido escrito el PEN *per se* tiene competencia en materia de administración del país. Resultará, entonces, del inciso f) del artículo 2 de las leyes de prórroga, que el último inciso, y como fórmula genérica, determina que es materia de administración aquella asignada por la Constitución Nacional al Poder Legislativo que se relaciona con la administración del país. Son cuestiones a cargo de organismos bajo la órbita del Poder Ejecutivo, pero creados por ley del Congreso. Por ejemplo, AFIP, Aduana, Banco Central, etcétera. No existe el mismo problema con respecto a la emergencia pública, ya que la Corte Suprema de Justicia de la Nación la ha definido en varios casos.

Sra. Negre de Alonso. — Casi una copia de lo que dijo el senador Yoma.

Sr. Guinle. — Este es el trabajo de dos abogadas. Si quiere, después puede replicar con sus argumentos, estimada senadora. Si quiere replique. Yo estoy hablando del año 2009.

Si uno analiza lo que ha pasado con las distintas prórrogas, se puede advertir cómo fue variando la crítica, cómo los medios en el país clamaban por la prórroga del año 1999 porque “en realidad, se viene el caos”, un inesperado caos jurídico y un presidente virtualmente atado de manos. Esto fue en el caso de la prórroga del año 1999. Todos los medios estaban en esa sintonía: “se viene el caos”, “se pueden caer las normas”. Reitero, prórroga del año 1999.

No voy a hacer historia porque, en realidad, las normas se fueron dando en ese sentido y todos conocemos cómo se fueron otorgando. Lo que sí me preocupa es alguna interpretación que creo infundada, por decirlo con el mayor de los respetos, en cuanto a que esta prórroga actual es innecesaria. Lo creo porque, de los estudios realizados, siempre surgió la necesidad de ir aprobando la prórroga. Pero esta prórroga sancionada por Diputados, en realidad, es una norma distinta de la que mandó el Ejecutivo. El proyecto enviado por la Cámara de Diputados al Senado es sustancialmente distinto del remitido por el Ejecutivo.

En cuanto a la cuestión de las legislación delegante y delegada, como ya hicimos la interpretación respectiva en 2006, no volveré a referirme a eso. Pero recuerdo que, en esa oportunidad, había leído una versión taquigráfica del discurso del entonces diputado Natale, quien hablaba de los exégetas de la Constitución. El diputado Natale decía que, en 1994, todos nosotros hablábamos de legislación delegada; y era absolutamente cierto. Posteriormente, los exégetas comenzaron a hablar de legislación delegante y de legislación delegada, haciendo una interpretación de lo que se había querido decir en la Convención Constituyente.

Reitero, el proyecto que estamos considerando es sustancialmente distinto del remitido por el Ejecutivo: prorroga por un año la delegación de facultades; prohíbe las subdelegaciones y establece un control efectivo del Congreso. Esas modificaciones o correcciones al proyecto del Poder Ejecutivo lograron una gran adhesión, a pesar de que fueron planteadas por diputados pertenecientes a sectores del arco opositor. Esas modificaciones impulsadas por la oposición fueron recibidas como un aporte. En ese sentido, cuando vi cómo había quedado redactado el texto, me puse muy contento de que el oficialismo hubiera aceptado los cambios propuestos por esos sectores porque, realmente, mejoraba y hacía mucho más razonable la iniciativa.

Como dije, se establece un plazo; se limita la subdelegación en virtud del artículo 100, incisos 4E y 10, de la Constitución Nacional, y se le dan atribuciones concretas a la comisión que se crea. En cuanto a este último punto, eso se relaciona con el estudio que hay que realizar en materias determinadas de administración o de emergencia pública, tal como expresa el artículo 76 de la Constitución Nacional.

Creo que es necesario prorrogar, pero me preocupan algunas lecturas. Por ejemplo, creo que el gobierno ha hecho mucho por lograr el enojo de ciertos periodistas; pienso que el gobierno ha hecho un trabajo muy importante para lograr que algunos periodistas estén muy enojados. Sin embargo, considero que los periodistas se pasan en el enojo. En ese sentido, el otro día, escuchaba a un prestigioso periodista preguntarse si los diputados que habían votado este proyecto fueron cooptados por el oficialismo. ¿Qué estaba diciendo? En realidad, este proyecto tiene la impronta de la oposición, que puso esos argumentos en la iniciativa y votó convencida de que había logrado introducir las modificaciones que pretendía. Se trata de gente con absoluta honestidad intelectual, diputados a quienes reivindico por su honestidad intelectual y que votaron esta iniciativa convencidos de que habían logrado las modificaciones correctas para que esa norma fuera conveniente para el país.

Entonces, cuando leí ese comentario formulado por un periodista tan prestigioso, me pregunté: "¿cómo, cuando uno vota de una forma está cooptado?" o "cuando los diputados de mi provincia votaron esta norma, en realidad, ¿lo hicieron prestando su mano al oficialismo, como lo haré yo aquí?" Es una subestimación.

— *El senador Romero se expresa fuera de micrófono.*

Sr. Guinle. — Si usted quiere, después lo dialogamos, senador, pero si usted me conoce, sabe que yo tengo independencia de criterio y trabajo para el gobierno de mi provincia y para representar a los chubutenses.

Sr. Presidente (Marín). — No dialoguen, señores senadores.

Sr. Guinle. — Voy a contestar todo lo que me pregunten.

Entonces, mantengo la coherencia con las cosas que he dicho, que he votado, con la prórroga que he fundamentado en 2006. ¿No será que algunos periodistas están tan enojados que intentan desprestigiar a algunos que exhibimos coherencia contra la incoherencia de algunos medios, que pedían a gritos la prórroga legislativa porque se venía el caos pero que hoy tienen otra lectura porque el contexto ha cambiado?

Algunos de nosotros mantenemos la coherencia y somos críticos del gobierno nacional, porque yo no me guardo las cosas que tenemos que decir. Por ejemplo, nosotros no votamos la habilitación sobre tablas del tema del gas y dijimos que, en realidad, nuestro proyecto era suspender el tarifazo sobre el uso residencial, para no afectar el fondo que habían negociado la Nación y las provincias productoras respecto de la recuperación del precio de boca de pozo del gas y para que nadie tuviera la excusa de hacer caer ese acuerdo.

Entonces, cuando uno de nosotros exhibe coherencia con lo que ha votado, con lo que ha fundamentado, a veces, otros no pueden mantener esa coherencia porque han votado de manera ambivalente a favor y en contra de la prórroga. Esto no es un reproche, de ninguna manera; soy absolutamente respetuoso con mis pares. Pero exijo el mismo respeto. No han sido cooptados aquellos diputados de centro izquierda; tienen principios, convicciones y, si uno lee sus discursos, dicen por qué votan como votan y por qué tienen sus convicciones donde las tienen. Entonces, el respeto a aquel que piensa de esa manera, que no necesariamente ha sido cooptado, sino que vota por sus convicciones, es el respeto que deben tener también por quienes votamos por nuestras convicciones, aun disintiendo en muchas cuestiones con el oficialismo pero formando parte de este bloque, discutiendo adentro, como corresponde, de manera oportuna, negándonos sistemáticamente a decir “sí” cuando hay que decir “no”.

Sr. Presidente (Marín). — ¿Puede ir redondeando, señor senador?

Sr. Guinle. — Con todo gusto.

Sra. Negre de Alonso. — Una pregunta.

Sr. Presidente (Marín). — Señora senadora, por favor, diríjase a la Presidencia. Es lo que corresponde.

Sra. Negre de Alonso. — Señor presidente: estaba haciendo señas pero usted no me vio.

Sr. Presidente (Marín). — ¡Es una lástima! (*Risas.*)

Sra. Negre de Alonso. — No funciona el micrófono.

Sr. Presidente (Marín). — La senadora solicita una interrupción.

Sr. Guinle. — Cómo no.

Sra. Negre de Alonso. — De la lectura del señor senador, quiero rescatar que hay una parte que el senador Yoma mencionó allá por 1999, en referencia a todo esto. Porque el senador Yoma, actual embajador en México, hizo un profundo estudio en el 99. Creo que otros senadores ya lo mencionaron; me parece que fue la senadora Colombo y, también, alguien más. Por eso, reitero, una parte que el senador estaba leyendo es autoridad del senador Yoma.

Sr. Guinle. — ¿Cuál es la pregunta?

Sra. Negre de Alonso. — No, senador. Le dije que era una aclaración.

Sr. Presidente (Marín). — Continúe en el uso de la palabra, señor senador.

Sr. Guinle. — Para redondear, he visto acá que, en lo que se refiere a exégetas de las normas, se ha pretendido decir que, en realidad, como acá simplemente hay prórroga, se caen las normas. Es una interpretación que no se ajusta en modo alguno a ninguna interpretación jurídica que tenga sustento.

Lo que se leyó como dicho por la doctora Carrió me parece que era de otra época. En 1999, la doctora Carrió avaló la prórroga y, si me permite, señor presidente, quisiera leer algunas cosas inteligentes. En ese momento, ella hablaba de cambiar el artículo 2°. Mencionaba que, para evitar la subdelegación, la legislación secundaria, se decidió limitar el concepto de legislación secundaria, es decir: las normas dictadas al amparo de la legislación delegada mantienen su vigencia según la jerarquía del órgano que las dictó y por el plazo del artículo 1° de la presente ley. Y agregaba: A fin de que quede clara la interpretación auténtica de los legisladores, debo señalar que mantener la vigencia significa —lo que nosotros hacemos ahora— exclusivamente mantener la eficacia de la norma en el espacio y en el tiempo, y no implica que el Congreso emita ningún juicio en relación con la validez de tales disposiciones. Consecuentemente, ello significa que los jueces están plenamente habilitados para cuestionar las normas de legislación secundaria por no haber sido dictadas en su competencia o, en su caso, por ser inconstitucionales o contradictorias con el artículo 76 de la Constitución Nacional.

Esto es lo que ese proyecto, forzado y con nueva letra en la Cámara de Diputados, hace en estos momentos. Las modificaciones son importantes, pero se sigue hablando como si no las hubiera y como si fuera el proyecto del Poder Ejecutivo. Y así se traslada a la opinión pública. Por eso, la crispación no la aporta solamente el gobierno. En realidad, aportan muchos a la crispación de nuestra gente, y lo ideal sería que le pudiéramos dar tranquilidad, que reforzáramos las posibilidades de diálogo y de consensuar en políticas de Estado.

Coincido con mucho de lo que he escuchado. Es necesario renovar el arte de escucharse, renovar el diálogo, poder realmente sentarse en una mesa y negociar, remediar de fondo el litigio con el campo. Abono cada uno de esos conceptos, pero, también, creo absolutamente necesaria aprobar la presente prórroga.

Termino con una última cuestión. He analizado el dictamen de la minoría, firmado por el radicalismo y similar al presentado en la Cámara de Diputados. Creo que contiene un evidente desconocimiento de lo que es legislación delegada. En los artículos 1º a 3º, se remite al punto pero de los artículos 4º a 16; inclusive, se remite a los derechos de importación y exportación.

En uno de los artículos se establece la creación de una comisión bicameral permanente que tendrá por objeto el análisis de las alícuotas de los derechos de importación y exportación de los productos contenidos en las posiciones arancelarias. Creo que acá hay un avance.

De este error, de abordar parcialmente la cosa como si fuera todo, abordándolo por el lado de los derechos de exportación, hacen un reconocimiento. Es decir, al crear la comisión bicameral para tratar las alícuotas de los derechos de importación y exportación, están sosteniendo que el Congreso de la Nación no está en condiciones de tratar esos temas. Deben crear una comisión bicameral a efectos de que expertos asesoren sobre el particular.

Si bien hacen un reconocimiento, me pregunto: si esto lo hacen específicamente para esta cuestión, ¿quién reemplazará en el ámbito del Congreso de la Nación al Banco Central en el ejercicio de las facultades legislativas delegadas por su Carta Orgánica? También vamos a necesitar expertos. ¿Quién reemplazará a la AFIP en el ejercicio de las facultades legislativas delegadas por la ley de procedimientos tributarios N° 11.683? Vamos a necesitar expertos. ¿Quién reemplazará al ENRE, al ENARGAS, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, a la Comisión Nacional de Comunicaciones, a la Comisión Nacional de Valores, entre otros, en el ejercicio de las facultades legislativas delegadas por las leyes que regulan las diferentes actividades? ¿Quién va reemplazar al Poder Ejecutivo?

El dictamen de la minoría no responde estas preguntas. Pero creo que tiene la virtud de reconocer algo importante. El Congreso, en su estructura actual, no puede responder a esas necesidades. No digo que no tenga que hacer en el futuro...

Sr. Presidente (Marín). — Señor senador Guinle: le pido, por favor, que vaya redondeando su exposición, dado que se ha excedido en su tiempo.

Sr. Guinle. — Cierro mi exposición con lo siguiente, señor presidente, y le agradezco su disposición.

El dictamen de mayoría es absolutamente razonable. Prorroga por un año las facultades delegadas; establece un mecanismo para su revisión, depuración y análisis; establece y activa mecanismos de control del propio Congreso y, obviamente, se hace cargo de la complejidad de las relaciones específicas y de la celeridad con que algunas —muchas, en realidad— de esas atribuciones deben ser ejercidas para que sean verdaderamente eficaces.

Señor presidente: creo que la norma es altamente razonable y absolutamente necesaria. Lamento, fundamentalmente, que no convengamos en esto, porque creo que ha habido legisladores que han apoyado de buena fe estas prórrogas en el pasado. El bloque radical lo ha hecho en 2006. Considero que el plazo ahora es absolutamente razonable y se inserta dentro de un marco que legisladores del arco opositor han puesto con razonabilidad —a mi juicio— y como una limitación a la subdelegación, digna de ser reconocida. Les reconozco que no han sido cooptados y han introducido profundas reformas en este proyecto de ley, que lo hacen merecedor de ser ratificado en este acto.

Sr. Presidente (Marín). — Tiene la palabra el señor senador Fernández.

Sr. Fernández. — Señor presidente: yo había pedido una interrupción para efectuar algunas aclaraciones, en mi carácter de presidente de la comisión, para no interrumpir luego el cierre de los senadores Rodríguez Saá, Morales, Sanz y Pichetto.

Lo primero que quiero decir, en honor a la verdad, es que el trabajo que esta comisión le dio a los distintos senadores y que fue elevado por la Comisión de Digesto Jurídico recoge, sin más, el trabajo que fue elevado en soporte informático por la Universidad de Buenos Aires y corregido por la comisión de juristas. De modo tal que puede haber también un error por parte de quienes lo elevaron pero, de todas maneras, esto reconoce el trabajo de la Universidad de Buenos Aires, que fue mérito de una licitación pública internacional que mereció contratos de locación de servicios y de obras que generaron importantes erogaciones presupuestarias del Estado nacional.

En esa comisión de juristas es donde debemos identificar el error, lo que habla a las claras de que, en esa comisión de la universidad, participaron, además del Decano, todos los cuadros directivos y personal con prestigio académico y jurídico, así como una infinidad de estudiantes y académicos seleccionados por los distintos directores de cada área de la Universidad de Buenos Aires. Digo esto, un poco para salvar que este trabajo, que fue de alguna manera descalificado —yo no lo voy a poner en valor—, obedece a una matriz de errores importantes a considerar.

En segundo orden —voy a tratar de ser muy breve—, dije, en el momento de fundamentar el dictamen de la comisión, que la ley que estamos tratando ratificaba la legislación delegada y, en consecuencia, toda la posterior que hubiera tenido como consecuencia esa legislación delegada. Creí haber sido claro.

— *Ocupa la Presidencia del señor vicepresidente de la Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.*

Sr. Fernández. — Pero cuando uno tiene una duda interpretativa, no hay mejor fuente que recurrir a prestigiosos académicos o a aquellos que en años distintos se han expresado sobre la materia. Entonces, me voy a permitir la dispensa de la Presidencia para leer, concretamente, que respecto a la cuestión de las materias delegadas o delegantes, existe un doctrinario que sostiene lo siguiente: En caso de que fuera necesario decidir si la disposición transitoria octava se refiere al reglamento delegado o la ley delegante, personalmente optaría por esta última, pese a lo que pueda llegar a decir su texto. Hay dos razones —continúa diciendo el doctrinario— a mi entender que justifican esta posición: en primer lugar, la legislación aludida debe ser ratificada por el Congreso. Ello hace pensar que se trata de leyes y no de reglamentos, pues de lo contrario, dicha ratificación habría sido encomendada al Poder Ejecutivo, en donde emanan los reglamentos delegados. Pero este argumento de peso, de consistencia y de importancia no es determinante. El que me parece decisivo es el del plazo del ejercicio. Caducará —dice la disposición transitoria— aquella legislación que no tenga plazo determinado para su ejercicio. Pues bien —continúa preguntándose el doctrinario—, ¿cuál es la norma que debe fijar un plazo de ejercicio? ¿La ley delegante o el reglamento delegado? Parece obvio que debe ser la primera; es el Congreso el que fija plazos dentro de los cuales el Poder Ejecutivo ejercerá la delegación y ello, por lo demás —continúa diciendo—, es exactamente lo establecido en el artículo 76, del cual depende la cláusula transitoria octava.

Esto que termino de leer está dicho nada menos que por Alberto Bianchi, que no pertenece al oficialismo ni obviamente, su comentario es contemporáneo a este abordaje. Figura en “La dimensión actual de la delegación legislativa”, obra de derecho administrativo, publicada en la revista “Doctrina, jurisprudencia y legislación práctica”, del año 2002, editorial De Palma, *lexis nexis* página 731. Digo esto porque va en apoyo de lo que brillantemente termina de exponer recién el señor senador Marcelo Guinle, citando, inclusive, a otros legisladores cuando hablaban del tema.

Para finalizar, a lo largo de este debate, hubo alguien que hoy se preguntó qué pasaba si nosotros no ratificábamos efectivamente la legislación delegada. Yo voy a elegir, del Instituto Federal de Estudios Parlamentarios, la norma de número menor, que corresponde a Reina Nalmandoz, y que en 1999, entre otras cosas, incorporó algunas de las normas que caducarían: la ley de propiedad intelectual, el Código de Justicia Militar, la ley que regula la

actividad farmacéutica, el código alimentario, la ley de procedimiento administrativo, las sociedades comerciales de la 19550, la ley de deportes, el Código Penal en los delitos contra la salud pública, la ley de residuos tóxicos, la ley de riesgo del trabajo. Entonces, digo que si nosotros no ratificáramos efectivamente esta delegación, generaríamos un caos fenomenal. Por eso, creyendo que es un salto cualitativo el que ha puesto a consideración la Cámara de Diputados, no sólo vamos a ratificar la aprobación de esta norma, sino que, además, consideramos que es prudente, necesario y prolijo hacerlo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: que no hayan sabido, que no hayan podido o que no hayan querido hacer las cosas no significa que no se puedan hacer. Sí se pueden hacer las cosas y se las puede hacer bien. Se puede gobernar mal o bien. De las dos formas se gobierna, pero de una manera se lo hace mal y de la otra, bien. Yo voy a ser coherente y voy a votar igual que lo hice en la Cámara de Diputados en el 2004 y en el Senado en el 2006.

Tengo sobre mi banca el Digesto Jurídico de la provincia de San Luis. Con el permiso de ustedes, voy a leer el primer párrafo del prólogo: Uno de los anhelos de todo legislador se ha visto cumplido en la provincia de San Luis cuando por iniciativa del gobernador de la provincia, doctor Alberto José Rodríguez Saá, se envió el proyecto de ley de revisión de la totalidad de la legislación provincial. Las cámaras legislativas dieron sanción definitiva a la Ley 5382 el 16 de julio de 2003, que fue publicado en el Boletín Oficial, etcétera. Con lo que se tiene, en definitiva, la certeza y acabado conocimiento de las leyes que están vigentes y que son de aplicación en un Estado; en este caso, en el de la provincia de San Luis, hecho que no registra antecedentes, al menos, en la modernidad universal. Más de 7 mil leyes fueron analizadas.

El 25 de julio de 2003, fue publicada la ley que ordenaba la revisión y este Digesto fue aprobado y terminado el 31 de octubre de 2004, un año y dos meses después. No se gastaron 10 millones de dólares; trabajaron —y aquí está el agradecimiento— los empleados del Poder Legislativo, los diputados, los senadores y, también, los asesores de todos los ministerios del Poder Ejecutivo. En un año y dos meses, la provincia de San Luis tuvo un digesto publicado, en donde están establecidas todas las leyes vigentes, todas las leyes que fueron derogadas y todos los textos ordenados. Esto es seguridad jurídica.

Con mucha satisfacción, escuché el discurso de la senadora por Tucumán, quien explicó que en dos meses tendrían el digesto de su provincia. Me congratulo y los felicito. Como senador de la Nación Argentina, quisiera tener la oportunidad y la posibilidad de que nosotros, con el mismo esfuerzo, trabajo y estudio, gastásemos horas en estudiar las leyes y no horas en justificar por qué no las estudiamos.

Nosotros vamos a votar en contra de la delegación de facultades, vamos a votar en contra de los superpoderes, vamos a propiciar la reforma del tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia, para fortalecer las instituciones republicanas, para que funcionen en plenitud los poderes del Estado. Lo señaló bien el senador Romero; fue el temario que le llevamos al señor ministro del Interior en representación de nuestro bloque.

Como muchas veces se menosprecia el pensamiento doctrinario de nuestro partido, voy a leer muy brevemente lo que dijo el presidente de la Nación Argentina, teniente general Juan Domingo Perón, en su último mensaje a la Asamblea Legislativa, donde habló del modelo argentino para el proyecto nacional. En lo que se refiere al Parlamento, dijo que surgen algunos requerimientos con respecto a la fisonomía del Congreso Nacional. La experiencia señala que la tarea creativa del Poder Legislativo se ha desarrollado a lo largo de este siglo siguiendo una disciplina de trabajo que puede ser perfeccionada. Finaliza diciendo que el Congreso deberá participar activamente en el proceso de programación de la estructura institucional del país y de la revisión periódica y actualización de las normas. Todo lo contrario al oscurantismo, a la teoría del caos institucional que plantea, fundamentalmente, el bloque del oficialismo, respecto de lo que discrepo absolutamente. Es absolutamente falso.

Cuando propusimos en una campaña electoral hacer un digesto de las leyes de la Nación Argentina, nos dijeron que era el caos, la inseguridad jurídica, un salto al vacío. El único salto al vacío es que, cuando se terminan las facultades delegadas, a las burocracias corruptas se les terminan los instrumentos de la corrupción. Cuando se terminen las facultades

delegadas en la Argentina, no podrán funcionarios y técnicos de la burocracia, escondidos en pequeños escritorios, dar prebendas y exenciones para obras públicas, modificar el patrimonio y la libertad de los argentinos a través de pequeñas normas y correcciones a través de la AFIP o del Banco Central y en la ONCCA, que es una creación completa de la delegación de facultades.

No hay ningún problema, señor presidente: cuando no haya facultades delegadas —porque llegará el día en que se cumplirá con la Constitución Nacional, aunque no será hoy, porque las mayorías circunstanciales aún lo impiden—, lo que sucederá en el país es que un contrato como el que se está por firmar deberá pasar por el Parlamento para su autorización, lo que nos permitirá valorar si es mejor invertir en el fútbol o atacar los males de la pobreza.

Por otro lado, también deberá pasar por el Congreso todo lo que se refiere a la deuda externa. Entonces, podremos decidir si la Argentina tiene que pagar intereses enormes por las refinanciaciones o si no los debe pagar y contraer deuda externa por intereses corrientes. No será decisión de las burocracias, deberá ser decisión de este Parlamento, que tiene que dar la cara. ¡Damos la cara! ¡Nos conocen! En cada una de las provincias nos reclaman, a todos, al oficialismo, a la oposición. Nos conocen y somos todos responsables políticos de lo que hacemos y de lo que no hacemos.

Después de un período de enorme crisis en el país, donde, afortunadamente, logramos recuperar las instituciones, encaminar otra vez el proceso económico, canalizar la vida social y comunitaria y mantener la continuidad de las instituciones, ha llegado la hora de normalizar la Nación, no de provocar un nuevo incendio. Es la hora de normalizar el país. Ese fue el sentido del voto. El pueblo argentino no le dio el triunfo a nadie. A todos se los retaceó. Eso nos indica que tenemos que corregir el rumbo de la Argentina y que todos debemos contribuir a ello, no explicando por qué no podemos estudiar o por qué no pudimos.

El acuerdo por la reforma de la Constitución —como bien explicó, creo, el senador por Catamarca— tuvo un sentido: disminuir, controlar, achicar las facultades presidenciales. En consecuencia, se creó la Jefatura de Gabinete a fin de posibilitar un control legislativo. Por supuesto, el jefe de Gabinete se especializa en no venir al Parlamento. La Constitución le exige que tiene que concurrir una vez por mes al Senado o a la Cámara de Diputados. Personalmente, debe traer los decretos de necesidad y urgencia.

Ahora bien, que las comisiones bicamerales permisivas admitan que sea así, no significa que está bien. ¡Está mal! Por eso, nosotros reclamamos la participación en las comisiones bicamerales: porque está mal, porque se deterioran las instituciones. Se es cómplice de una maraña, de normas que tienen atrapado al pueblo argentino en la postergación, en la falta de calidad institucional, en la pobreza, en la disminución de la calidad educativa, en el analfabetismo, en la falta de horizontes, en la inseguridad y en el camino de la droga.

Señor presidente, son problemas muy graves. Se deben establecer las normas restrictivas del dictado de decretos de necesidad y urgencia y se debe no continuar con una errónea política del Parlamento argentino, que encontró la forma de cambiar la decisión.

En vez de ser el Decreto de Necesidad y Urgencia una excepción, es una norma; lo puede hacer como quiera, lo manda como quiera y, si no se trata, es ley.

Pero el espíritu del constituyente era poner un límite al Ejecutivo. Es decir, sí, efectivamente, hay momentos de la historia en que hay que dictar un decreto de necesidad y urgencia, pero esto tiene que tener un límite. Tiene que ir el jefe de Gabinete, presentarlo él al Parlamento y el Parlamento tratarlo de inmediato. Esa es la razón de ser. Porque tal vez, el día que se iba a cambiar la moneda —el Austral—, no se podía mandar una ley para hacer, porque hubiera sido un desbarajuste económico enorme; se debía hacer por un decreto de necesidad y urgencia. Pero al otro día, el Parlamento tenía que reunirse para tratarlo y aprobarlo —o no—, con la ley vigente y sancionada.

La delegación de facultades existe desde el siglo XIX en la Argentina. Hay casos que son totalmente justificados. Así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, pero es de carácter excepcional y por un tiempo determinado. Esto es lo que estableció la Reforma. Dijo: “Sí, señor: está prohibida la delegación de facultades, salvo en estos casos respectivos”. No se

trata de buscarle la vuelta para que la excepción se transforme en norma, que es lo que estamos haciendo acá.

El esfuerzo que hemos hecho con la senadora Negre de Alonso, otros senadores y en nuestro cuerpo de asesores fue hacer un trabajo para demostrar que sí se puede estudiar. Como lo ha dicho la senadora Negre de Alonso, puede ser perfectible; tal vez, tenga errores; quizá se pueda hacer mejor, pero ha sido un esfuerzo que demuestra que sí se puede. No nos pueden contar como si fueran plateístas o comentaristas políticos, que uno dice que son 1.900, otro 190 y otro 90. ¡Hay que estudiar!

El Parlamento ha tenido desde 1994 hasta 2009 quince años para estudiar esto. Quince años llevamos postergando y prorrogando. Y les puedo anunciar que dentro de un año, van a volver a prorrogar, porque no le van a poner la dedicación y el esmero para...

Sr. Presidente. — Senador Rodríguez Saá, disculpe: el senador Saadi le pide una interrupción. ¿Se la concede?

Sr. Rodríguez Saá. — Sí, cómo no.

Sr. Presidente. — Para una interrupción, tiene la palabra el senador Saadi.

Sr. Saadi. — Además de coincidir con los planteos que está haciendo mi colega, pido esta interrupción —a pesar de que ya está cerrada la lista de oradores— para adelantar mi voto en contra: es decir, negativo a la prórroga que se está tratando en estos instantes.

Creo que los tiempos en nuestro país son distintos, las condiciones económicas son diferentes y, por sobre todas las cosas, tiene que existir un ordenamiento y una transparencia en todos los recursos del Estado.

Voy a solicitar la inserción de los argumentos que planteo sobre este tema, pero quiero significar que todo esto —esta prórroga—, en definitiva, se ha transformado en un manejo muchas veces indiscriminado e injusto de los fondos por parte del jefe de Gabinete, que llega desde las cosas muy importantes que planteaba el senador Rodríguez Saá hasta las más pequeñas. Lo hemos visto también en estos procesos electorales del 28 de junio, mediante el manejo de fondos a través de los votos por la necesidad —de los planes “Trabajar”— hasta una cantidad de hechos que son lamentables y que van en contra de la institucionalidad de este país.

Relato un pequeño hecho. En un proceso electoral interno del Partido de Justicialista en nuestra provincia de Catamarca, se está afiliando gente bajo la presión de los planes Trabajar. Esto es lamentable como lo son los otros argumentos que planteo en la inserción que he solicitado. Allí, también, adelanto el sentido de mi voto.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Rodríguez Saá.

Sr. Rodríguez Saá. — Señor presidente: finalizo.

¿Hasta cuándo poderes extraordinarios, superpoderes? ¿Para qué? Si la señora presidenta, si el Poder Ejecutivo, expresan para qué los necesitan, para qué quieren poderes extraordinarios...

Esta es la tremenda encrucijada que tiene la Argentina: ¿para qué? Si es para seguir construyendo un país sin calidad institucional; sin división de Poderes, con más pobreza, lleno de conflictos, con inseguridad, con pésima infraestructura; sin debate de ideas; sin que los argentinos podamos volver a soñar con una Patria grande, a soñar con que nuestros hijos puedan vivir en una Argentina mejor, a soñar con que puedan ser profesionales, técnicos, trabajadores; a soñar con que nuestra escuela vuelva a ser la escuela extraordinaria con la que se construyó la gran Argentina del primer centenario...

¿Para qué los superpoderes que dividen a los argentinos? Para someter a gobernadores, a intendentes. ¿Para qué? ¿Para afectar al federalismo argentino? ¿Para tener elementos de presión? No se construye así una Argentina grande, próspera y feliz. No se construye así la Argentina que soñaron Perón, Evita, Yrigoyen y San Martín. ¡No se construye así la Argentina! Se construye con diálogo; se construye cumpliendo con la Constitución, aferrándonos a la ley, trabajando. Tenemos capacidad para trabajar. Reclamo reflexión. Este Senado y la Cámara de Diputados, el Parlamento Nacional, han dado pruebas suficientes de dedicación al trabajo cada vez que la voluntad política nos ha pedido la sanción de alguna iniciativa. Hemos discutido y polemizado.

No existe razón alguna, no hay ninguna emergencia que justifique someter al pueblo argentino a esta degradación que no acepta, porque ha reclamado en las urnas un cambio de rumbo. Pido en este sentido que hagamos un esfuerzo. Tenemos que dialogar sobre estos temas y encontrar acuerdos. Tenemos que unir a los argentinos. Todos tenemos que contribuir a la unión de los argentinos.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.

Sr. Giustiniani. — Señor presidente: Pirro fue rey de Epiro, Macedonia, muy conocido por la expresión “victoria pírrica”, que se han convertido con el paso del tiempo en un sinónimo de un éxito conseguido a un costo muy alto, tan alto que, a veces, merece la pena no conseguirlo. En la segunda batalla de Asculum contra los romanos, se acercó uno de sus generales a felicitarlo por la victoria y le contestó: “Otra victoria como ésta y estamos perdidos”.

Creo que el hecho de que la mayoría impusiera su número, tanto respecto de esta ley como en la de superpoderes —así ocurrió en Diputados y, probablemente, esta tarde en el Senado—, sin ninguna duda, será una victoria pírrica. Digo esto basándome en el contexto actual del país.

El país en el que vivimos en la actualidad es absolutamente distinto del de años anteriores. Por lo tanto, tenemos que partir de esa realidad. Vivimos seis años de crecimiento sostenido de la economía a tasas muy importantes. Esto significó un alivio para toda la población porque, en lo social, implicó la baja del desempleo, de la pobreza y de la indigencia. Pero hoy es otra la realidad. Llegó el punto de inflexión y la curva se invirtió.

En ese sentido, es insustancial el debate de los porcentajes. Lo importante es saber que la Argentina actual —todos lo sabemos, tanto el oficialismo como la oposición; eso lo reconocemos todos— se encuentra en recesión desde hace muchos meses. En esta Argentina crecen la pobreza, la indigencia y el desempleo.

Entonces, el aspecto político adquiere un peso relevante porque, sin ningún lugar a dudas, las elecciones del 28 de junio —que es lo mejor que puede suceder en democracia, es decir, la expresión de la voluntad popular a través de las urnas— transmitieron muchas cosas. Nadie puede tener la soberbia de pretender interpretar en su totalidad el mensaje de las urnas. Pero algunos que fuimos candidatos, hicimos campaña y resultamos electos, tuvimos una práctica concreta.

En mi caso, recorrí mucho la provincia de Santa Fe y sí puedo afirmar que las dos listas que reunimos más del 80 por ciento de los votos de los santafesinos —la Alianza Santa Fe Federal, que encabezaron los senadores Reutemann y Latorre, que sacó el 42,3 por ciento de los votos, es decir, 724 mil sufragios; y la lista que me tocó encabezar a mí, del Frente Progresista Cívico y Social, con el 40,57 por ciento de los votos, o sea, 693 mil sufragios— apoyaron con su voto dos expresiones que en la campaña electoral manifestamos: el fin de los superpoderes, el fin de la delegación de facultades y la recuperación del poder del Parlamento nacional.

Esto ocurrió no en las dos sino en las tres primeras listas de la ciudad de Buenos Aires; en la primera y la tercera lista de la provincia de Buenos Aires y, en términos genéricos, en la inmensa mayoría del país. En términos generales —como bien se dijo acá—, se trató de un mensaje muy fuerte de la sociedad en cuanto a la necesidad de un nuevo equilibrio político en el país.

Entonces, estamos ante una situación muy compleja. Quienes votamos en contra del adelantamiento de las elecciones expresamos en ese momento que una de las consecuencias de ese adelantamiento era que, entre la elección y el 10 de diciembre, iba a haber un lapso demasiado grande de transición de un Parlamento con legalidad para funcionar —porque todos los legisladores que finalizan su mandato el 10 diciembre deben dejar su cargo en esa fecha— y la expresión de la voluntad popular a través de las urnas.

Entonces, hubiera sido necesaria una etapa donde el gobierno nacional convocara a un diálogo en serio. El país necesita un acuerdo económico-social. Este país está en recesión y tendrá que tomar medidas para el combate de la pobreza, de la indigencia y del desempleo. Para todo ello, se necesitan medidas eficaces que todavía no se han tomado, y algunas que se han aplicado no han dado el resultado esperado.

Quizá, yo podría haber pedido la inserción del discurso que pronuncié en 2006. En 1999, voté como diputado en contra de la prórroga de la delegación de facultades. En 2002, como diputado, y en 2004 y en 2006, como senador, voté en contra de la prórroga de facultades delegadas como hoy se plantea. Y digo que podría haber insertado los fundamentos porque son prácticamente los mismos.

El artículo 76 de la Constitución Nacional es absolutamente claro y tiene una integralidad con la concepción del artículo 8° de las disposiciones transitorias: a los cinco años de la Constitución sancionada en 1994, si no se ratificaban algunas de las leyes delegadas, quedaban automáticamente derogadas todas las delegaciones. Entonces, con el debate en el que hemos entrado con las permanentes prórrogas de la delegación, hemos invertido la voluntad de los constituyentes de 1994. Porque esa voluntad, claramente, le ponía un punto final a las facultades delegadas a través del artículo 76, y era tan coherente en función de lo que se expresaba que, en el segundo párrafo, se hablaba de la caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior, que era donde se prohibía la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, agregándose que no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si hoy no se prorroga esta delegación de facultades de estas 1.901 leyes, no se provocará absolutamente ningún caos jurídico en el país. No se abrirá ninguna caja de Pandora, absolutamente ninguna. En realidad, es a la inversa: el Poder Ejecutivo es el que tiene que decirle al Parlamento nacional cuáles de las facultades delegadas necesita, para seguir trabajando en función de una necesidad concreta, conforme a lo que establece la Constitución Nacional.

Como muy bien se ha dicho acá, esto fue el debate de la Constitución de 1994. Más allá de las motivaciones que siempre hemos marcado desde el socialismo, el debate central giró alrededor de controlar, disminuir y atenuar el poder presidencial. Y el tiempo nos ha demostrado, lamentablemente, que era cierto lo que manifestaban en la Convención Constituyente los representantes del bloque socialista —Alfredo Bravo, Guillermo Estévez Boero y Norberto Laporta, entre otros—, quienes sostenían que los artículos sobre los decretos de necesidad y urgencia, más que atenuar el presidencialismo, lo consolidarían. ¿Por qué? Porque, como también se dijo acá, al bloquearse en cuatro temas la posibilidad de dictarse decretos de necesidad y urgencia, se habilitaría como normal a todos los demás. Así, llegamos al contrasentido de que, de esta forma, se le dio una herramienta al Poder Ejecutivo, que le permitió el año pasado ampliar el presupuesto de la Nación, a través de un solo decreto de necesidad y urgencia, en 34 mil millones de pesos. Es decir, un absurdo desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento de un país en donde el presupuesto se ha transformado en un dibujo que permite un manejo absolutamente discrecional de las partidas.

Lo decíamos en aquella Convención Constituyente de 1994: los decretos de necesidad y urgencia, las facultades delegadas y las emergencias que después aparecieron, como dicen los politólogos, tienen parecido de familia. Es decir, que van todas en una misma dirección: en la concentración de facultades en el Poder Ejecutivo. Son dos caras de la misma moneda. Cuando concentramos facultades en el Ejecutivo, se las estamos restando al Parlamento nacional.

Entonces, no hay otro debate para lo que hoy estamos discutiendo, fundamentalmente, porque todo el otro debate secundario es si el Congreso retoma sus facultades en su totalidad o si seguimos pateando para adelante, de la misma manera que hemos vivido hasta hoy que, a la luz de los hechos, es absolutamente inconducente.

Algunos ganaron las últimas elecciones y otros las perdimos. No queda duda de que la mayoría de la población se expidió en un sentido de mayor equilibrio. Pero el gobierno que perdió las elecciones gana hoy en el Congreso las votaciones sobre leyes que ratifican las políticas que le causaron esa derrota electoral. Esto, que parece un galimatías o un contrasentido, expresa lo que decíamos al principio: son victorias a lo Pirro.

Creo que acá está muy claro que en esta cuestión de las facultades delegadas no necesitamos demostrar que tenemos que derogar aunque sea una sola ley, sino todo lo contrario. Como dijeron los constituyentes, nos deben decir qué ley debemos ratificar, porque todas las demás están derogadas automáticamente.

A mí me parece que el tema que se pone en debate hoy —y yo no quiero escapar a él, porque me parece algo muy importante para el país, dado que fue punto central de la confrontación y del conflicto agropecuario del año pasado— es el referido al Código Aduanero. En ese sentido, pregunto lo siguiente: si está tan claro que el Código Aduanero debe ser manejado por el Poder Ejecutivo nacional, ¿por qué el gobierno mandó el año pasado la resolución 125 al Parlamento? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo, evidentemente, por la situación social y política del país, por lo que considero que ese tema debe ser debatido en profundidad en el Parlamento nacional.

Lo dijimos en muchas oportunidades en el Parlamento: se demoró y se mandó al cajón del olvido la necesidad de una reforma tributaria integral. Pues bien, la verdadera reforma tributaria progresista en el país sería aumentar el impuesto a las ganancias, bajar el IVA y eliminarlo de los productos de la canasta básica de alimentos. Eso es lo que está pendiente en el país. Y en una Argentina de superávit fiscal permanente, no se dio ese debate, y hoy estamos atravesando una recesión donde los superávits se han achicado prácticamente a cero. De hecho, este debate es mucho más complejo y mucho más difícil.

Es falso que las retenciones agropecuarias en sí redistribuyen el ingreso. Porque yo pregunto: en Brasil no hay retenciones agropecuarias; ¿es de derecha el gobierno de Lula? En Uruguay no hay retenciones agropecuarias; ¿es de derecha el gobierno de Tabaré Vázquez? ¿Es de izquierda el gobierno ruso, que aplica retenciones agropecuarias? ¿Es de izquierda el gobierno de Uribe, que aplica retenciones al café? La retención es una herramienta político-económica importante y necesaria, y su aplicación se debe discutir a fondo.

Es fundamental que este debate se dé en el Parlamento Argentino. Es fundamental que el Parlamento tenga las facultades como para discutir tanta importancia de lo que es la aplicación de retenciones, cuando vemos que en la práctica aumenta la sojización en el país, a contramano de lo que se busca. Entonces, es un problema complejo: aumenta la concentración económica a contramano de lo que se busca. Porque hoy, lo que vemos en nuestras provincias es al pequeño productor agropecuario que no puede iniciar la cosecha porque ya está endeudado, no tiene crédito blando y no puede producir. Ese es el eslabón más débil de la cadena, porque se aplican las retenciones a todos por igual: desde el más chico hasta el *pool* de siembra. Este es el debate pendiente en el Congreso de la Nación. Por eso se han perdido posibilidades, posibilidades que deben retomarse.

Hemos recurrido al diálogo político porque pensamos que es un lugar importante de intercambio entre el gobierno nacional y el Parlamento, entre el gobierno nacional y los actores económico-sociales, y entre el gobierno nacional y los partidos políticos. Nos parece positivo que, por primera vez en seis años, se convoque a los partidos políticos de la Argentina, pero no a discutir internas abiertas, que van a ser para elegir candidatos recién dentro de dos años, sino para discutir sobre las cuestiones que necesitamos ahora. Después vendrá la ratificación, el debate y la concreción parlamentaria en leyes, para que esos acuerdos económico-sociales tengan sustentabilidad en el tiempo. Esas son las leyes verdaderas que hacen a políticas de Estado, como cuando aprobamos la Ley de Financiamiento Educativo o la Ley Nacional de Educación. Considero que estamos en un debate donde esta legislación que hoy se va a votar va en un camino absolutamente inverso al del fin que se busca.

Maquiavelo, cuando escribió *El príncipe*, hablando del poder decía: "O que me amen o que me teman". La nueva realidad es que ya no se está en ninguna de las dos situaciones: ni la de amor ni la de temor. O sea, hay que empezar a caminar otro camino: el camino de buscar acuerdos; el camino que, con los sectores populares —los partidos nacionales y populares—, busque en serio un consenso a fin de lograr el punto de inflexión en la tremenda situación económica, social y política de gran complejidad que hoy se vive el país.

Por eso, el artículo 76, cuando dice que prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, lo expresa tan claramente al indicar una serie de cuestiones fundamentales. En primer lugar, que cualquier acto de delegación legislativa debe cumplir con los requisitos del artículo 76, de lo contrario, es inconstitucional. En segundo término, que la regla general —acá se han invertido las cosas— es la prohibición de la delegación legislativa. En tercer lugar, sólo puede realizarse delegación legislativa en materia determinada de administración o

de emergencia pública. En cuarto término, que si hay delegación, necesariamente debe haber un plazo; y si hay legislación, el Congreso debe establecer las bases por las cuales se fija. En quinto lugar, que cuando caduca el plazo, no hay revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de la legislación delegada y, por lo tanto, no existe la posibilidad de ningún tipo de caos institucional. En sexto lugar, que no caduca la legislación delegada preexistente que, expresamente, se ratifica por una nueva ley.

Por eso, desde los puntos de vista jurídico, político y de lo que la sociedad ha expresado contundentemente en la urnas el pasado 28 de junio, lamento que hoy se dé un paso hacia atrás en el Parlamento nacional. Lamento que hoy se prorroguen nuevamente las facultades delegadas.

Por estas razones, tal como lo hice en 1999, 2002, 2004 y 2006, hoy, de nuevo, voy a votar negativamente esta nueva delegación de facultades.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador Morales.

Sr. Morales. — Señor presidente: en primer lugar, en oportunidad del tratamiento de una ley de estas características, en 2006, me tocó ser miembro informante por el bloque y, en ese sentido, me parece que hay que hacer una revisión de ese debate, cuyo miembro informante por la mayoría fue la actual presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner.

Como aquí se dijo, se han producido varias prórrogas a partir de la Cláusula Transitoria Octava, que fijaba un plazo. De ahí que se dicta la Ley 24967, que tiene como objetivo la realización del Digesto Jurídico que, en ese marco, trabaja todo lo atinente a la legislación delegada. Luego, como ha habido prórrogas, es necesario hacer un análisis a lo largo del tiempo, para ver cómo se estaba en 1998 y cómo pasaron once años sin contar con el Digesto y sin haber podido cumplir con la Cláusula Transitoria Octava de la Constitución Nacional.

En 1999, lógicamente, al producirse una prórroga de tres años de la obligación que se fijaba en la Cláusula Transitoria Octava, se dicta la Ley 25148, ya que todavía estaba en marcha la tarea que había encomendado la ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a realizar contrataciones para la realización del Digesto. En 2002, se sanciona otra ley que plantea otra prórroga por dos años. Es decir que esta gestión de gobierno obtiene dos prórrogas. Me refiero a que en los once años de mora que tiene el Estado argentino —el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación—, seis corresponden a la actual gestión del gobierno.

Recuerdo que, en el debate —tengo aquí la versión taquigráfica—, desde este bloque se había planteado...

— *Murmullos en el recinto.*

Sr. Presidente. — Silencio, por favor. Continúe, señor senador.

Sr. Morales. — En aquella oportunidad, habíamos planteado la necesidad de que fuera el Congreso el que trabajara, en definitiva, después de los resultados obtenidos por el Instituto Parlamentario, que había producido una conclusión sobre 1.938 leyes. La senadora Negre de Alonso bien ha especificado cómo fue terminado el análisis de la legislación delegada.

En ese contexto, habíamos planteado la creación de una comisión en el marco del Congreso de la Nación, a efectos de que tuviera a su cargo la tarea en un año. La finalidad fue que no ocurriera lo mismo que sucedió en 2006. Esto es que tres años después —como ahora— no estuviéramos tratando una prórroga de la legislación delegada.

En aquella oportunidad, la actual presidenta dijo con relación a esta propuesta de la creación de la comisión, que crear otra comisión bicameral le parecía realmente un disparate institucional. En tal sentido, la posición de la actual presidenta y la de los senadores Guinle y Pichetto —quienes defendieron sobre el final la prórroga de aquel proyecto— fue que, en definitiva, esa tarea tenía que estar —por una cuestión de capacidad orgánica— a cargo del Poder Ejecutivo. Esto es algo que, justamente, establece la Ley 24967, que no pone en cabeza del Congreso la realización del Digesto ni la determinación de las leyes que incluye dicha norma sobre la delegación legislativa. El artículo 9° de esa ley establece que el Poder Ejecutivo será el encargado de la confección del Digesto Jurídico Argentino, conforme a los principios de esa norma. Luego, se indica constituir una comisión de juristas, que es la que tendría a su cargo la tarea de control del trabajo del Poder Ejecutivo.

Entonces, sin perjuicio de las responsabilidades del Congreso, existe aquí una responsabilidad central del gobierno de la Nación en la tarea de confeccionar el Digesto Jurídico. Inclusive, en aquel debate, se dijo que la última fecha que tenía la comisión de juristas para expedirse sobre el trabajo que hizo la UBA —que presenta su informe el 31 de mayo de 2005, aunque la ex senadora Fernández de Kirchner dijo que fue en enero— era el 15 de agosto de ese año. La señora senadora Liliana Negre de Alonso ha señalado que la comisión de juristas terminó esa tarea el 28 de noviembre de 2006 y que, luego, hay un informe del doctor Sabsay a Iribarne, fechado el 7 diciembre de 2006. Es decir que ese año ya estaba concluida la tarea. Había algunas cuestiones sobre el control del trabajo que hizo la UBA, que estaban pendientes, pero el Poder Ejecutivo tenía en sus manos todas las posibilidades de establecer no sólo el Digesto sino cuáles eran las normas que tenían que enviarse al Congreso, para que fueran ratificadas o rechazadas.

Ésta es la situación. Aquí existe una responsabilidad del Poder Ejecutivo en cuanto a la realización de una tarea que le fue encomendada por la Ley 24967. Ahora bien, ¿por qué el Poder Ejecutivo envía nuevamente un proyecto y ahora sí toma la iniciativa que nosotros planteamos en aquel momento? En 2006, propusimos la creación de una comisión y que el Congreso, ante la mora de dicho Poder, se hiciera cargo de la situación. Eso fue rechazado. Lo cierto es que ahora viene una iniciativa tendiente a seguir dilatando un tema que hay que resolver a once años vista de la obligación que tenemos de acuerdo con lo que impone la Constitución.

Entonces, ¿por qué el Poder Ejecutivo no concluye el Digesto? Esto no tiene que ver con una cuestión operativa sino con una concepción que ha ratificado el Poder Ejecutivo todos estos años y que desnuda su verdadera actitud, es decir, la actitud de mantenerse, sobre la base de la delegación de facultades, con un esquema de superpoderes y sobre la base de la plena delegación de atribuciones en el jefe de Gabinete, para seguir tomando las decisiones arbitrariamente, tal como lo ha seguido haciendo. Este es un punto que tiene que ver con la responsabilidad operativa que tenía el gobierno y que no cumple. Este es un hecho objetivo, pero hay otro hecho objetivo que han marcado aquí varios legisladores, que tiene que ver con la elección.

No se trata de que no pasó nada el 28 de junio. El 28 de junio se expresó la sociedad argentina. Y, como aquí se ha dicho, la sociedad argentina fundamentalmente votó para que el gobierno pueda tener límites respecto de la arbitrariedad, respecto de los abusos en materia institucional y respecto de los abusos que ha venido cometiendo todo este tiempo. Esto es lo que votó el 70 por ciento del pueblo argentino. El 70 por ciento de la sociedad argentina le ha dicho “basta” al Poder Ejecutivo nacional. Esto es responsabilidad del gobierno. En este nuevo dato que aporta la elección, se inscriben también otras realidades que ponen en debate cuestiones institucionales tales como el conflicto del campo con el gobierno respecto de que el Congreso tiene que recuperar las atribuciones de establecer las retenciones. Son parte de los datos centrales que marcan un antes y un después, que no puede obviar, pero que el gobierno está soslayando y pasa por encima.

Después de las elecciones, se ha visto al Poder Ejecutivo vacilar un par de semanas. Parece que, como vacilaron, hicieron la convocatoria al diálogo y después dijeron: “Vamos por más”. ¡El Poder Ejecutivo dijo “vamos por más”. Por eso es que, en ese marco, se inscriben todas las cosas que están haciendo. El convenio que está anunciando la presidenta en este momento —o que está por anunciar— con la AFA para que estaticemos el fútbol argentino con un costo de 600 millones de pesos se produce cuando, por otro lado, estuvimos dos meses discutiendo si íbamos a resolver una situación que costaba 500 millones de pesos respecto del tarifazo energético, particularmente, el Decreto 2067. ¡El gobierno va por más! Están gastándose entre 200 y 300 millones de pesos mensuales en Aerolíneas Argentinas. Acaban de establecer, como política para la generación de puestos de trabajo, la asignación de 9 mil millones de pesos para seguir sosteniendo la estructura de organizaciones sociales a través de las cooperativas que van por encima de las administraciones provinciales, que van por encima de los municipios. Esto es a efectos de seguir subsidiando a las organizaciones sociales y para garantizarse las calles y las plazas.

Sabemos lo que está pasando en todas las provincias con las cooperativas que van por encima de los IPV, que tienen capacidad para controlar la calidad de las obras y que están

en el marco de las empresas constructoras y de la UOCRA. Los trabajadores están incluidos por los convenios colectivos de trabajo. El gobierno sigue apostando a la cuestión clientelista y precarizadora de las condiciones de trabajo, con esta apuesta de 9 mil millones de pesos. He visitado varios barrios en mi provincia, construidos por cooperativas que no tienen el control del Instituto Provincial de la Vivienda; son casas fuera de escuadra, con las ventanas puestas al revés y pisos colocados de cualquier forma. En definitiva, son organizaciones kirchneristas que reciben directamente los recursos del gobierno nacional. Esa es la apuesta que hace el gobierno nacional después del resultado electoral. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es que no sólo hay una responsabilidad del Poder Ejecutivo en esto sino que van por más, y no quiere resolver el problema del sector agropecuario. El tema es que no quiere resolver el problema del sector agropecuario.

La solución que propone la Unión Cívica Radical realmente es justa y no hace caer ningún andamiaje jurídico, sin perjuicio del debate técnico que aquí se dio. En el artículo 1º, decimos que se declara finalizado el plazo establecido por el artículo 1º de la Ley 26135, que es la última norma que hemos sancionado y cuya vigencia termina el 24 de este mes; también que, sin perjuicio de esto, todos los temas que tengan que ser revisados en el marco de las normas que se han sancionado anteriormente vayan a la comisión que controla los decretos de necesidad y urgencia, que es la comisión que ha creado la Ley 26122.

El artículo 3º ofrece la solución para que no haya ninguna duda, ya que lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley operará sin perjuicio de que esto importe la revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa. Es decir que tutela y protege las relaciones jurídicas preexistentes que han sido dictadas al amparo de la legislación delegada, de manera tal que se mantiene la estructura jurídica. Se le pone un freno a la delegación de facultades y se le dice al Poder Ejecutivo que, por cada tema, tiene que venir al Congreso. Entonces, la estructura jurídica de la propuesta de la Unión Cívica Radical tiene que ver con esto. Da una solución para que no haya ninguna duda de que no cae el andamiaje jurídico y le dice al Poder Ejecutivo que venga al Congreso de la Nación.

Quiero señalar que, aquí, el senador Rodríguez Saá y la senadora Negre de Alonso van por otra vía, que también es factible y con la que acordamos, aunque no es la que elegimos nosotros. Pero, sin duda, van al tema de fondo, porque hacen un trabajo detallado de cuáles son las normas que se deben ratificar.

En ese sentido, nosotros abordamos en algunos capítulos el punto central relacionado con el debate del año pasado, que es la cuestión de las retenciones. Es por ello que nosotros tomamos el criterio de los Estados Unidos, que tiene una comisión bicameral, que es la que estudia y elabora las políticas de retención y cuáles son las posiciones arancelarias que debe tener ese país, que tiene un poquitito más de comercio que nosotros. Así que, cuando hablamos de una comisión que evalúe las posiciones arancelarias y las políticas a fijar, vamos por ese camino. Por ello, planteamos la creación de esta comisión.

En definitiva, respecto de la cuestión de los aranceles para el sector agropecuario, establecemos un límite en materia de retenciones. Con respecto a la soja, hablamos de un 25 por ciento. Cabe destacar que, si vamos a discutir alguna otra cuestión, podemos discutir en particular el proyecto, ya que hay distintas iniciativas vinculadas con un esquema segmentado. Por supuesto, nos gustaría ver la propuesta del gobierno. En ese caso, en un debate posterior, podríamos tratar específicamente el tema de las retenciones para los granos —en especial, la soja, el trigo, el girasol, el maíz— respecto de los cuales planteamos situaciones límites o de las cuales el Poder Ejecutivo no se puede salir. En efecto, establecemos bandas dentro de las que debe manejarse el Poder Ejecutivo. Después, se puede tratar el proyecto de ley en particular; y allí se hablará de todo.

Digo esto porque cuando vengan a hablarnos de la caja, hablaremos de los 9.000 millones por acá, de los 600 millones por allá, de los 200 a 300 millones de todos los meses para la fiesta de Aerolíneas Argentinas. Cuando se hable de eso, hablemos de todo, de todo lo que le gusta hablar al gobierno: de la distribución del ingreso, de cómo están aplicados los subsidios, de las tarifas, de cómo gastan la plata, de los sobreprecios de la obra pública, de todos los temas que hay que hablar.

Esta es la oportunidad de decir “basta”. Y esta es la oportunidad del gobierno de decir: “hemos leído el resultado electoral”. Hasta acá, el gobierno no se notificó del resultado electoral.

Digo más, están utilizando una argucia que es bastante delicada después de una elección, que es aprovechar la mayoría circunstancial que tienen hasta el 10 de diciembre para sancionar todo este tipo de normas sin consenso. Tendrían que mirar el resultado electoral, lo que ha dicho la gente, el 70 por ciento del pueblo argentino, y comprender que cada ley que se sancione aquí debe ser consensuada, acordada y no sobre la base de la aplicación del número transitorio, circunstancial, que tienen hasta el 10 de diciembre.

Esta es la situación que nosotros observamos. Por eso, hemos realizado una propuesta que realmente trae una solución jurídica, a fin de decirle nuevamente al Poder Ejecutivo que cada tema lo envíe al Congreso y, así, restablecer para el Parlamento todas las facultades, que es lo que el pueblo argentino ha votado en las últimas elecciones.

Por ese motivo, presentamos este dictamen. Votamos en contra del proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo que establece nuevamente una delegación de facultades. Creemos que ha llegado la hora de que el gobierno acepte que el Congreso tiene que recuperar sus facultades.

Sr. Presidente (Pampuro).— Tiene la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Sanz.— Señor presidente: a riesgo de mezclar argumentos vinculados con el tratamiento de este proyecto de ley y, también, con el que vamos a debatir dentro de un rato, relacionado con la ley de administración y financiera —porque tienen argumentos parecidos—, vamos a hacer algunas reflexiones.

La primera, es a título de pregunta: ¿por qué razón una ley de ratificación y prórroga de facultades delegadas, que en otras ocasiones —años 1999, 2004 y 2006— tuvo debates simples y rápidos, hoy nos convoca a un debate mucho más profundo?

¿Es acaso que entre esas facultades está la de determinar retenciones al sector agropecuario, y que frente a un conflicto que no se resuelve a pesar del tiempo transcurrido, desde el año pasado, hay productores acá en las calles, en la puerta del Congreso, en muchas rutas del interior del país? ¿Es eso lo que obliga al largo debate?

Podría haber sido esa una pregunta al comienzo de esta sesión. Pero quiero recordarles a los señores senadores que, en horas de la mañana de hoy, hemos votado por unanimidad el CD. 34/09. Es decir, ha tenido sanción el proyecto presentado en la Cámara baja por el diputado por Buenos Aires, Francisco de Narváez. Ese sí hubiera sido motivo de una discusión profunda si el tema de retenciones fuera el origen del debate. Porque a través del artículo 4° de un proyecto de declaración de desastre y emergencia por la sequía de la provincia de Buenos Aires hemos votado por unanimidad que la producción agropecuaria originada en los distritos consignados en el artículo 1° —que me voy a eximir de leer, pero está desde Bahía Blanca, Adolfo Alsina, Daireaux, Lamadrid, Gonzáles Cháves, Pellegrini, Tornquist, Tres Arroyos, etcétera— quedará exenta de la aplicación de derechos de exportación mientras dure la declaración de desastre. Y la producción agropecuaria originada en los distritos consignados en el artículo 2°, que son prácticamente el resto de los de la rica provincia de Buenos Aires, quedará exenta del cincuenta por ciento de las alícuotas vigentes por derecho de exportación mientras dure la declaración de emergencia.

Esto, de enorme impacto fiscal, que hemos votado por unanimidad a las doce de este mediodía, a pesar de lo que se ha anunciado siempre como el gran problema del debate —de dónde vamos a sacar los recursos—, no ha tenido aquí esa profundidad en la discusión.

Y me alegro que haya sido así, porque estamos desmitificando algunas cosas. En efecto, estamos desmitificando, por ejemplo, que este Congreso no pueda tratar temas de derecho de exportación. Hoy hemos tratado la exención de derechos de exportación a la provincia de Buenos Aires. La segunda cuestión que damos por tierra es que para tratar exenciones de derecho de exportación tengamos que venir con la contrapropuesta o la contrapartida acerca de dónde van a salir los recursos. Acá no se ha hablado de contrapartida de recursos.

Y agrego una tercera cuestión que se desmitificó y que tiene que ver con que esto, siendo un proyecto presentado por un legislador opositor de la provincia de Buenos Aires en la Cámara de Diputados, ha tenido la unanimidad de la Cámara de Senadores.

La verdad: una de cal y una de arena —diríamos— en materia de discusión de derechos de exportación.

Creo que la respuesta a estas preguntas es la siguiente: lo que pasa es que hoy, en el debate, el tema no son los derechos de exportación, no son los productores en las rutas y en las calles sino que lo que hoy se debate aquí, como tantas otras veces, es el poder en la Argentina. Detrás de la discusión de facultades delegadas y del artículo 37 de la Ley de Administración Financiera, lo que se debate es el poder. Creo que discutir el poder es algo tan viejo como la política misma. Porque la política es eso: discusión del poder.

Pero hay que reconocer que en algunos lugares del mundo estas discusiones sobre política y poder están mucho más avanzadas. Así, en democracias más sólidas que las nuestras —quizá más antiguas también, es cierto— la discusión del poder no es sobre cómo se distribuye entre los distintos factores sino, en todo caso, cómo cada uno lo utiliza —con eficiencia o no— en la práctica o en la vida cotidiana. Porque en esos países se puede discutir sin otros aditamentos de políticas públicas de salud, de educación, de trabajo, de medio ambiente, pues hace mucho tiempo resolvieron el esquema de distribución de poder. Para nosotros es casi como el tema del huevo o la gallina: todavía no alcanzamos a resolver el esquema de distribución; y como no lo resolvemos y cada tanto volvemos sobre el particular, no podemos entrar en la discusión de las políticas de Estado, que es precisamente como actúan cada uno de los entes y las instituciones con el poder que se les ha distribuido.

- Ocupa la Presidencia del H. Senado el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto Cobos.

Sr. Sanz. - Mientras no lo hagamos no vamos a poder fijar reglas de juego claras, previsibles, confiables; y al no poder hacerlo, entonces por vía de la consecuencia, se afecta a la economía.

Hago una digresión. Es la primera vez en mucho tiempo en la Argentina, con tantos ciclos y tantos péndulos, que la política es la que está afectando a la economía, que la política es la que se puede llevar puesta a la economía, como dice el hombre de la calle; es decir, al revés de lo que ocurría en otras épocas, en que la economía era la que contaminaba a la política y terminaba afectando los procesos democráticos. Desde 1983 hasta acá hemos sido testigos de ello y nosotros hemos sido víctimas, desde el radicalismo, de esa otra situación.

Es probable que un taxista de esta Capital Federal o un obrero rural de Corrientes o del Chaco o una maestra de la Patagonia no sepan qué es una facultad delegada o qué dice el artículo 37 de la ley de administración financiera. Pero ellos sienten como tantos otros millones de argentinos que la política en este país no les ayuda a ser más felices. Lo que está sintiendo hoy muchísima gente es que hoy la política les muestra una cara que ellos no quieren ver, porque es la cara de la confrontación, la cara de los fracasos, la cara de los funcionarios procesados, denunciados o sospechados.

Quizá no es la manera con la que me hubiera gustado empezar estas palabras con relación a esta realidad. Pero tengo necesidad de decir estas cosas, porque no sé si todos tienen la misma percepción sobre lo que se siente en la calle, que es un creciente malhumor de toda la gente, y no sólo para con el oficialismo sino también para con la oposición, de lo cual unos y otros tendremos que hacernos cargo.

Se pueden hacer muchas cosas con la realidad, pero lo que no se puede hacer, sobre todo desde la política, es ocultarla. Tengo la convicción de que afuera de este Parlamento -no sólo me refiero a los sectores que se convocan para ciertos temas- en general hay demasiada gente con mucha bronca, con desánimo, con angustia, y muchos con la desorientación de no entender cómo no se respeta su voluntad expresada hace muy poco tiempo en las urnas. Por eso, por lo menos, vamos a tratar de encontrar algunos caminos para reflexionar en conjunto y ver si podemos salir de lo que a nuestro juicio es un encierro.

Rescato de este debate de hoy algunas circunstancias que son mejores a las ocurridas en sesiones anteriores vinculadas, por ejemplo, a las discusiones sobre facultades delegadas o superpoderes.

La primera es que venimos a discutir una cuestión de distribución de poder que, en el caso de facultades delegadas, lleva más de seis años de este gobierno, más los otros

anteriores, y que en el caso de los superpoderes o la ley de administración financiera son tres años de experiencia desde aquel debate que muchos recordarán de junio de 2006.

La segunda cuestión ventajosa es que la discusión se da en el marco de un mismo gobierno, computando como gobierno el modelo que asumió el 25 de mayo de 2003, independientemente de los cuatro años del ex presidente Kirchner y los actuales de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Y digo que es una ventaja la discusión de este tema en el marco del mismo gobierno, porque evita la eterna chicana política argentina de lanzarnos críticas entre el que está en el poder con el que se fue, o viceversa. Hoy estamos hablando de un mismo esquema de poder.

Una primera reflexión en este sentido. Los procesos de acumulación o desacumulación de poder en este país por lo menos son cíclicos. En el mismo proceso de acumulación de poder uno puede encontrar el germen o la semilla que luego da lugar a la disminución o a la pérdida de ese poder.

El debate de junio de 2006 —lo asimilo porque voy a expresar denominadores comunes con el tema de facultades delegadas y superpoderes— de la Ley de Administración Financiera simbolizó el punto culminante, la ostentación máxima del poder de este gobierno, de este modelo. Nosotros decíamos por aquella época que en esa propia ostentación de poder —que luego en el ejercicio se transformó en abuso— estaba el germen que se iba a devorar al propio modelo.

En las elecciones de junio estuvo en consideración esta cuestión del modelo, pero yo me refiero a otro tipo de modelo, no al de acumulación con redistribución, que le gusta mencionar a la presidenta. Cuando hablo de modelo hago alusión al de acumulación de poder que siempre necesitó de dos componentes que nunca antes se habían tenido en la Argentina y que este gobierno los tuvo: una caja con recursos abundantes y una enorme discrecionalidad para distribuirla.

¿Qué pasó con los recursos y con la caja en todos estos años? Ha habido un crecimiento exponencial de recursos desde los comienzos. Primero hubo recursos más genuinos, recursos tributarios que surgieron de varias fuentes. Dichos recursos fueron producto del crecimiento económico, de la inflación, de la devaluación —porque el mayor tipo de cambio aumentó la recaudación de los recursos aduaneros y permitió el cobro de retenciones—, de los mayores precios internacionales, de la menor evasión que había en aquellos momentos por el gran trabajo que venía realizando la AFIP —recuerdo los paquetes antievasión 1, 2 y 3 de cuando Alberto Abad estaba a su cargo y de cuando Horacio Castagnola era el director general de la DGI; destaco que ambos funcionarios fueron echados—, de una mayor carga tributaria, de la suba de alícuota de retenciones al agro y al petróleo, de la no actualización para el pago de Ganancias, de la eliminación de los topes para el descuento de las cargas sociales. En conclusión, el resultado fue una marea de recursos como hacía muchísimos años no se registraba en un gobierno.

En 2003 la recaudación fue de 70.000 millones y en 2008 fue de 270.000 millones; esto es casi cuatro veces más en moneda corriente, no haciendo el cálculo lineal de los recursos. En moneda corriente la recaudación se multiplicó por dos, y en dólares se multiplicó por tres: de 25.000 millones pasó a 85.000 millones. La presión tributaria —esto es recaudación nacional sobre PBI— pasó de 19 a 26, siendo la actual la mayor de la historia.

Increíblemente, semejante crecimiento de recursos no ha sido suficiente, y después de algún tiempo el gobierno comenzó a echar mano a otras fuentes de financiamiento extraordinarias que engrosaron esa marea de recursos. Estoy hablando de los fondos de jubilaciones luego de la estatización: 100.000 millones, de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central para poder financiarse con emisión: 16.000 millones, y de los depósitos del Banco Nación: 10.000 millones. Hablamos de un total de 126.000 millones en menos de un año, porque todas estas cosas se dieron en ese lapso.

Pero además de esos recursos, el modelo necesitaba discrecionalidad para distribuirlo; y aquí es en donde aparecen los temas que hoy nos ocupan. En efecto, aquí surge un combo de algo que nosotros siempre quisimos tratar en conjunto, de unos temas que nunca quisimos que su tratamiento se diese de manera individual porque todos forman parte de una

misma matriz: la ley de emergencia económica, la delegación de facultades que estamos tratando hoy, los decretos de necesidad y urgencia —que desde que el modelo instauró la interpretación constitucional, no de la excepcionalidad sino de la habitualidad, son lo que son, es decir, verdaderas leyes discrecionales con las que se aumentan fondos presupuestarios—, el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera.

Y después fueron apareciendo algunas cuestiones nuevas en este combo, como la intervención en los mercados por parte de la ONCCA —esto no lo teníamos registrado hace un par de años— y el tema de la Secretaría de Comercio sin respaldo legal alguno que lo avale.

Por supuesto que la ONCCA no tiene atribuciones para autorizar exportaciones y, sin embargo, autoriza o no autoriza discrecionalmente. Y, en el caso de la Secretaría de Comercio, la ley de abastecimiento no está vigente, no tiene respaldo, pero el titular de dicha Secretaría hace lo que se le antoja en este país.

La metodología fue siempre la misma: ahogar financieramente a los distintos sectores para tornarlos dependientes de la discrecionalidad en el manejo del dinero. Y esa discrecionalidad fue la puerta abierta para el ingreso de nuevos empresarios, capitalistas amigos del poder.

Por lo tanto, cuando se hace el repaso de la marcha de los diversos sectores de la economía, hay que tener en cuenta cómo se ahogó a las empresas de servicios públicos, tanto de energía como de transporte, para que pudieran entrar al negocio capitalistas amigos que hacía seis años eran ilustres conocidos. Seis años atrás no los conocía nadie en ninguna de las actividades, pero actualmente son grandes empresarios.

Al entrar los anteriores propietarios en ese ahogo de los servicios públicos, tuvieron que vender. En ese sentido, puede mencionarse el caso de los empresarios franceses que invirtieron en el área energética. ¿Qué pasó en estos años? ¿Dónde están los empresarios franceses que vinieron a invertir en el país?

Desde luego, ese ahogo también servía para que la subsistencia de las empresas dependiera de los subsidios del Estado. Se ahogó a las empresas de transporte hasta llevarlas a la situación de que ahora sólo pueden funcionar si los costos de explotación son subsidiados por el Estado.

También se ahogó a las provincias. En ese sentido, hay un trabajo del Instituto Argentino para el Desarrollo de las Economías Regionales —que me facilitó el senador Petcoff Naidenoff— que da cuenta de que quince jurisdicciones —de un total de veinticuatro— ya están en déficit; siete tienen encendidas luces entre amarillas y rojas —antes de fin de año entrarán en déficit—, y que apenas dos —no digo que los datos sean verdaderos, probablemente sean opinables—, San Juan y San Luis, en teoría podrían escapar de resultados tan negativos. Si estos datos fueran ciertos —quince jurisdicciones en déficit, diez que lo estarán antes de fin de año y apenas dos que, en teoría, podrían escapar de esa situación—, mostrarían el resultado de ese ahogo.

Sr. Rodríguez Saá. — ¿Me permite una interrupción, señor senador Sanz?

Sr. Sanz. — Discúlpeme, senador, no se la concedo. No quiero irme de tema.

Sr. Presidente. — Continúa en el uso de la palabra el señor senador Sanz.

Sr. Sanz. — También se ahogó al campo —un sector que todavía se resiste a depender del Estado—, a pesar de que el contexto internacional era inmejorable.

Ahora bien, frente a todos estos ahogos, la solución del modelo fue siempre recurrir a la vía discrecional de transferencias o de aportes presupuestarios: a los gobernadores, para disciplinarlos; mientras que a las empresas de energía y de transporte y a los sectores del campo concentrado, como molinos y usinas lácteas, se las ayuda a través de subsidios.

Hace veinte días, en una conferencia de prensa Débora Giorgi mostraba como una actitud valiosa y un logro del gobierno destinar más de 20 mil millones de pesos para subsidios. Esa sola decisión, en cualquier lugar del mundo hubiera merecido que se echara a patadas al secretario de Comercio Interior. ¿Por qué? Porque esos 20 mil millones de pesos no llegaron a los sectores más bajos de la producción; no llegaron a los pequeños y medianos productores de nada. La totalidad de esa suma se quedó en los ámbitos de comercialización y

de concentración de cada una de las cadenas, ya sea láctea, cárnica, etcétera. Todo se quedó allá arriba, precisamente, en los ámbitos de comercialización, área de competencia de un secretario de Comercio Interior.

Debido al fracaso de la política energética se tuvo que terminar importando a través de CAMMESA gas, fuel oil y gasoil a precios exorbitantes, justo en el momento en que el petróleo había alcanzado el valor más alto de la historia. En 2008, nada más que en ese rubro se gastaron 16.200 millones de pesos. Por supuesto, ¿cómo iba a terminar esa medida? Con un tarifazo descomunal que originó una discusión de diez días y terminó como debía ser, es decir, con el gobierno dando marcha atrás en su decisión.

El caso del transporte es paradigmático. Si alguien quiere conocer la historia del país en estos últimos años, deberá investigar el tema del transporte, la "página del transporte" como la denominamos nosotros. Desde el 2004, cada año el subsidio al transporte se fue duplicando, hasta llegar a los 9 mil millones de pesos en 2008. Pero cada año la gente viaja peor; eso se hizo pero para que la gente viaje peor.

Asimismo, se presentan proyectos faraónicos que no tienen nada que ver con la realidad de nuestro país, y que se anuncian con grandes bombos pero que a los dos meses preguntamos dónde están, y nadie sabe qué sucedió con ellos. El tren bala es un caso emblemático.

Se anuncian —y se "recontra" anuncian— proyectos que nunca se terminan de concretar —además del tren bala— y que son mucho más modestos, como el famoso soterramiento de las vías del Ferrocarril Sarmiento. Se venden como políticas públicas para la sociedad pero terminan siendo grandes negocios —en ese sentido, algún día tendremos que hablar acerca de cómo van las cuentas—, como el caso de Aerolíneas Argentinas, que tiene un déficit de 10 millones de pesos diarios.

Pero no es el tema del déficit. Me gustaría que desde el oficialismo se preguntaran algunas cosas. ¿Saben qué hace un piloto de Aerolíneas cuando tiene que tomar un curso de capacitación? Viaja a Miami, pero lo hace con familiares; va a los hoteles más caros, después se queda allí con su familia. ¿Porque no averiguan qué es lo que está pasando con Aerolíneas Argentinas? Porque uno está dispuesto a bancar, a acompañar, a pesar de que no votamos esto, en la medida en que justifiquen del otro lado que el déficit tiene que ver con otras cosas. En Aerolíneas Argentinas hay déficit que hoy no tiene explicación alguna.

Conclusión de la página *web* del transporte. El secretario de Transporte, cuando estaba en el poder, no era llamado por nadie y no conocía los pasillos de los Tribunales. Ahora, los jueces hacen cola para llamarlo a ver si va a declarar por las alrededor de veintitrés denuncias que tiene.

En cuanto a las transferencias discrecionales a las provincias, pasaron de 3.200 millones en 2003 a 15.300 millones en 2008; mientras que los subsidios al sector privado pasaron de 2.000 millones en 2003 a 31 mil millones en 2008. Es decir, todo el gasto discrecional en la Argentina que tiene que ver con el debate de hoy, facultades delegadas, superpoderes y todo lo demás, pasó de 4.200 a 46.300 millones; es decir que se multiplicó por diez.

Reitero, para nosotros la modificación del artículo 37 de la Ley 24156 fue el punto de mayor poder del modelo, pero también el punto de inflexión de la declinación donde el monstruo empezó a devorarse a sí mismo. La acumulación de poder trajo aparejada una pérdida de institucionalidad. Y esa pérdida de institucionalidad trajo aparejada una mayor imprevisibilidad, menos reglas de juego y menos transparencia. Las decisiones pasaron a tomarse en una mesa mínima, con prescindencia absoluta no sólo del Congreso sino del propio partido gobernante y hasta del mismo gabinete de ministros.

Así está el ejemplo de lo que le pasó el otro día a Cameron, ese papelón que tuvo lugar cuando hablando en favor de las tarifas se le sentó al lado el ministro y dijo: "Todo lo que este muchacho dice es mentira, nosotros damos marcha atrás." Y esto pasa con ministros, secretarios, subsecretarios. Nunca se ha visto un nivel de desorientación en funcionarios, no digo de menor rango sino de ministros para abajo, fruto de lo mismo, de la concentración absoluta en la toma de decisiones. La acumulación de poderes, entonces, trajo aparejada todas estas cosas y el paso siguiente fue el deterioro de la situación económica y social.

Desde 2006, año de aprobación de los superpoderes, hasta hoy —perdónenme si los canso pero creo que tengo derecho a decir estas cosas— se ha producido la desaceleración más alta de los últimos noventa años, porque hasta mediados de 2006 la economía crecía el 9 por ciento; hoy cae a un 3 por ciento.

En 2006 la fabricación de autos crecía al 40 por ciento; ahora cae en un 30 por ciento. La inversión, de un crecimiento superior a un 20 ahora cae en un 15. Las importaciones de equipos durables, de crecimiento del 30 por ciento caen al 50 por ciento. La pobreza creció del 27 al 32 por ciento. La verdad es que de esto hay muchas opiniones, pero ya tendremos oportunidad de debatir sobre estas cuestiones. Lo cierto es que hoy tenemos muchísimos más pobres que los que debería haber en cualquier país normal.

La desocupación pasó al 12 por ciento. Hasta finales de 2006 la inflación era del 10 por ciento. Se intervino el INDEC pero en verdad todos saben hoy que la inflación verdadera en algunos picos casi llegó al 30 por ciento en algunos momentos. El superávit primario cayó de 3,5 del PBI a mediados de 2006 a sólo 1,5 por ciento actual y a pesar de que en el medio se tuvo que recurrir a dos reformas previsionales, una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, otra del Banco Nación, para conseguir financiamiento.

Las provincias pasaron de un superávit primario de 3 mil millones a un déficit de 10 mil millones. Las provincias que son aquellas a las que nosotros representamos pasaron de tener 3 mil de más a tener 10 mil de menos. Y en ese período se fugaron del país nada más y nada menos que la misma cifra que tenemos en reservas, es decir, 45 mil millones de dólares.

El riesgo país se triplicó de 300 a casi 1000 puntos y el gobierno pasó de financiarse al 7 por ciento a expropiar los fondos de los jubilados.

¿Qué pasó con los sectores en los que el gobierno eligió intervenir? Y este es un buen dato para discutir la realidad económica.

Sector del trigo. La producción de trigo caerá un 50 por ciento este año. La mitad de esa caída se explica por una baja en la superficie cultivada de casi dos millones de hectáreas y la otra mitad por la sequía. Por lo menos, a los productores de la provincia de Buenos Aires les servirá el proyecto del diputado Francisco De Narváez, votado hoy por unanimidad.

La siembra de 2009 podría ser la menor en cien años. El saldo exportable de trigo caería más de siete millones de toneladas. Por el cierre de las exportaciones de trigo los pequeños productores debieron liquidar su producción a precio de remate, favoreciendo a los molinos y a los exportadores con capacidad de almacenamiento. Esos que protege Moreno, los molinos y todos los sectores de la comercialización.

La transferencia de ingresos de los pequeños productores hacia los molinos y las grandes empresas exportadoras se estima en 2200 millones para las últimas dos campañas. Además, se despilfarraron más de mil millones de pesos en subsidios a esos mismos molinos y el precio del pan, por supuesto último objetivo de la intervención de la Secretaría de Comercio, subió un 60 por ciento.

Leche. En dos años, el precio de la leche en el supermercado aumentó más del 75 por ciento, mientras que el tambero siguió recibiendo el mismo precio.

En mayo del 2007, los tamberos cobraban 76 centavos el litro por su materia prima y el litro en *sachet* costaba 1,70 pesos. Actualmente, los tamberos reciben lo mismo por litro de leche, pero en la góndola el litro cuesta 3 pesos. La diferencia se la apropia la cadena de comercialización, principalmente, los supermercados. Ahí donde debe influir la Secretaría de Comercio. Sólo en los últimos cinco años habrían salido del negocio cinco mil tambos; en promedio, cerraron más de ochenta por mes y solamente quedarían once mil.

Carne. La producción de carne está estancada. En 2008 tuvo el mismo nivel que en 2005: 3,12 millones de toneladas. La producción sólo pudo mantenerse por la caída del stock ganadero. El peso de faena pasó de 226 kilos en 2006 a 213 en 2008. Aumentó la proporción de hembras faenadas. En 2005, el 36 por ciento de oferta de la carne provenía de la oferta de hembras; en 2008, fue de 43 y en los primeros cinco meses del 2009 llegó al 50 por ciento del total. Nos estamos comiendo el stock ganadero del país.

En enero, el gobierno prometió instalar en noventa días cinco *feedlot* ganaderos con cuarenta mil cabezas cada uno a cargo del Estado. A la fecha, no se ha concretado

ninguno de estos proyectos. Y si no cambia la tendencia, lo cual requiere de decisiones ahora, en 2012 la Argentina tendrá que importar carne.

Hidrocarburos. Las reservas de petróleo son un 20 por ciento que hace diez años y las reservas de gas un 50 por ciento menos.

La relación producción/reservas de petróleo pasó de catorce años en 1989 a diez años en la actualidad. Y para el caso del gas, se redujo de treinta y dos a ocho años.

Con la modificación del esquema de derechos de exportación a los hidrocarburos a fines de 2007 y de las constantes intervenciones en el sector, en 2008 las cantidades exportadas cayeron un 10 por ciento, a pesar de que el petróleo alcanzó el precio histórico más alto.

Por primera vez en décadas, la Argentina pasó a importar gasoil. La exploración de nuevos pozos está estancada en el país. La plata que ganan las empresas que explotan se va a otros lados donde invierten en exploración. Acá no la invierten. Si se sigue esta tendencia, la Argentina podría ser importadora de crudo en un par de años.

La falta de un precio de mercado por las distorsiones que genera la fórmula retenciones para la venta de crudo en las refinerías generó momentos de desabastecimiento de combustible. Hoy, la verdad es que el problema está tapado. Ahora bien, ¿saben por qué está tapado? Por la recesión. Si hubiera una reactivación industrial, una reactivación de la economía, indudablemente, otra vez apareceríamos con la cuestión del desabastecimiento. Ha caído fenomenalmente la demanda de combustible y, por esa razón, no se nota la escasez.

El control de precios generó un ahogo financiero en las estaciones de servicio. No miremos hacia arriba, hacia los grandes. Vamos a las estaciones de servicio. ¿Saben cuántas estaciones de servicio han cerrado en el país? Tres mil. Eso significa la pérdida de 40 mil puestos de trabajo.

Señor presidente: aunque esto sea cansador lo debemos señalar, porque nosotros no venimos aquí a discutir con el diario del lunes. Esto lo planteamos oportunamente. Y si alguien quiere saber cuál ha sido nuestra coherencia en el discurso y en nuestra propuesta, que lea el debate de junio de 2006.

Entonces, ¿para qué necesitaban tanto poder? ¿Para qué necesitaban tanta acumulación de poder: para dárselo al inútil de Guillermo Moreno para que haga todos estos desastres? ¿Para destruir la economía? ¿Para sumir a buena parte de la sociedad nuevamente en los índices de pobreza que hoy estamos sufriendo? ¿Para eso se necesitaba tanto poder, señor presidente?

El ejemplo de la Resolución 125 es clarísimo. Si no hubiera habido facultades delegadas y si las retenciones se hubieran fijado en el Congreso, como corresponde, no habría existido dicha resolución, porque todos los legisladores hubiéramos aportado una cuota de racionalidad política y social, la cual la mesa chiquita del gobierno nunca tuvo. Y me permito aventurar un poco más. Sin la Resolución 125, el gobierno no hubiera dilapidado tan rápidamente su poder político ni, me animo a decir, hubiera perdido las elecciones del 28 de junio. Porque venía ganando elecciones y teniendo mucho apoyo popular.

Ahora bien, después de estas cosas, la reflexión es: ¿sigue siendo sostenible este modelo? ¿Se sostiene este modelo de acumulación de poder?

Nadie puede defender el sostenimiento de este modelo. No por cuestiones caprichosas o subjetivas que vemos desde la oposición, sino porque hay dos razones fundamentales. Primero, porque los recursos no son infinitos. La caja no es, como algún querido amigo del oficialismo llamaba hace algunos años, "El bolsillo del payaso". La caja no es "el bolsillo del payaso"; se termina. Es un bolsillo normal, común. Tiene fondo. Y el conflicto con el campo empezó por una rebelión fiscal frente a la voracidad del Estado.

Y la otra cuestión es que tanta acumulación de poder le terminó tendiendo al gobierno su propia trampa. En algún programa que compartí con el senador Pichetto esta semana dije algo que quiero reiterar aquí: el gobierno se empachó de tanto poder y, como todo empachado, hoy está sufriendo las consecuencias.

Pero, lamentablemente, el gobierno no entendió la situación a tiempo y recibió el cachetazo de las urnas. Por eso, hoy estamos hablando de estas cosas. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de debatir esto después del 28 de junio. La sociedad votó.

Sin embargo, ahora todos tenemos un desafío. Este es el problema: no es que uno viene aquí, hace el diagnóstico y se va tranquilo a su casa. No nos podemos ir tranquilos, porque cuando salimos a la calle nos reclaman también a nosotros, a los opositores; con razón o sin ella, y sin darse cuenta a veces de que todavía no hubo cambios aquí y que estos recién se producirán en esta casa a partir de diciembre. Por eso, también nos reclaman a nosotros.

Entonces, queremos hacernos parte de estas cuestiones. Nosotros no somos como algunos que no van al diálogo, por ejemplo, porque dicen que nunca creyeron en un diálogo con una banda de ladrones. Nosotros queremos ser parte de la solución y por eso fuimos al diálogo y vamos a seguir apostando a él, aunque para ello también decimos —al igual que el presidente de nuestro partido— que la convocatoria a un nuevo diálogo debería hacerse con otras condiciones, con otra agenda y con otras situaciones. Pero jamás nos vamos a negar al diálogo.

Sin embargo, la verdad es que a veces la realidad le da más la razón a quienes se colocan en un extremo, que a quienes pretendemos estar en un lugar de equilibrio.

Ahora bien, ¿cómo desarmamos esta maraña de subsidios sin cometer los errores recientes con las tarifas? ¿Cómo normalizamos los mercados agroalimentarios garantizando abastecimiento y precios razonables para todos los sectores? ¿Cómo devolvemos fondos a las provincias sin desfinanciar a la Nación? ¿Cómo atacamos de lleno a la pobreza desarmando el esquema clientelar y buscando los fondos dentro del presupuesto?

Estos son los grandes interrogantes que tenemos que resolver entre todos, porque tampoco —reitero— nosotros estamos en la posición de sostener que como ustedes hicieron el lío, ahora arréglenselas. Por el contrario, queremos ver como somos parte de la solución. Para eso seguimos proponiendo que, tal como vamos a proponer hoy y seguiremos diciendo toda la vida, hay que volver a las fuentes.

En este sentido, podemos decir que en una democracia hay dos fuentes que no pueden soslayarse. Nadie que se diga democrático puede saltar por sobre esas dos fuentes, barreras u obstáculos, porque el día que alguien las salta —como ocurrió en la Argentina desde 1930 en adelante— lamentablemente sucede lo que nuestra historia trágica demuestra.

La primer barrera es la voluntad popular. La primera barrera y la primer fuente a la que hay que ir es la voluntad popular. La elección del 28 de junio no fue una elección más, era en los papeles una elección de jurisdicciones para elegir legisladores que luego viniéramos al Congreso. Este gobierno y sus líderes políticos la transformaron en una elección diferente. En efecto, la transformaron en un plebiscito de gestión, la transformaron en un plebiscito de modelo, fue una elección plebiscitaria. Y uno de los pilares que se plebiscitó fue precisamente —lo han dicho varios senadores esta tarde— lo que hoy estamos discutiendo: prórroga de facultades, superpoderes, facultades extraordinarias y toda la delegación por parte del Congreso.

Y los números del plebiscito son claros: 11.115.295 argentinos, sobre un padrón de votantes de 15.992.352 argentinos se pronunciaron en contra de este modelo. Y quien eligió esta manera de leer las cosas fue el propio gobierno.

Entre tantas cosas que le he oído decir a la presidenta sobre el respeto a la voluntad popular, algunas las escuché aquí cuando se sentaba en esa banca siendo senadora y otras siendo presidenta de la Nación. Pero hay dos cosas que a mi juicio son irrefutables y tienen una contundencia fenomenal.

En primer lugar, como senadora de la Nación, aquel 12 de julio de 2006, cuando fundamentaba con su discurso los superpoderes y dirigiéndose hacia nosotros, hacia esta bancada, nos decía que la mejor garantía de la división de poderes es que la gente pueda votar cada dos años. No tengan miedo —nos decían a los radicales que objetábamos estas cuestiones— que si con esta modificación del artículo 37 este gobierno hiciera cosas tan horribles como las que ustedes piensan que puede llegar a hacer, la gente no nos va a votar, tal como les pasó a ustedes. Pues en mérito a esa voluntad popular que ella defendía como senadora, hoy le digo que 11.115.295 argentinos no votaron ni la prórroga de facultades extraordinarias, los superpoderes ni ninguna de estas cuestiones.

En segundo término, quiero destacar otra cuestión que también es muy interesante. Ella, como presidenta de la Nación, cuando firmó el proyecto que envió al Congreso para

considerar la Resolución 125, en la Exposición de Motivos decía que a nadie agrede que el Congreso de la Nación, a instancia del Poder Ejecutivo, se pronuncie en una materia en donde la discusión de interés ha cobrado inusitada relevancia. Antes bien, expresará de modo inequívoco la verdadera voluntad popular, el pleno respeto a la voluntad popular que algunos parecen no querer acatar o entender en el ejercicio de sus derechos.

Quizá sea una discusión interesante si el Congreso de hoy —el que estamos viviendo— recepte fielmente la voluntad popular del 28 de junio a la hora de votar. Nosotros nos quedamos con que la voluntad popular no es la de los números cuantitativos sino que la voluntad popular es lo que hoy el 70 por ciento de los argentinos está pidiendo.

La segunda barrera en un sistema democrático es la Constitución Nacional. Porque si alguien pensara que la voluntad popular es efímera, que la voluntad popular dura —como algunos piensan— nada más que dos años, entre una elección y otra, o que la voluntad popular dura lo que dura la elección, es decir que se agota después del mismo día de elección, en julio o en octubre, durando pocas horas, la verdad es que la Constitución Nacional —este es el gran valor de la ley de leyes— aparece como un antídoto contra la temporalidad.

Aquí y en cualquier otro lugar del mundo las constituciones son un antídoto contra esa temporalidad, porque son un ejemplo de consenso normativo. No hay Constitución Nacional que no dure si no tiene ese basamento. Mire señor presidente lo que sucedió con la Carta Magna del 49. Esa reforma no tenía el basamento del consenso y no duró. Y todas las demás, que han sido fruto del consenso —aun la del 94 que es la más cercana—, han durado.

Ahora bien, esto nos lleva también al fondo de un debate que tuvimos en junio de 2006. ¿Cuál fue el sentido de la reforma del 94? ¿Atenuar el presidencialismo o vigorizarlo? ¿Fue un acuerdo espúreo entre dos personas con intereses personales, como decía la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, en donde uno quería reelegirse y el otro quería nombrar a dos radicales en la Corte Suprema de Justicia? ¿O fue una reforma en serio votada unánimemente por todos los sectores políticos que introdujo nuevos institutos de perfeccionamiento institucional? No tendría autoridad para responder esto, porque en este recinto hay muchos senadores que fueron convencionales constituyentes en aquella época.

En 2006 este fue el centro de la discusión de los superpoderes. Como en este país todavía no nos ponemos de acuerdo en el esquema central de la distribución de poder, seguimos discutiendo hasta las propias reformas constitucionales que son votadas por unanimidad.

Bajo el criterio de una reforma pro presidencialista, que era el criterio del gobierno, este avanzó con los decretos de necesidad y urgencia, superpoderes, ley de emergencia económica y facultades delegadas. Nosotros tuvimos el criterio del presidencialismo atenuando, porque sabíamos cuál había sido la intención de por lo menos una de esas dos personas —estoy hablando de Raúl Alfonsín—, aunque se nos achacaba que había sido la de los intereses espurios. Entonces, nosotros sostuvimos lo contrario.

Ahora bien, esta es una reflexión institucional que hago para que la escuchen los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque llama la atención a esta altura de los acontecimientos que el tercer poder del Estado, que es el Judicial, no reaccione y arbitre en esta discusión.

La Corte Suprema de Justicia tiene que arbitrar, los jueces tienen que interceder porque para eso están; para eso son jueces. Ellos tienen que arbitrar cuando hay diferencias de criterio insalvables. Y tengo para mí que si la Corte Suprema de Justicia sigue pensando que la política va a resolver estas cuestiones de fondo, como lo piensa hoy, la política no lo va a poder hacer, pues son cuestiones de fondo muy profundas.

Es más, con mayorías diferentes después de diciembre, probablemente vayamos a una derogación de las facultades delegadas, de los superpoderes y de los decretos de necesidad y urgencia. La presidenta los podrá vetar y discutiremos su legitimidad, pero será legal el veto.

Entonces, cuando la política no puede resolver estas cosas, la Corte Suprema de Justicia es la que tiene que arbitrar en estas cuestiones de trascendencia, porque es una cuestión central.

¿Los decretos de necesidad y urgencia son excepcionales o son habituales? Mientras no resolvamos esto y el país esté dividido entre los que creen que son excepcionales o habituales, la política no lo va a poder resolver.

Tiro este tema a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque a veces la veo resolviendo temas tan sensibles y tan importantes académicamente para alguno de ellos, como la despenalización del consumo personal de droga, que uno también tiene derecho, humildemente, desde esta banca, de pedirles que, aunque sea en temas más ásperos que requieran arbitrar y a veces quedar mal, resuelvan esa cantidad de expedientes en donde se plantean inconstitucionalidades —y que se encuentran en los despachos de los ministros de la Corte— sobre estas cuestiones institucionales que terminan afectando a la vida de los argentinos, más que la de los consumidores de droga a título personal; aunque no niego su importancia, prefiero la otra importancia.

Para terminar, no quiero quedarme en la Corte, no quiero patearle a la Justicia los temas que la política no puede resolver; la política tiene un espacio para resolver esto. Yo escuchaba al senador Rodríguez Saá aclamando y me encanta escucharlo, porque habla desde el peronismo. Si lo decimos nosotros desde el radicalismo podemos ser sospechados de opositores. Pero ellos lo hablan desde el peronismo y me refiero a los senadores Escudero, Negre de Alonso, Reutemann, Latorre. ¡Lo hablan desde el peronismo! Ellos son los que están pidiendo diálogo. Por supuesto, mucho más nosotros.

Entonces, ¿cómo no vamos a pedir diálogo! Porque a nosotros no nos gustaría que estos temas los resolviera el Poder Judicial, nos gustaría que lo hiciera la política. Nos agrada que cambien algunas cosas en la Argentina. El poder no ha cambiado, sigue siendo tan arbitrario como en 2006; continúa siendo tan arbitrario, tan intolerante y tan avasallador como antes. El problema es que se está quedando solo. Por lo menos antes tenía el respaldo de los votos. Ahora no tiene el respaldo de los votos y en la medida en que el poder se quede solo, la política se está quedando sola.

Por eso es que, reitero, fuimos al diálogo político munidos de nuestra tremenda buena fe, para ver si podíamos colaborar, sabiendo que algún día nosotros podemos ser los continuadores de este gobierno y queremos recibir una Argentina mejor de la que nosotros les dejamos a quienes nos sucedieron en 2001/2002; y nos hacemos cargo de eso.

Y porque queremos que nos dejen una Argentina mejor, fuimos al diálogo de buena fe. Ahora bien, hoy, desde esta banca, es la primera vez que tenemos la oportunidad de hacer reflexiones después del 28 de junio, entonces, le exigimos al gobierno que modifique su actitud de encerramiento, que modifique su actitud de intolerancia, que modifique su actitud que lo ha llevado a devorarse a sí mismo. No sería nada trágico que se devorara a sí mismo, lo trágico es que nos están devorando las ilusiones y la esperanza; y eso no lo podemos permitir.

Sr. Presidente.— Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Pichetto.— Señor presidente: quiero comenzar con una breve reflexión histórica. El señor senador Sanz sabe del respeto que le tengo en lo intelectual, pero creo que cabe esta aclaración porque ha dicho algo que, indudablemente, no se ajusta a la realidad histórica que vivimos los argentinos.

La Constitución del 49 era sustentable, ponía en la superficie de la Argentina a los obreros, a los sumergidos, a los olvidados, a los sectores sociales más postergados. Además, planteaba y tenía incorporado un fuerte componente de derecho social. Era una Constitución progresista, una Constitución que fue liquidada por La Libertadora; por supuesto, por decreto, a través de una dictadura militar muy dura, que terminó reprimiendo y matando a muchos militantes sociales. Así que, creo que vale esta aclaración; de lo contrario, el silencio concede cosas que no se ajustan a la realidad.

Por otra parte, comparto algunas reflexiones sobre las reformas constitucionales y su sustentabilidad. En ese sentido, debo decir que la reforma de 1994 tiene un pecado original, que es haber liquidado el Colegio Electoral. Este es el gran drama que hoy vive la Argentina: el hecho de que la Constitución de 1994 elimina el Colegio Electoral y le da únicamente vigencia a los grandes distritos argentinos. Obviamente, esto lo tenemos que anotar entre las pérdidas.

Ahora bien, quiero hacer una reflexión sobre el problema de las democracias latinoamericanas. En general, cuando los especialistas en Derecho Político o los politólogos analizan las democracias latinoamericanas ponen el acento fuertemente en los gobiernos, en el Poder Ejecutivo, e indudablemente no analizan el rol de la oposición. En ese sentido, hay un pequeño libro muy interesante escrito por Pasquino, del cual simplemente me limitaré a leer una frase que recoge de ese gran sociólogo y politólogo que es Sartori.

En efecto, Sartori habla de una clasificación de la oposición en base a la distancia ideológica, de la fuerza partidaria, diferenciándose en oposición responsable y constitucional, oposición constitucional no responsable y oposición ni responsable ni constitucional; es decir, tres categorías de la oposición.

La irresponsabilidad de una oposición constitucional a la hora de expresar demandas sociales, de recurrir a la demagogia política o de cabalgar la protesta, puede constituir finalmente una ingobernabilidad e inestabilidad política de suma importancia en América latina. Me parece que es interesante reflexionar sobre estos temas porque, indudablemente, la oposición tiene una gran responsabilidad de no actuar con demagogia y de no actuar con irresponsabilidad política.

Después, me voy a referir a este largo racconto que hizo el senador Sanz, pero primero quiero señalar qué es lo que estamos discutiendo esta noche, porque el presidente de la Unión Cívica Radical ha hecho casi un racconto de la labor y del ejercicio del gobierno, por supuesto, desde una mirada negativa. En ese sentido, creo que hay abordajes que se deben hacer sobre los mismos temas con un fuerte contenido positivo.

Fundamentalmente, me referiré al asunto en cuestión, sobre lo que discutimos esta noche. Se trata de una necesidad del Congreso argentino frente a una tarea no cumplimentada; frente a una tarea que no hemos hecho y que tenemos que asumir.

Esta tarea se viene prorrogando en los sucesivos gobiernos constitucionales. Desde 1994, cuando le prorrogábamos al presidente Menem, ya hay normas delegadas que venían siendo facultades del Poder Ejecutivo por vía de reglamentación. Lo hicimos por cinco años.

Luego, apenas iniciado el gobierno de la Alianza, del doctor De la Rúa, este Congreso votó de manera unánime. Hay algunos discursos que merecen ponerse en un cuadro. En ese momento, en 1999, existía casi la misma estructura normativa que hoy estamos delegando, porque no nos hemos tomado el tiempo y la dedicación para el estudio detenido de cada una de las normas. Deberíamos haberlo hecho. No lo hemos hecho. En ese momento, la diputada Carrió decía: “Estamos jugando con la situación jurídica de la Argentina”.

Esta situación no se ha modificado hoy. Hay algunas otras menciones o discursos, como el del diputado Polino, que dijo que era una de las normas más importantes que íbamos a votar. Esto fue al principio del gobierno del doctor De la Rúa.

En ese momento, éramos oposición e, indudablemente, entendíamos razonable prorrogar, porque había que abocarse a un desarrollo y a una tarea que complementa, además, atribuciones propias de este Congreso junto a esta investigación y esta tarea con el Poder Ejecutivo nacional, porque se requiere de información y de la colaboración de los organismos del Estado.

En 2006, se dieron prácticamente los mismos fundamentos en cada uno de estos debates de prórroga de normas delegadas, que fueron asumidos, además, sin ningún contenido dramático en distintas coyunturas históricas. Las votamos cuando gobernaba la Argentina el doctor Carlos Menem, en tiempos de estabilidad económica —allá por el 95—, y en el marco de la crisis que se visualizaba en la época del gobierno del doctor De la Rúa. También, en momentos de crecimiento económico importante, en la época del doctor Kirchner.

El Congreso las ha votado siempre, manteniendo el estatus jurídico, el sistema jurídico normativo, la dificultad, el engorro que significa entrar a analizar dentro de las normas que el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo cuáles están vigentes, cuáles han caducado, cuáles han vencido.

En fin, se trata de una tarea que no se hizo; que comenzó a hacerse a partir de 2006, con un trabajo que se le encomendó a la Universidad Nacional de Buenos Aires, que fue la elaboración del Digesto. Se llevó adelante, y tenemos ya un material importante, porque

ese Digesto definirá claramente cuáles son las normas que ha delegado el Congreso Nacional. Asimismo, cuáles son las normas sobre las que hay que trabajar. Incluso, en un desarrollo primario de la investigación, cuáles son las que han caducado por cumplimiento de los plazos.

Además, aprovecho para descalificar el argumento de la doctora Negre de Alonso, a quien valoro jurídicamente pero con quien no comparto la opinión. No la comparto para nada, porque son conceptos que indudablemente van incorporados en el artículo 1º de la sanción de la Cámara de Diputados.

Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Estamos fijando un plazo de 240 días. Estamos armando esa comisión que pedía el senador Morales, a quien debo reconocer —le doy la derecha— que en 2006 ya planteaba la constitución de la bicameral.

Tenemos hecho el trabajo del Digesto Jurídico, en una elaboración importante que hizo la Universidad de Buenos Aires, a través de la tarea de numerosos juristas. Hay que complementar esta tarea y hay que hacer la tarea fina. Esta es la última delegación.

¿De dónde viene el debate? ¿De dónde viene la vehemencia de esta discusión que cambia la historia de esta norma que venimos delegando pacíficamente? Viene porque está, indudablemente, el tema del Código Aduanero. Esto es lo que pone un nivel de dramatismo, de cierta crispación, y aparece el discurso de la concentración del poder hegemónico. La verdad es que no estamos discutiendo eso.

Yo sí tengo una definición respecto del Código Aduanero, que no voy a silenciar; la he expresado públicamente, en programas de televisión en los que me ha tocado participar. Creo que se trata de una atribución que tiene que estar en cabeza del Poder Ejecutivo, como lo ha estado históricamente, como lo ha estado durante toda la transición democrática, porque es un instrumento de gobernabilidad. He escuchado, incluso, algunas voces de gobernadores de provincias argentinas que consideran necesario este instrumento.

La fijación de los derechos, aranceles y alícuotas de importación y de exportación es fundamental que esté en cabeza del Poder Ejecutivo, para actuar con rapidez frente a un mercado internacional muy complejo. Acá abordamos la cuestión únicamente del lado de las retenciones por exportación, pero, en realidad, es un concepto integral. También estamos hablando de los derechos de importación. Ante los cambios, ante las realidades, muchas veces ante la necesidad de proteger a la industria nacional, a la producción argentina, es imprescindible que el gobierno cuente con estos instrumentos de rápida decisión.

Esto no quita que el Congreso pueda hacer el abordaje de la cuestión, como lo hemos hecho esta tarde, en que hemos votado por unanimidad, como los aprobó la Cámara de Diputados, proyectos de emergencia sin preguntar ni analizar quiénes eran sus autores. Hemos votado la emergencia, presentada por el senador Rached, de Santiago del Estero y, también, de muchos otros senadores y de diputados, y no preguntamos quién lo hacía. Sí ratificamos que los departamentos a los que se refería el presidente de la Unión Cívica Radical, que están en estado de desastre calamitoso y comprenden a la zona sur, no están en zona sojera, sino que están en una zona de producción y están quebrados.

Vale decir que, en este tema, consideramos que el instrumento tiene que estar en cabeza del Poder Ejecutivo y, en algunos momentos, también puede ser reasumido por el Parlamento, como lo fue en el debate y discusión de la resolución 125. ¿Qué discutimos esa noche? El porcentaje de retenciones.

Por lo tanto, quiero quitarle a esta sanción de la Cámara de Diputados que vamos a votar hoy toda situación dramática. Quiero convocar fuertemente, también, a que hagamos un ejercicio de responsabilidad; a construir una estructura de pensamiento razonable en el funcionamiento del Parlamento argentino; a que instrumentos que fueron parte de los gobiernos de algunos senadores que hoy hablaron desde el rol opositor, hoy, porque están en manos del gobierno actual, se convierten en perversos, en modelos hegemónicos, en actos discrecionales, pero cuando estaban en cabeza de otros gobiernos, servían como instrumentos de gobernabilidad.

También quiero hacer algunas breves reflexiones sobre algunas de las menciones de ese largo *racconto* que hizo el presidente de la Unión Cívica Radical, para no dejarlas consentidas. Nuestro gobierno ha tenido un eje central desde que asumió, en el marco de una crisis no resuelta. Si bien la transición del doctor Duhalde había dado un primer paso en la

recuperación de las horas más dramáticas de la crisis de 2001, estaban irresueltos los principales problemas de la Argentina: la relación con el mundo, la relación con los acreedores internacionales y con los bonistas. La Argentina estaba fuera del mundo.

Indudablemente que el gobierno del doctor Kirchner, que gobernó la Argentina desde 2003 a 2007, lo hizo sin beneficio de inventario. Tuvo que asumir esa realidad y trabajar sobre esa situación de crisis, abordando niveles de desendeudamiento de las provincias. Hay que recordar en qué situación estábamos en la última etapa de la administración de la Alianza, porque de lo contrario, creemos que venimos del país de la fantasía, como si la Argentina fuera un estado de bienestar dinamarqués y, de repente, vino acá alguien perverso a gobernar el país y estamos en el marco de una crisis producto de esa perversidad.

En la última etapa de la Alianza, las provincias pagaban con bonos. Habían cruzado a la Argentina con papeles de cualquier tipo. Pagan sueldos en bonos. Ha habido una tarea de desendeudamiento, de cambio de bonos, de recuperación de la capacidad económica y de mejoramiento de la coparticipación.

Los niveles de recaudación y de coparticipación que se distribuyen hoy son notoriamente superiores a los que las provincias recibían en el marco de 2001 y 2002; y, además, comenzamos una política de desendeudamiento, con el Fondo Monetario, en primer lugar, para salir de ese esquema cautivo que el Fondo Monetario determinaba en el orden interno con políticas de ajuste. Hablo de esquemas de ajuste permanente que los gobiernos democráticos tenían que aceptar.

Recuerdo cuando tuvimos que votar —por supuesto que nosotros lo rechazamos— el descuento de haberes de la administración pública y de los jubilados argentinos. Esas eran recetas indicadas desde el Fondo Monetario Internacional y, en oportunidad del pago que hizo el gobierno del doctor Kirchner, se terminó de recibir instrucciones.

Yo recuerdo la arrogancia y la soberbia de la misión del Fondo, y aquí hay colegas senadores de la Unión Cívica Radical que nos acompañaron ese día, cuando nos recibió en el Hotel Sheraton el señor Anoop Singh y representantes del estado español que, en una recuperación de la concesión imperial de España, nos decían que había que pagar. Recuerdo la soberbia con la que nos trataron. Era un país que se caía a pedazos y tuvimos que hacerle frente a todo eso.

Podemos mencionar la refinanciación de la deuda con los bonistas y acreedores y la ley cerrojo, marcos normativos que fueron un paso adelante. Hubo un proceso de crecimiento económico continuo.

Recién, el senador Sanz mencionó que este año vamos a tener un 3 por ciento de crecimiento. No está mal, teniendo en cuenta que estamos en el marco de una crisis internacional, de una crisis que no fue mencionada en ninguno de los debates y de los discursos que han dado los señores senadores que han hablado con anterioridad, que impacta de manera demoledora en los estados modernos desarrollados. En España, hay cuatro millones ochocientos mil desocupados, y siguen en crecimiento, porque la estructura económica española, fundada fundamentalmente en la obra pública y el turismo, tiene un impacto demoledor en orden al sostenimiento del empleo y, también, porque además se le están acabando los subsidios de la Comunidad Europea.

Veamos lo que está pasando en algunos países de América Latina. Se habló de la pobreza, y más pobreza que en 2001 y 2002 no hubo nunca en la Argentina. La gente tomaba los supermercados; la gente salía a la calle con violencia a pedir comida. Ahí había pobreza.

Hay estadísticas que se hacen también con sentido oportunista, desde una visión de intromisión en el funcionamiento del Estado. Porque —y voy a decir algo a título personal, no voy a hacer cargo al bloque de mi posición— considero que la Iglesia tiene una misión pastoral y que la profundidad del mensaje pastoral es muy importante para los argentinos, pero cuando incorpora el contenido político se equivoca.

Según esa estadística, se trata de un 40 por ciento, "más o menos", dijo el vocero de la Iglesia el otro día. Por supuesto, es un escándalo. En ese sentido, se producen muchos escándalos en el ámbito de la Iglesia —por una cuestión de prudencia, no los mencionaré— que, a veces, son fuertemente silenciados.

Considero que hay que ser justos y, también, tener equilibrio en el desarrollo del análisis político de este momento. Muchos senadores reclamaron "tienen que leer las urnas" o "tienen que recibir el mensaje de las urnas". Evidentemente, no analizaron el sistema político argentino; pareciera que algunos confunden nuestro sistema con el sistema parlamentario europeo. En los países europeos, especialmente en Francia, cuando hay un cambio democrático, la modificación en el Parlamento determina un cambio en el Ejecutivo, en la figura del primer ministro. Por lo tanto, muchas veces, gobernando el socialismo, ha habido una cohabitación con un ministro de derecha o de centroderecha. Por ejemplo, Mitterrand tuvo que gobernar en cohabitación con Balladur, que era el hombre impuesto por Jacques Chirac como jefe de partido. Indudablemente, ese sistema contiene la respuesta democrática e incorpora los cambios de manera inmediata.

En virtud del sistema público argentino —el sistema constitucional argentino—, este gobierno fue votado en 2007 para gobernar por cuatro años. Y, por supuesto, el gobierno tiene el deber de impulsar su plan de gobierno y mantener sus posiciones, salvo que la realidad determine lo contrario. El marco del Congreso y las composiciones de mayorías y de minorías quizás determinen, en algún momento, los límites a los proyectos o iniciativas. Eso puede ocurrir; a lo mejor sucede, es un dato que podemos asumir. Indudablemente habrá cambios.

Ahora bien, el gobierno deberá desarrollar su gestión hasta el 10 de diciembre de 2011; a no ser que algunos quieran que termine antes. A lo mejor, algunos piensan que el gobierno ya finalizó o algunos no quieren que siga. En la Argentina, algunos quieren eso; quisieran que el gobierno se fuera antes. Pero este gobierno tiene plenitud y facultades plenas para llevar adelante su plan de gobierno y cumplirlo hasta 2011, porque así está estipulado en el proceso político-institucional de la Argentina. La presidenta fue elegida por cuatro años y tiene todas las facultades y atribuciones propias para administrar la Argentina, y tratar de impulsar su plan de gobierno, que fue votado por los argentinos en 2007 cuando la eligieron presidenta.

Es indudable que hay que leer lo que sucedió en las últimas elecciones; verdaderamente, hay que leer lo pasó. En muchas elecciones de medio tiempo en la Argentina, el gobierno pierde la mayoría parlamentaria; por ejemplo, el doctor Menem —quien se encuentra aquí—, en 1997, perdió las elecciones, y su partido quedó en minoría parlamentaria. Por lo tanto, eso puede ocurrir y ha ocurrido. Es más, De la Rúa perdió en 2001; pero no se fue por la derrota parlamentaria sino por una crisis; no quiero analizar situaciones que son propias de otro partido, pero esa resolución tuvo un marco mucho más complejo.

Además, esto demuestra otra cosa sobre la cual hay que reflexionar: los golpes, las salidas institucionales —las salidas en las democracias latinoamericanas— no se dan a la vieja usanza de la intervención militar, sino a través de movimientos populares en las calles. Eso sucedió en algunos países latinoamericanos que nos circundan.

Los conflictos sociales son los que muchas veces producen la crisis institucional, al amparo de demandas insatisfechas. En ese sentido, en esta Argentina, todo el mundo está insatisfecho. Además, hay una multiplicidad de información altamente negativa. No estoy haciéndoles el cargo a los medios; simplemente, digo que hay una visión extremadamente negativa de todos los temas argentinos. Creo que, a veces, hay una visión autodestructiva de nuestras propias posibilidades como país. A veces, hay sectores que no tienen una visión nacional sobre los problemas. A veces, es mejor derrotar al gobierno, aunque le vaya mal al país, porque lo importante es derrotar al gobierno.

Ese espíritu está flotando en la Argentina de este tiempo. Esta sensación de una oposición exacerbada que no plantea un debate racional sobre los temas. Un sector agropecuario que nunca está satisfecho con nada. Hoy parecía que querían tomar el Palacio de Invierno; había doscientos manifestantes en la avenida Entre Ríos, que cruzaron las vallas. Menos mal que hacemos un ejercicio democrático en este Senado, sin bandas y sin tribunas que ofendan a cada uno de los senadores presentes, ni caras o imágenes que la televisión toma, también, de manera irresponsable afectando las instituciones del país.

Hemos aprendido que hay cosas que no se deben hacer, que cada senador tiene derecho a decir lo que realmente piensa y que lo tiene que hacer con toda la libertad; y lo hicimos nosotros, todos juntos; no es una decisión individual del que habla, ha sido una decisión del conjunto compartida por todos los bloques. Lo hicimos en el momento de mayor presión, en el tratamiento de la resolución 125, donde pudimos debatir con libertad y con plena capacidad de decir sin ningún tipo de intimidación de la tribuna, que además configura un espacio de bochorno para la democracia argentina y para el sistema de representación política.

Porque hay algunos que creen que pueden alterar el sistema democrático. Acá, cualquiera corta una ruta, cualquiera reclama cosas, cualquiera cree que tiene derecho a denigrar a un legislador, a pedirle que renuncie, a bravuconear con la prensa y, además, hay medios que los toman y los ponen en la televisión como si fueran héroes modernos, cuando muchas veces son personajes patéticos de esta Argentina.

En fin, lo que quiero decirle al senador Sanz es que nuestro gobierno ha sostenido una política de incentivo del consumo, que lo ha hecho a través del mecanismo del subsidio a todos los servicios públicos, a la luz, al gas, al transporte, en el entendimiento de que eso significaba mayor dinero y mayores recursos para los argentinos para aplicar al proceso de crecimiento.

Le quiero decir también que, en materia de energía y de gas, se han hecho inversiones extraordinarias, se ha recuperado el sentido estratégico de la inversión nuclear al recuperar Atucha I y Atucha II, se están haciendo gasoductos, se están haciendo obras importantes de tendido eléctrico en el país.

Lo que también ha ocurrido, señor presidente, es que cabalgando el proceso de crecimiento del país, ha crecido la demanda y hemos cometido errores gravísimos en este país que nadie dice. Hablando de gas, la Argentina ha permitido un desarrollo de la conexión a gas al sistema automotriz, a vehículos de alta gama, vehículos de transporte público de pasajeros como los taxis, camionetas que se utilizan en el sector agropecuario, 4 por 4; 5 por 20, qué se yo. Todo tipo de vehículos tienen hoy conexión de gas, como si nosotros tuviéramos gas para tirar para arriba.

Establecimos también un sistema de exportación alegre en un momento donde no había un consumo tan importante. Yo no voy a descalificar la decisión que tomó el ex presidente Menem, que lo hizo en el marco de la integración latinoamericana, pero en ese momento, teníamos excedentes. Si bien es cierto que hubo modernización e inversión en la etapa del 90, indudablemente, la continuidad de un modelo de convertibilidad terminó siendo negativo en términos de rentabilidad de los sectores de la producción industrial y, también del sector agropecuario. Esto determinó la inexistencia de un alto nivel de consumo industrial y mucho menos domiciliario, porque, también, las redes domiciliarias en la última década han crecido de manera desbordante.

Debo decir que, en este tema de las privatizaciones, no todo lo que se hizo en ese aspecto fue malo. La privatización del sistema eléctrico así como la del gas fueron de los mejores hechos en el país. Se hicieron de manera muy eficiente, estableciendo esquemas de competencia en el sentido de que los que generaban no podían distribuir y tratando de articular los sectores y subsectores. Reitero: creo que fue un buen modelo de privatización. Pero, indudablemente, el crecimiento desmedido del consumo domiciliario y el no incremento de tarifas producto de una decisión política tendiente a aumentar los niveles de consumo de la clase trabajadora llevaron a la necesidad de importaciones. Es una política que reivindico y que, a partir de la decisión de la señora presidenta, habrá que revisar en serio mediante un análisis responsable y gradual a fin de que impacte verdaderamente en los grandes usuarios domiciliarios y no en un jubilado. Es una tarea que también debe abordarse con seriedad.

El consumo de gas en la Argentina comprende aproximadamente... ¿un 95 por ciento?

Sr. Gioja. — Un 93 por ciento.

Sr. Pichetto. — Noventa y tres por ciento. Hay un 7 por ciento que nos falta.

Sr. Morales. — Menos del 5 por ciento.

Sr. Pichetto. — Está bien, 5 ó 7 por ciento, aproximadamente; no importa. Indudablemente, esto provocó que hubiera importaciones para atender la demanda. El senador Gioja, presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, me apunta el número de 7 millones de metros cúbicos.

Sabemos que hay denuncias públicas y cosas que se revisan en los tribunales, pero reivindicamos el sentido político de la toma de decisión. A mí me parece que esto es lo central: una política que ha sido, fundamentalmente, la que ha permitido la recuperación y el proceso de mayor capacidad económica.

Van seis años de discusión paritaria; de discusión libre de salarios entre sindicatos y empresarios; actualización de salarios todos los años; valorización de los gremios. En fin, hay un conjunto de temas importantes pero no quiero ser extenso en mi exposición, señor presidente.

Indudablemente —en algún momento, daremos el debate en este lugar—, hay temas que implican analizar a pleno lo que fue y son la acción y el rumbo del gobierno que encabeza la actual señora presidenta. En algún momento lo vamos a dar; no tengo ningún problema con eso. Pero cuando se tiran datos o se arman discursos que implican construcción de un mensaje opositor —que es legítimo que se haga—, a veces, no se ajustan a la realidad.

Reitero, señor presidente, que se está votando una delegación. Hubo un compromiso de hacer una tarea por 240 días. Vamos a integrar una comisión bicameral de 16 miembros —ocho senadores y ocho diputados— a fin de terminar con estas delegaciones.

Finalmente, una reflexión más: el tema de las normas delegadas no es un problema del hegemonismo del gobierno, como lo denuncia el senador Sanz. Cuando uno analiza el funcionamiento institucional de los Estados modernos se da cuenta de que las normas delegadas existen en todos los países del mundo. Así sucede en Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y España. El sentido estático de la división de poderes, de que todas las cosas vinculadas con las normas deben pasar por el Parlamento, significa no comprender un proceso de cambio y de modernización que se ha dado en los Estados, donde los Estados modernos deben dar respuesta a infinidad de acontecimientos cotidianos que indudablemente requiere de parlamentos con una mirada más flexible.

Hay una tendencia en los parlamentos de Europa y en países serios como Estados Unidos, que tiene todo un desarrollo intelectual como los del juez Marshall, a utilizar las normas delegativas. Estas constituyen el escenario de un universo que ha ido creciendo en el mundo, es decir, una tendencia al aumento del poder en el seno del Ejecutivo. Es una tendencia —reitero— que se da en todos los países modernos y que resulta muy difícil que se resuelva en sentido contrario.

El Parlamento no puede abordar todos los temas. No puede ser un Parlamento universal y polifuncional que brinde respuesta inmediata a todos los requerimientos de un Estado moderno. Esto es lo que está en el eje central del debate ideológico y político de la norma delegada. No es patrimonio de los argentinos; no es patrimonio de la Constitución del 94; no es una creación pretoriana de algunas mentes discrecionales del país. Es una tendencia del mundo. Bueno, ni hablar de las provincias argentinas. La mayoría de los gobiernos provinciales tiene estas atribuciones, y yo no los descalifico. Considero que es un instrumento de gobierno, un requisito central, como el otro tema que vamos a abordar. Por eso me hubiera gustado tratarlo—como dijo el senador Sanz— en un combo, con la mal denominada “ley de superpoderes”.

Todos tienen la facultad de reasignar partidas; de reubicar el presupuesto; de atender emergencias, contingencias y exigencias nuevas que se plantean, a lo mejor, de un día para el otro. Son casos en los que, indudablemente, la convocatoria al Congreso implica un debate más arduo y más complejo que la situación no puede esperar.

El tema de las normas delegadas está siendo abordado, a nivel jurídico y doctrinario, por los especialistas de todo el mundo moderno. En Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en Francia y en España existe un universo que se amplía cada vez más para los poderes ejecutivos. Son instrumentos imprescindibles para poder gobernar el país.

Por todos los argumentos expuestos, señor presidente, desdramatizando el tema, considerando que estamos actuando con responsabilidad, abriendo un compromiso de trabajo por 240 días para terminar con estas normas delegadas, finalizar con el concepto de prórroga y ver qué hay en ese universo, vamos a pedir la aprobación en general y en particular de este proyecto.

Sr. Presidente. — Corresponde votar los pedidos de inserción solicitados.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

— *Se practica la votación.*

Sr. Presidente. — Aprobado.¹⁴

Pido a los señores senadores que se identifiquen, dado que vamos a votar en general y en particular, en una sola votación.

— *Se practica la votación por medios electrónicos.*

Sr. Secretario (Estrada). — Se registran 38 votos por la afirmativa y 30 por la negativa.

— *El resultado de la votación surge del [Acta N° 6](#)*⁵

Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.¹⁶

¹⁴ Ver el Apéndice.

¹⁵ Ver el Apéndice.

¹⁶ Ver el Apéndice.



V o t a c i ó n N o m i n a l

127º Período Legislativo - Ordinario - 7º Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN RATIFICANDO EN EL PODER EJECUTIVO NACIONAL POR EL PLAZO DE UN AÑO, LA TOTALIDAD DE LA DELEGACIÓN LEGISLATIVA SOBRE MATERIAS DETERMINADAS DE ADMINISTRACIÓN O SITUACIONES DE EMERGENCIA PÚBLICA

ORDEN DEL DÍA 293
(CD-49/09)

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: Dictamen de mayoría

Acta N°: 6	Fecha: 20-08-09	Hora: 19:46
Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo	Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes	Miembros del Cuerpo: 72
Presidente: COBOS, Julio C.	Desempate: NO	

Presentes Identificados:	68	Votos afirmativos:	38
Presentes No Identificados:	-	Votos Negativos:	30
Total Presentes:	68	Abstenciones:	-
Ausentes:	4		
Votos Afirmativos Necesarios:	35	RESULTADO de la VOTACIÓN	AFIRMATIVA




JUAN JOSE CANALS
PROSECRETARIO PARLAMENTARIO
H. SENADO DE LA NACION



V o t a c i ó n N o m i n a l

127° Período Legislativo - Ordinario - 7° Sesión

DICTAMEN EN EL PROYECTO DE LEY EN REVISIÓN RATIFICANDO EN EL PODER EJECUTIVO NACIONAL POR EL PLAZO DE UN AÑO, LA TOTALIDAD DE LA DELEGACIÓN LEGISLATIVA SOBRE MATERIAS DETERMINADAS DE ADMINISTRACIÓN O SITUACIONES DE EMERGENCIA PÚBLICA

ORDEN DEL DÍA 293
(CD-49/09)

VOTACIÓN EN GENERAL Y EN PARTICULAR

Observaciones: Dictamen de mayoría

Acta N°: 6

Fecha: 20-08-09

Hora: 19:46

Tipo de Quórum: mas de la mitad de los miembros del cuerpo

Mayoría Requerida: mas de la mitad de los presentes

Miembros del Cuerpo: 72

Presidente: COBOS, Julio C.

Desempate: NO

Apellido y Nombre	VOTO	Apellido y Nombre	VOTO
BANICEVICH, Jorge Esteban	AFIRMATIVO	MAYANS, José Miguel Angel	AFIRMATIVO
BASUALDO, Roberto Gustavo	NEGATIVO	MAZA, Ada	AFIRMATIVO
BIANCALANI, Fabio Darío	AFIRMATIVO	MENEM, Carlos Saúl	NEGATIVO
BONGIORNO, María José	NEGATIVO	MIRANDA, Julio Antonio	AFIRMATIVO
BORTOLOZZI, Adriana Raquel	AFIRMATIVO	MORALES, Gerardo Ruben	NEGATIVO
CABANCHIK, Samuel Manuel	NEGATIVO	NEGRE DE ALONSO, Liliana Teresita	NEGATIVO
CALCAGNO Y MAILLMAN, Eric	AFIRMATIVO	NIKISCH, Roy Abelardo	NEGATIVO
CASTILLO, Oscar Aníbal	NEGATIVO	OSUNA, Blanca Inés	AFIRMATIVO
COLAZO, Mario Jorge	AFIRMATIVO	PAMPURO, José Juan Bautista	AFIRMATIVO
COLOMBO DE ACEVEDO, María T	NEGATIVO	PARRILLI, Nanci María Agustina	AFIRMATIVO
CORRADI de BELTRÁN, Ana María	AFIRMATIVO	PERCEVAL, María Cristina	AFIRMATIVO
CORREGIDO, Elena Mercedes	AFIRMATIVO	PEREZ ALSINA, Juan Agustín	NEGATIVO
DIAZ, María Rosa	AFIRMATIVO	PERSICO, Daniel Raúl	AFIRMATIVO
ESCUDERO, Sonia Margarita	NEGATIVO	PETCOFF NAIDENOFF, Luis Carlos	NEGATIVO
ESTENSSORO, María Eugenia	NEGATIVO	PICHETTO, Miguel Angel	AFIRMATIVO
FELLNER, Liliana Beatriz	AFIRMATIVO	PINCHETTI de SIERRA M. Delia	NEGATIVO
FERNANDEZ, Nicolas Alejandro	AFIRMATIVO	QUINTELA, Teresita Nicolasa	AFIRMATIVO
FILMUS, Daniel Fernando	AFIRMATIVO	RACHED, Emilio Alberto	NEGATIVO
FUENTES, Marcelo Jorge	AFIRMATIVO	REUTEMANN, Carlos Alberto	NEGATIVO
GALLEGO, Silvia Ester	AFIRMATIVO	RIOFRIO, Marina Raquel	AFIRMATIVO
GIOJA, César Ambrosio	AFIRMATIVO	RÍOS, Roberto Fabián	AFIRMATIVO
GIRI, Haide Delia	AUSENTE	RODRIGUEZ SAA, Adolfo	NEGATIVO
GIUSTI, Silvia Ester	AFIRMATIVO	ROMERO, Juan Carlos	NEGATIVO
GIUSTINIANI, Rubén Héctor	NEGATIVO	ROSSI, Carlos Alberto	NEGATIVO
GONZALEZ de DUHALDE, Hilda B.	NEGATIVO	SAADI, Ramón Eduardo	NEGATIVO
GUASTAVINO, Pedro Guillermo Angel	AFIRMATIVO	SALAZAR, Carlos E.	NEGATIVO
GUINLE, Marcelo Alejandro	AFIRMATIVO	SANCHEZ, María Dora	NEGATIVO
ITURREZ de CAPELLINI, Ada Rosa	AFIRMATIVO	SANZ, Ernesto Ricardo	NEGATIVO
JENEFES, Guillermo Raúl	AFIRMATIVO	TORRES, Eduardo Enrique	AFIRMATIVO
LATORRE, Roxana Itatí	NEGATIVO	TROADELLO, Mónica	AFIRMATIVO
LORES, Horacio	AFIRMATIVO	URQUIA, Roberto Daniel	AUSENTE
MARIN, Rubén Hugo	AFIRMATIVO	VERA, Arturo	NEGATIVO
MARINO, Juan Carlos	NEGATIVO	VERANI, Pablo	NEGATIVO
MARTINEZ, Alfredo Anselmo	NEGATIVO	VIANA, Luis Alberto	AFIRMATIVO
MARTINEZ, José Carlos	AFIRMATIVO	VIGO, Elida María	AUSENTE
MASSONI, Norberto	AUSENTE	VIUDES, Isabel Josefa	AFIRMATIVO